

LOS MOVIMIENTOS CIVICOS EN COLOMBIA  
EL CASO DE EL PEÑOL Y GUATAPE

SOC. ORLANDO SAENZ ZAPATA

TESIS DE GRADO  
MAESTRIA EN DESARROLLO URBANO  
PROMOCION 1980/82

EL COLEGIO DE MEXICO  
CENTRO DE ESTUDIOS DEMOGRAFICOS Y DE DESARROLLO URBANO  
MEXICO D.F., MAYO DE 1988

## CONTENIDO

0.	INTRODUCCION .....	4
1.	LOS MOVIMIENTOS POPULARES URBANOS EN COLOMBIA .....	9
1.2.	TEORIA DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES URBANOS .....	10
1.3.	ESTUDIO DE LOS MOVIMIENTOS CIVICOS .....	22
1.4.	BOSQUEJO HISTORICO DE LOS MOVIMIENTOS CIVICOS .....	29
	REFERENCIAS .....	46
2.	LA INDUSTRIALIZACION Y LA URBANIZACION EN ANTIOQUIA .....	49
2.1.	DESEQUILIBRIOS DEL DESARROLLO REGIONAL EN COLOMBIA .....	49
2.2.	DESPEGUE DE LA INDUSTRIA ANTIOQUEÑA 1900-30 .....	53
2.3.	DESARROLLO INDUSTRIAL POR SUSTITUCION DE IMPORTACIONES 1930-45 .....	57
2.4.	INDUSTRIALIZACION Y CRECIMIENTO ACELERADO DE MEDELLIN 1945-64 .....	61
2.5.	MODELO EXPORTADOR Y METROPOLIZACION DEL VALLE DE ABURRA 1964-74 .....	66
2.6.	INESTABILIDAD ECONOMICA Y EXPANSION HACIA EL ORIENTE 1974-82 .....	75
	REFERENCIAS .....	82
3.	EL PROYECTO HIDROELECTRICO DEL NARE .....	83
3.1.	ESTUDIOS PRELIMINARES Y PROYECTOS PARA EL RIO NARE 1930-64 .....	83
3.2.	CONSTRUCCION DE LA OBRAS DEL PROYECTO NARE 1964-80 .....	89
3.3.	CARACTERISTICAS TECNICAS GENERALES DE LA CENTRAL DE GUATAPE .....	92
3.4.	EFFECTOS ECONOMICOS Y SOCIALES DEL PROYECTO NARE-GUATAPE .....	97
	REFERENCIAS .....	105

4.	EL MOVIMIENTO CIVICO DE EL PEÑOL Y GUATAPE .....	106
4.1.	PRIMEROS CONFLICTOS CON LOS POBLADORES 1960-64 .....	106
4.2.	NEGOCIACIONES POR EL CONTRATO MAESTRO 1964-69 .....	111
4.3.	PAROS CIVICOS EN GUATAPE Y EL PEÑOL 1969-70 .....	118
4.4.	NUEVAS NEGOCIACIONES CON EMPRESAS PUBLICAS 1970-75 .....	127
4.5.	AGUDIZACION DEL CONFLICTO EN EL PEÑOL 1975-78 .....	133
4.6.	NUEVOS PAROS CIVICOS EN GUATAPE Y EL PEÑOL 1978 .....	138
4.7.	REFLUJO DEL MOVIMIENTO CIVICO 1978-82 .....	147
	REFERENCIAS .....	155
5.	LOS MOVIMIENTOS CIVICOS EN COLOMBIA .....	157
5.1.	CONDICIONES SOCIO-HISTORICAS DE SURGIMIENTO .....	158
5.2.	CAUSAS Y REIVINDICACIONES INMEDIATAS .....	164
5.3.	COMPOSICION SOCIAL Y NIVEL ORGANIZATIVO .....	169
5.4.	FORMAS DE LUCHA Y RESPUESTAS DEL ESTADO .....	173
5.5.	EFFECTOS SOCIALES Y POLITICOS DE LAS MOVILIZACIONES .....	183
	REFERENCIAS .....	191

## LOS MOVIMIENTOS CIVICOS EN COLOMBIA EL CASO DE EL PEÑOL Y GUATAPE

### INTRODUCCION

A comienzos de la década del sesenta las Empresas Públicas de Medellín emprendieron la construcción de la mas grande hidroeléctrica del país en esa época. La Central del Nare incrementaría notablemente la capacidad de generación eléctrica en Colombia y subsanaría el déficit energético hasta los años ochenta. Con ella Antioquia consolidaba su posición de primer departamento productor de energía y las Empresas conservaban su imagen de entidad líder del sector eléctrico nacional.

Menos promisorias eran las perspectivas para los pobladores y campesinos de la región en la que se construiría la Central del Nare. El proyecto implicaba la construcción de un inmenso embalse que almacenaría 1.200 millones de metros cúbicos de agua e inundaría gran parte de los territorios de varios municipios del Oriente del Departamento de Antioquia. Mas grave aún era que la represa de Santa Rita cubriría totalmente la cabecera municipal de El Peñol y parcialmente el casco urbano del municipio de Guatapé. Esto lógicamente traería consigo una gran cantidad de problemas de todo orden que afectarían dramáticamente las condiciones de vida y de trabajo de los habitantes de esos municipios.

De esta manera, la construcción de la Central Hidroeléctrica del río Nare no fué solo la realización de un ambicioso proyecto que generó energía para el Departamento de Antioquia y todo el país; se constituyó también en la causa inmediata de un

prolongado e intenso conflicto social que enfrentó a los pobladores contra la empresa estatal por mas de veinte años.

Pero el movimiento cívico de El Peñol y Guatapé no es el único en Colombia que se ha generado como consecuencia de la ejecución de un gran proyecto hidroeléctrico. Conflictos semejantes han tenido lugar en el mismo Oriente Antioqueño y en otras regiones del país donde se construyen centrales y embalses de gran magnitud. Así por ejemplo: la Central de San Carlos originó violentos enfrentamientos de los pobladores de San Rafael y San Carlos (Antioquia) con Interconexión Eléctrica S.A.; la Central de Chivor enfrentó nuevamente a ISA con los municipios de Santa María, Chivor, Almeida y San Luis Gaceno (Boyacá); la Central del Guavio motivó otro conflicto de los habitantes de Gachetá y Gachalá (Cundinamarca) con la Empresa de Energía de Bogotá; y la Central de Salvajina es actualmente fuente de problemas que movilizan a los pobladores de la localidad de Suárez (Cauca) contra la Corporación Autónoma Regional del Cauca. En general, los grandes proyectos hidroeléctricos en nuestro medio han provocado la movilización de los habitantes de los municipios afectados contra las empresas estatales propietarias de las centrales y embalses.

Siendo pues una problemática nacional, y no simplemente local, el caso de El Peñol y Guatapé es ampliamente ilustrativo de los movimientos de pobladores contra las grandes centrales hidroeléctricas. Pero, como se mostrará en el curso del análisis, este caso es representativo también de los movimientos cívicos realizados en los pequeños municipios colombianos que constituyen precisamente la gran mayoría de los movimientos de este tipo. De ahí la importancia de su estudio para ampliar el conocimiento sobre los movimientos cívicos en Colombia.

En este sentido, el presente trabajo se propone hacer la descripción y análisis del movimiento de pobladores de los

municipios de El Peñol y Guatapé buscando aportar nuevos elementos para una mejor comprensión del fenómeno general de los movimientos cívicos. Aunque se parte de un caso específico, el objetivo de este estudio es en último término avanzar en el conocimiento de esa modalidad de lucha urbana que en Colombia representan los movimientos cívicos.

Con tal propósito el trabajo comienza presentando un bosquejo general de los movimientos populares urbanos en Colombia. En su primer punto se explicita la perspectiva teórica desde la cual se aborda el análisis del caso particular; para ello se trata de exponer lo mas sistemáticamente posible los elementos básicos que definen los movimientos sociales urbanos. Con esta base se intenta luego una rápida evaluación de lo que ha sido hasta ahora la investigación sobre este tema en Colombia. Y finalmente se hace un recuento histórico del desarrollo de los movimientos cívicos durante las últimas décadas. Así el primer capítulo permite comprender el contexto teórico y social mas amplio en el que se realiza este estudio.

El segundo capítulo da cuenta mas específicamente de la coyuntura histórica en la que surgen el Proyecto Hidroeléctrico del rio Nare y el movimiento cívico de los municipios de El Peñol y Guatapé. Como allí se demuestra, uno y otro son resultado directo de los acelerados proceso de industrialización y urbanización de la ciudad de Medellín en el curso de este siglo. Tanto la Central del Nare como el movimiento social al que dió origen hacen parte del proceso de expansión del área metropolitana del Valle de Aburrá sobre la cercana subregión del Oriente Antioqueño.

Los dos capítulos siguientes se ocupan del caso particular del movimiento de pobladores de El Peñol y Guatapé. La idea es presentar ambos polos de la confrontación: de un lado, la causa inmediata del movimiento y el agente estatal que aparece como

adversario principal de los pobladores; del otro, el propio movimiento cívico que se toma como caso representativo. En el tercer capítulo se hace entonces una reseña de las circunstancias en las que se gesta y realiza el proyecto para el aprovechamiento hidroeléctrico del Rio Nare; asimismo en este capítulo se describen las características técnicas generales de la obras y se enumeran sus mas importantes efectos económicos y sociales sobre la subregión en la que se localizan. El capítulo cuarto está dedicado al seguimiento de la rica historia del movimiento de El Peñol y Guatapé a través de sus diferentes etapas de desarrollo; de ellas se destacan especialmente las fases de negociación y enfrentamiento directo que en general caracterizan el curso habitual de los movimientos cívicos en Colombia.

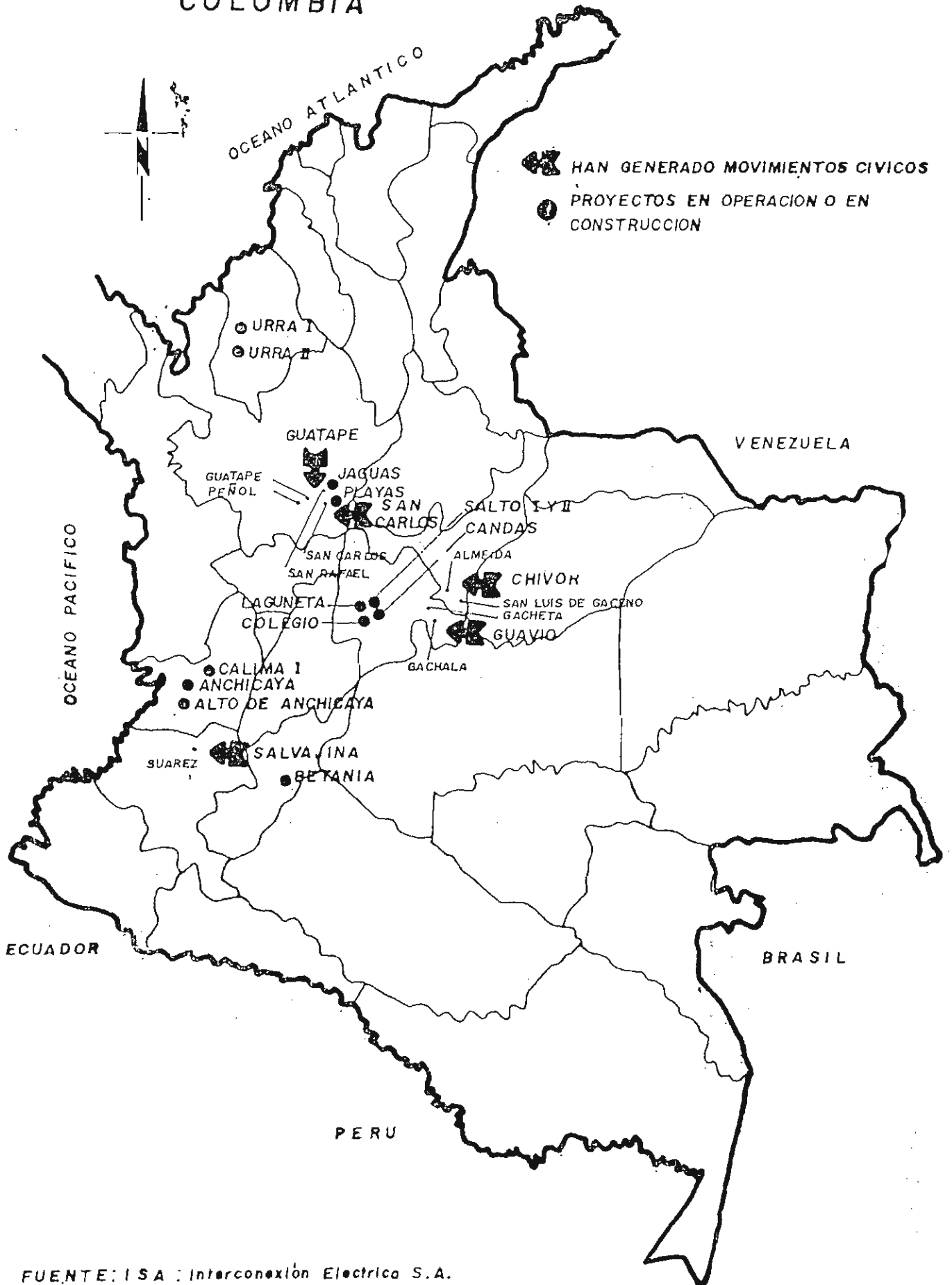
Consecuentemente, esta descripción del movimiento cívico de El Peñol y Guatapé puede servir de base para el análisis e interpretación general de los movimientos de la misma naturaleza. Así se hace en el último capítulo en donde, a partir del examen de este conflicto particular, se presentan algunas conclusiones que apuntan a contribuir al avance en el estudio de los movimientos cívicos. Puesto que el conocimiento que se tiene de este fenómeno es todavía insuficiente, la descripción y el análisis de un caso representativo aportará sin duda al esclarecimiento de algunos aspectos aún confusos.

El propósito básico de este trabajo es pues realizar un estudio en profundidad de un caso concreto de movimiento de pobladores y campesinos para aportar nuevos elementos a un proceso de reflexión colectiva sobre el tema de los movimientos cívicos que se encuentra en curso en Colombia. El caso de El Peñol y Guatapé se presta especialmente para estos fines puesto que es uno de los movimientos cívicos de mas larga duración en el país y, por lo tanto, uno de los mas ricos en acontecimientos y detalles que facilitan el examen de aspectos descuidados en otros estudios. Así con base en una información empírica cada vez mas

amplia será posible hacer un análisis e interpretación mejor fundamentados que permitan precisar la naturaleza de los movimientos cívicos y sus características más sobresalientes.



# GRAFICO 1: LOCALIZACION DE LOS PRINCIPALES PROYECTOS HIDROELECTRICOS Y MUNICIPIOS AFECTADOS COLOMBIA



## 1. LOS MOVIMIENTOS POPULARES URBANOS EN COLOMBIA

La hipótesis fundamental de este trabajo se refiere a la naturaleza misma de los movimientos cívicos. La proposición básica es que los movimientos cívicos son la modalidad concreta que en Colombia asumen los movimientos populares urbanos.

En efecto, movimiento cívico es la denominación que en la práctica se le ha dado al conjunto de las luchas urbanas en el país. Aunque en un principio con este nombre sólo se conocía a las protestas desarrolladas por las pequeñas poblaciones, su generalización, difusión y, sobre todo, creciente aceptación entre los sectores populares, llevaron a incluir en él a todas las demás formas de lucha urbana del pueblo colombiano. Así, el movimiento cívico llegó a comprender las invasiones de terrenos urbanos, las luchas en los barrios populares, los movimientos contra los programas de renovación urbana, las movilizaciones de destechados e inquilinos, las protestas ciudadanas contra alzas en el transporte y los movimientos reivindicativos locales y regionales. Es por ello que hablar del movimiento cívico en Colombia es como hablar del movimiento de pobladores en Chile, del movimiento de barriadas en el Perú o del movimiento urbano popular en México.

Es evidente que al formular la hipótesis anterior se está planteando determinada concepción de los movimientos cívicos, esto es, su interpretación en términos de la teoría que se ocupa de los llamados movimientos sociales urbanos. En consecuencia, para comprender cabalmente las implicaciones de tal enfoque conviene explicitar los elementos básicos de la teoría que orienta este estudio.

## 1.1. TEORIA DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES URBANOS

La teoría de los movimientos sociales urbanos surge formalmente a principio de la década pasada como uno de los temas mas importantes de la llamada "escuela francesa" de sociología urbana. En respuesta al tratamiento dado por la sociología urbana tradicional a los conflictos urbanos, la corriente marxista del análisis urbano abordó el estudio de tales fenómenos desde la perspectiva del materialismo histórico para llegar a identificarlos como una forma particular de la lucha de clases en la esfera del consumo colectivo y de la reproducción ampliada de la fuerza de trabajo.

Uno de los primeros en plantear la temática de los movimientos sociales en general fué Alain Touraine. Para este autor los movimientos sociales son, ante todo, "conductas colectivas de clase" entendidas fundamentalmente como "conductas conflictivas" que corresponden a un determinado sistema de relaciones sociales. Estas conductas se articulan de tal manera que aparecen como organizadas o, para utilizar otros términos, llegan a constituir un sistema. Touraine concibe así el movimiento social como una conducta colectiva organizada, dirigida por un actor de clase, en disputa por la orientación general de la historicidad (Touraine, citado por Giraldo y Camargo, 1985:34).

En esta definición incluye algunos de los elementos esenciales que constituyen un movimiento social. Según ella "sólo debemos considerar como movimientos sociales las acciones colectivas fuertemente organizadas, con unos fines bien explícitos, con una base social definida por su pertenencia social y con un adversario que sea un grupo social claramente circunscrito" (Touraine, 1969:184).

De esta manera identifica varias condiciones o "principios" que resultan de la solución de algunos problemas básicos de autodefinition que deben enfrentar los movimientos sociales. Entre tales principios se cuentan: el principio de identidad, por el cual todo movimiento debe establecer primero qué intereses defiende, qué grupos sociales representa, en nombre de quién habla; el principio de oposición, por el que debe identificar sus adversarios, reconocer las fuerzas a las que se opone, los intereses y privilegios que cuestiona y los grupos y agentes sociales que enfrenta; y el principio de totalidad por el cual debe explicar qué valores generales promueve, cuáles ideales lo inspiran, qué proyecto histórico propone, cuál es el modelo de sociedad por el que lucha. En síntesis, para Touraine, un "movimienmto social no puede existir sin que en él se dé un principio de identidad en que fundar sus reivindicaciones, un principio de oposición que señale al adversario y la naturaleza del conflicto, y un principio de totalidad, una referencia al sujeto histórico" (Touraine: 1969:181).

Apoyándose en esta concepción general, Manuel Castells la especificó luego para el análisis de los movimientos sociales urbanos. Con tal propósito formuló todo un sistema de hipótesis acerca de su naturaleza y de su estructura interna para ser puestas a prueba en el análisis concreto de movimientos particulares (Castells, 1972). Del desarrollo de estas propuestas resultó entonces su definición básica como "sistemas de prácticas sociales contradictorias que controvierten el orden establecido a partir de las contradicciones específicas de la problemática urbana" (Castells, 1974: ). En esta definición se reúnen los elementos esenciales que, según Castells, especifican los movimientos sociales urbanos, los cuales se expresan en cada uno de los términos con los que se les designa.

En efecto, para este autor los movimientos sociales urbanos son movimientos en tanto que sistemas de interacción conflictiva entre agentes sociales definidos por su posición de clase. Esto implica concebir el movimiento básicamente como un conflicto entre diversas clases o sectores de clase cuyas prácticas se oponen a raíz de una contradicción estructural en la sociedad. Por esto también puede entenderse el movimiento social como el desarrollo a lo largo de un período de las acciones conflictivas de un conjunto de grupos sociales estructurado a partir de intereses contradictorios en una formación social concreta.

Por su parte, el carácter social de los movimientos está determinado por el hecho de que implican un cuestionamiento radical de la lógica estructural de la sociedad. Es su potencialidad de transformación de las relaciones sociales lo que hace de un determinado sistema de prácticas contradictorias un movimiento social. Los movimientos son sociales en tanto que "producen efectos cualitativamente nuevos en las relaciones entre las clases, en un sentido contradictorio a la lógica estructural dominante " (Castells, 1981:174). Tal concepción se resume claramente en la definición de los movimientos sociales urbanos como prácticas históricas transformadoras, lo cual permite distinguirlos de las luchas urbanas que son también prácticas históricas pero no alcanzan a transformar la lógica estructural dominante (Castells, 1980:497).

Y, finalmente, estos movimientos sociales son urbanos porque se originan en las contradicciones propias de los procesos de reproducción socializada de la fuerza de trabajo y, mas específicamente, de los procesos de consumo colectivo. Según esta perspectiva marxista de la sociología urbana " lo esencial de los procesos que se estiman urbanos están de hecho ligados a los procesos de consumo colectivo, a los medios de reproducción de la fuerza de trabajo, es decir, a los medios de consumo objetivamente socializados y que, por razones históricas

específicas, son esencialmente dependientes en cuanto a su producción, distribución y gestión del Estado" (Castells, 1980:483). En términos más concretos, estos medios de consumo colectivo corresponden en su mayoría a los llamados servicios públicos: vivienda, educación, salud, transporte, energía, acueducto, alcantarillado, comunicación, recreación, etc. Es el conjunto de los problemas surgidos alrededor de la prestación de estos servicios a la población lo que se entiende como problemática urbana.

Jean Lojkine, a su vez, destaca el proyecto político como una dimensión fundamental de los movimientos sociales urbanos. Para él, se puede "definir un movimiento social por la combinación de dos procesos sociales...: una puesta en movimiento de clases, fracciones de clase o estratos sociales ...y una apuesta política o sea la capacidad de impugnar la hegemonía política de la clase o fracción de clase dominante". Pero de estos dos procesos el determinante es el segundo porque la puesta en movimiento no será efectiva, "no se traducirá en un verdadero cambio en la relación entre fuerzas sociales en el poder y fuerzas sociales dominadas, sino cuando lo permita la apuesta política" (Lojkine, 1979:294).

Las implicaciones de esta tesis de Lojkine son de gran trascendencia para la teoría de los movimientos sociales urbanos. Reafirma el carácter político de estos movimientos que se pone en evidencia por su permanente confrontación con el Estado. En esta perspectiva los movimientos sociales urbanos son una expresión particular de la lucha de clases y, por lo tanto, hacen parte del proceso político en la medida en que su proyecto sea transformar la estructura de las relaciones de poder.

Frente a esta concepción de los movimientos sociales urbanos se encuentran otras que cuestionan la amplitud y trascendencia que se les atribuye. Entre los aporte más conocidos a una

caracterización mas limitada de estos movimientos se encuentra la de Jordi Borja. Para este autor se trata mas de movimientos reivindicativos urbanos que de movimientos sociales en el estricto sentido del término, pues en ellos la población actúa casi siempre como consumidora de servicios y equipamientos urbanos en procura de un mejoramiento de sus condiciones de vida. Para ello los define simplemente como "acciones colectivas de la población en tanto que usuaria de la ciudad; es decir de viviendas y servicios; acciones destinadas a evitar la degradación de sus condiciones de vida, a obtener la adecuación de éstas a las nuevas necesidades o a perseguir un mejor nivel de equipamiento" (Borja, 1975: ).

El principal cuestionamiento que hace Borja a la definición propuesta por Castells se refiere al carácter social de estos movimientos, entendido como su capacidad de producir "a nivel de las estructuras un cambio estructural de la instancia dominante y a nivel de las prácticas, una modificación en la correlación de fuerzas que entra en contradicción con la dominación social institucionalizada" (Castells, 1980:311). Según su percepción, los efectos de los movimientos reivindicativos urbanos son mucho mas limitados; la mayoría de las veces su impacto sobre las relaciones de poder es mas restringido; muy pocas veces llega a amenazar la continuidad del sistema o a poner en peligro la hegemonía de las clases dominantes. Por ello propone entender como efectos de los movimientos urbanos simplemente todo cambio social que resulte de ellos. Asi los efectos urbanos serán "la incidencia del movimiento sobre la relación población-equipamiento y sobre la política urbana", y "los efectos políticos serán los resultantes de la modificación de la fuerza de los grupos que han intervenido en el movimiento y de los aparatos e instituciones a través de los cuales han desarrollado su acción" (Borja, 1975:26-27).

En esta misma línea crítica Luis Alvarado plantea que el concepto de movimientos sociales urbanos implica una sobrevaloración de sus efectos. Según este autor, "centrado como está este concepto en el problema de los efectos urbanos, de repente se les asigna un estatuto que nos parece desmesurado cuando Castells afirma que su desarrollo tiende objetivamente hacia la transformación estructural del sistema urbano o hacia un cambio substancial en el balance de poder en la lucha de clases, es decir en el poder del Estado" (Alvarado, 1981:1411). En su opinión es una exageración teórica sostener que un movimiento urbano puede producir por si solo un cambio radical en el balance de poder entre las clases. Por ello señala que "es necesario usar el término o concepto de luchas reivindicativas urbanas, pues no solo especifica el ámbito en el que ocurren y la naturaleza de la reivindicación, sino que también, y sobre todo, especifican un campo de acción política" (Alvarado, 1981:1314).

Como se puede apreciar en este rápido examen de la literatura sobre el tema de los movimientos sociales urbanos, "no obstante los numerosos trabajos que pueden encontrarse en los últimos años en esta cuestión, es difícil encontrar un acuerdo general en torno a la naturaleza de estos movimientos" (Perló y Schteingart, 1984:106). Lo primero que queda claro es que el nivel de desarrollo alcanzado por la teoría en este campo es todavía muy incipiente. Como el propio Castells lo reconoce, lo que se tiene hasta ahora es apenas "una reflexión teórica en curso que trata de construir una teoría general sobre los movimientos sociales urbanos" (Castells, 1981:1396).

A pesar de esta situación es posible hacer un intento de sistematización de los diversos aportes para tratar de construir un esquema general de la temática que comprenda, al menos, sus puntos básicos. En este sentido, dos aspectos centrales son la distinción de diversas modalidades de conflicto urbano y la



identificación de los elementos fundamentales de la estructura interna de todo movimiento social.

Puesto que resulta evidente que no todo sistema de prácticas conflictivas llega a constituir un movimiento social, un primer paso importante es distinguir entre luchas urbanas, movimientos reivindicativos urbanos y movimientos sociales urbanos. Esencialmente son la intensidad de la movilización, el nivel organizativo alcanzado y la potencialidad de transformación lo que permite diferenciar estos distintos tipos de conflicto urbano.

Así, de acuerdo con las discusiones planteadas anteriormente, se puede considerar lucha urbana a todo tipo de movilización de la población generada por problemas relacionados con los servicios y equipamientos colectivos; en general se trata de acciones espontáneas en defensa de las condiciones de vida de determinados grupos sociales que no alcanzan a constituir instancias organizativas permanentes ni a producir cambios en la estructura urbana o en la correlación de fuerzas entre las clases. Por su parte, los movimientos reivindicativos urbanos "son todos aquellas movilizaciones urbanas a través de las cuales grupos organizados logran obtener ciertas reivindicaciones puntuales que no tienen mayor influencia fuera de su ámbito limitado de acción" (Perló y Schteingart, 1984:107). Y finalmente, los movimientos sociales urbanos son procesos concretos de lucha de clases que partiendo de contradicciones específicas en la esfera de la reproducción, alcanzan a desarrollar un proyecto político por el cual se pone en cuestión la hegemonía de las clases dominantes.

Obviamente, éstas son distinciones conceptuales que sólo tienen el propósito de facilitar el análisis de situaciones concretas de conflictividad urbana. De hecho "es difícil encasillar dentro de este esquema a movilizaciones urbanas que en

su práctica concreta son mucho mas complejas, pudiendo combinar rasgos particulares de las diferentes categorías expuestas" (Perló y Schteingart, 1984: 108). Sin embargo, es una clasificación de conflictos urbanos que puede ser bastante útil en el momento de estudiar casos particulares.

Pero la teoría de los movimientos sociales urbanos no se limita únicamente a hacer tales distinciones entre los conflictos urbanos. También permite identificar lo que puede denominarse su estructura interna, entendiendo por tal el conjunto de los elementos esenciales de un conflicto urbano y sus relaciones. Sin pretender ser exhaustivos, puede afirmarse que en toda movilización urbana es posible distinguir: el contenido estructural, la base social, el ámbito territorial, la organización, las reivindicaciones, la fuerza social, las acciones, los adversarios, las reacciones, la línea política y los efectos sociales.

Por contenido estructural de un movimiento se entiende el conjunto de contradicciones a partir de las cuales se plantea el conflicto. Un movimiento social "ante todo viene definido por lo que se ventila, es decir, por la expresión de una contradicción social que enfrenta intereses opuestos"(Castells, 1974:37). Como se indica claramente en su definición, en los movimientos sociales urbanos las contradicciones principales son de carácter urbano, esto es, relativas al consumo colectivo. Son las contraposiciones de intereses que surgen en los procesos de producción, distribución, gestión y consumo de los medios colectivos de reproducción de la fuerza de trabajo las que crean las condiciones objetivas de existencia de los movimientos sociales urbanos.

El contenido estructural de un movimiento determina directamente su base social, es decir, "la población afectada por la cuestión" que está en juego en el conflicto (Castells,

1974:39). Dicha población la conforman las diferentes clases sociales, fracciones de clase y capas sociales objetivamente ubicadas en los polos de la contradicción o contradicciones que originan el movimiento. Por lo tanto, es sólo a partir del establecimiento de la carga social o contenido estructural del movimiento que se puede identificar a los agentes sociales ubicados en cada uno de los polos de la contradicción.

Pero, en la práctica, no toda la base social participa efectivamente en el movimiento, no toda la población involucrada en una determinada problemática se organiza y se moviliza por la defensa de sus intereses. La parte de la población efectivamente movilizada constituye la fuerza social del movimiento. Esta fuerza social representa la intensidad real del conflicto que puede medirse por la magnitud de la población que verdaderamente participa en el movimiento.

Directamente ligado a la base social aparece otro elemento de los movimientos sociales urbanos: su base territorial. Todos estos movimientos tienen un ámbito territorial propio que corresponde al radio de acción de la población que participa en ellos. Dependiendo de la amplitud de la base social se delimita un espacio físico que puede ser del orden local, regional o nacional. Esta extensión del movimiento depende en último término de la problemática concreta que le dé origen.

La organización es también uno de los elementos claves de la estructura interna de los movimientos sociales urbanos. Prácticamente es una condición de existencia para todo movimiento social, pues ninguno puede desarrollarse sin algún grado de organización. Cualquiera que sea la forma que asuma en cada caso, la organización resulta siempre de la condensación de las relaciones entre los grupos que están en la base del movimiento. Tales relaciones se materializan en un aparato que se constituye en un medio para la consecución de los fines que se proponen las

clases, fracciones y capas sociales que participaban en el conflicto. Al interior de este aparato se establecen ciertas normas que regulan las relaciones entre sus miembros y determinan la modalidad que en definitiva asume la acción conjunta de los diversos grupos sociales que se movilizan.

Una de las funciones que cumple la organización en los movimientos sociales es la formulación de sus objetivos y reivindicaciones. En tanto que resultado de un sistema de contradicciones, de un conflicto, todo movimiento social protege determinados intereses; siempre hay algo por lo que lucha un movimiento. Consecuentemente, los movimientos sociales urbanos tienen siempre unos fines explícitos que se proponen alcanzar.

Para la consecución de sus objetivos y reivindicaciones y por la defensa de sus intereses particulares, los grupos sociales realizan todo tipo de acciones. Cuando se desarrolla una serie de acciones colectivas relacionadas entre si por su referencia común a unas determinadas contradicciones estructurales se tiene entonces un movimiento social. Estas acciones son la expresión material del ejercicio del poder de las fuerzas sociales movilizadas; son las formas concretas que asume la lucha de las distintas clases, fracciones y capas sociales comprometidas en un conflicto.

Frente a las acciones de los distintos grupos sociales que participan en los movimientos sociales urbanos aparecen siempre unos antagonistas. Puesto que es un sistema de prácticas sociales contradictorias, en estos movimientos se enfrentan diversos agentes sociales: de un lado están las clases, fracciones y capas sociales que constituyen la base social; del otro están los agentes y grupos sociales que se les oponen. Los adversarios son, en consecuencia, otro elemento esencial de la estructura interna de un movimiento social urbano.

En su enfrentamiento con la base social, los adversarios realizan también una serie de acciones. Para efectos del análisis, a las formas de lucha implementadas por los enemigos de un movimiento social se las considera como reacciones porque casi siempre se presentan como una respuesta a las acciones de los grupos sociales movilizados. Pero, en esencia, las reacciones son fenómenos de la misma naturaleza que las acciones: ambos son conductas colectivas de agentes sociales en defensa de determinados intereses de clase.

Las acciones de los agentes sociales que intervienen en un movimiento no se desarrollan de manera dispersa y sin articulación lógica entre ellas. Por el contrario, dichas acciones están casi siempre orientadas por un proyecto político que las integra y les da coherencia. El curso que sigue la lucha está determinado por la visión general que se tiene del conflicto en la perspectiva de alcanzar los objetivos que se proponen las fuerzas sociales movilizadas. En todo movimiento social urbano se puede identificar, por lo tanto, una línea de acción que orienta el desarrollo de la lucha a partir de los principios generales formulados por un proyecto político y social. A esta línea de acción se la denomina línea política porque determina el curso que toma el movimiento como expresión de la voluntad política de las clases y sectores sociales que en él participan.

De manera general, el conjunto de los elementos de un movimiento social urbano se estructuran como un campo de fuerzas. En el sistema de prácticas sociales contradictorias, la base social y el adversario constituyen los polos contrarios cuyas respectivas acciones y reacciones generan la dinámica del movimiento. Desde este punto de vista, la estructura interna de un movimiento social es un sistema de acción-reacción en el que se oponen diferentes fuerzas sociales; y el proceso de desarrollo del movimiento no es más que el despliegue en el tiempo de ese campo de fuerzas. En estas condiciones, la dirección que

finalmente toma un movimiento social depende de la correlación existente entre la base social y el adversario. En cada movimiento se desarrolla una tensión de fuerzas que en determinado momento se resuelve en favor de uno de los polos de la contradicción.

Es en el momento de la resolución del conflicto cuando aparece el último elemento de la estructura interna de un movimiento social urbano: sus efectos. De acuerdo con la definición formulada en un principio, todo movimiento social debe producir unos efectos cualitativamente nuevos. Se considera como efecto de un movimiento cualquier modificación en las prácticas o en las estructuras sociales que directamente puede atribuírsele. En cada caso concreto los efectos se miden por sus resultados inmediatos a nivel de las condiciones de vida de la población o de las relaciones de poder entre las clases.

Con la precisión de lo que son los efectos urbanos y políticos se completa el cuadro general de la estructura interna de un movimiento urbano. Este último aspecto se suma a los anteriores para conformar un esquema general de análisis que permite identificar los elementos fundamentales de los conflictos sociales en la esfera de la reproducción. Evidentemente todos los elementos están relacionados y en la práctica de una movilización concreta se confunden entre sí; por lo tanto, es sólo en el análisis que se puede hacer una clara distinción de ellos.

Cuando se use la moción de estructura interna será pues necesario recordar que es apenas una herramienta metodológica que está aún lejos de llegar a constituir una categoría teórica acabada. Estrictamente no es más que "una rejilla de análisis" o "un código de clasificación para el análisis sobre los movimientos urbanos que no toma en consideración sino las características internas del movimiento y su impacto sobre la estructura social" (Castells, 1980:496). Sin embargo, todo este

instrumental teórico-metodológico ha demostrado ser muy eficaz en el estudio de casos concretos de movilizaciones urbanas como el que nos ocupa.

## 1.2. ESTUDIO DE LOS MOVIMIENTOS CIVICOS

A partir de los primeros trabajos teóricos sobre los movimientos sociales urbanos, desde los primeros años de la década del setenta comenzaron a realizarse en la mayoría de los países latinoamericanos toda una serie de investigaciones empíricas sobre conflictos urbanos de muy diversas características. Como resultado de este esfuerzo colectivo se cuenta ahora con trabajos de distintos niveles de análisis para los casos de Chile, Perú, Argentina, Brasil, México, Venezuela, El Salvador, Guatemala, Costa Rica, Panamá y Ecuador. Esta amplia corriente de investigación ha venido produciendo un conocimiento cada vez mayor de las formas particulares asumidas por la lucha de clases a nivel urbano en las más variadas coyunturas políticas. Un buen ejemplo de esto son los numerosos estudios sobre el movimiento de pobladores de Chile, el movimiento urbano popular en México, las luchas urbanas en las barriadas de Lima, el movimiento de favelados en Brasil y, en general, los diversos movimientos de pobladores en América Latina.

Colombia tampoco fué ajena a este generalizado interés por el estudio de los movimientos sociales urbanos. Aunque comenzó un poco más tarde, en el país también se desarrolló una fuerte corriente de investigación sobre este tema que muy pronto se concretó en varios trabajos. Así actualmente contamos con una producción intelectual sobre los movimientos cívicos comparable a la que se tiene en algunos países latinoamericanos sobre sus formas particulares de movilización urbana.

Los primeros estudios sobre movimientos sociales urbanos en Colombia empezaron a aparecer a mediados de la década del setenta y se hicieron más frecuentes después que se registró el Primer

Paro Cívico Nacional. Este acontecimiento evidenció la agudización de las contradicciones urbanas y, en general, la crisis social de la ciudad colombiana. Con él se puso de manifiesto además la potencialidad política de las masas urbanas en el país y surgió un nuevo foco de interés para los investigadores. Desde entonces los movimientos cívicos pasaron a ser un objeto privilegiado de estudio en el campo de las ciencias sociales.

Inicialmente el análisis de los movimientos cívicos fué llevado a cabo por organizaciones políticas y grupos de investigación motivados por la creciente difusión e importancia de esta forma de lucha en los años setenta. El objetivo era definir su naturaleza de clase y, sobre todo, establecer sus posibilidades para la organización y la movilización populares. Como resultado de este trabajo no tardaron en aparecer una serie de notas y análisis publicados en los órganos de prensa de algunas agrupaciones políticas que, de hecho, representaron las primeras aproximaciones a una interpretación política de los paros cívicos.

Estos primeros análisis fueron seguidos por algunos trabajos mas sistemáticos que aportaron una interpretación mas elaborada del nuevo fenómeno sobre la base de informaciones y datos empíricos mucho mas amplios. En este sentido, el trabajo inicial sobre los conflictos urbanos en Colombia fué el realizado por el grupo de estudios José Raimundo Russi. Este era un grupo de activistas y cuadros políticos de organizaciones de izquierda que se ocupó de hacer un recuento analítico del movimiento desarrollado por los habitantes de los barrios orientales de Bogotá entre 1972 y 1974 contra la llamada Avenida de los Cerros (Russi, 1975). Sobre la base de esta experiencia, en el libro se intentó una elaboración teórica que permitiera comprender la irrupción de las luchas urbanas en el país. Mas



inmediatamente, el propósito práctico era el de presentar una propuesta para el trabajo político en los barrios populares.

Pero el trabajo que se puede considerar como el verdadero pionero de los estudios sobre el movimiento cívico es la investigación de Medófilo Medina sobre los paros cívicos registrados en Colombia entre 1957 y 1977 (Medina, 1977). En esta investigación Medina realizó, en efecto, el primero y mas completo inventario que hasta ahora se tiene de los movimientos cívicos registrados en las décadas del sesenta y setenta. En ella también propuso una aproximación teórica a los paros cívicos entendiéndolos como una modalidad original de la lucha de las masas populares en Colombia.

A pesar de sus valiosos aportes, el trabajo de Medina sobre los paros cívicos tenía algunas limitaciones de importancia. Estas limitaciones se debían en parte a que la interpretación del movimiento cívico que planteaba respondía mas a una línea política partidista que a una perspectiva teórica desarrollada en función de dar una explicación mas acorde con la especificidad del fenómeno.

Idéntico problema presentaba el artículo de Andrés Hoyos, que fué otro de los primeros estudios sobre este tema realizados en el país (Hoyos, 1978). Publicado con posterioridad al de Medina, no aportó, sin embargo, nueva información empírica ni significó un mayor avance desde el punto de vista teórico. Todo su interés reside en la observaciones y análisis que hacía de algunos rasgos particulares de los paros cívicos poco considerados hasta entonces. En especial destacaba el carácter democrático de estas movilizaciones para señalar enseguida su posible articulación con el proceso político general en la perspectiva de una estrategia partidista.

Un aporte mucho mas importante lo dió Jaime Carrillo en un libro en el que por primera vez se propuso una interpretación global del movimiento cívico desde un punto de vista teórico bien definido (Carrillo, 1981). Aunque no tenía una base empírica muy sólida, este autor realizó un análisis en el que se intentaba dar cuenta de la especificidad del movimiento cívico al mismo tiempo que trataba de establecer el lugar y el papel que cumplía en el proceso de la lucha de clases en Colombia. Con este propósito tomó como base fundamental de su estudio la teoría de los movimientos sociales urbanos formulada y desarrollada por Manuel Castells, uno de los asesores de su trabajo. Aunque no la presentaba de manera explícita, la utilización de esta teoría era evidente tanto por su concepción general de los movimientos cívicos como por el análisis que de ellos realizaba.

Esta aplicación que Carrillo hacía de la teoría de los movimientos sociales urbanos era, sin embargo, demasiado forzada. Mas que intentar dar cuenta de la naturaleza particular del movimiento cívico en Colombia su propósito era demostrar la validez de la teoría adoptada. Esto lo condujo a simplificar excesivamente el análisis de los movimientos cívicos pues en él se limitaba apenas a constatar las características que la teoría le asignaba a los movimientos urbanos. Así llegó a señalar muchos de los rasgos mas evidentes de los movimientos cívicos que, efectivamente, coinciden en muchos aspectos con movimientos del mismo tipo en otros países. Por esto, no obstante sus limitaciones, el estudio de Carrillo representó un importante avance en la interpretación teórica de los movimientos cívicos.

Al libro de este autor lo siguieron otros trabajos que continuaron mas en la línea de investigación empírica iniciada por Medina que en la de interpretación teórica propuesta por Carrillo. Así la investigación realizada por Elizabeth Ungar también sobre los paros (Ungar, 1980), simplemente buscaba continuar el seguimiento cronológico de los paros cívicos entre

septiembre de 1977 y enero de 1980 a través de informaciones de prensa. Aparte de esto, el trabajo se limitó a describir algunas de las características más destacadas de los movimientos cívicos sin profundizar en una reflexión sobre sus determinaciones más profundas.

Un propósito semejante tenía el trabajo de Luz Amparo Fonseca centrado igualmente en el estudio de los paros cívicos en Colombia (Fonseca, 1982). Con base en su propia recolección de datos, esta autora hizo un nuevo análisis de las tendencias y rasgos más característicos de los movimientos cívicos. Pero este estudio avanzó un poco más proponiendo una explicación del auge de los paros cívicos con base en tres procesos socioeconómicos y políticos ocurridos en el país durante las últimas décadas. En esta interpretación se buscaba, en efecto, las raíces del fenómeno en el agotamiento de algunos proyectos reformistas, la centralización del poder estatal y el cambio del modelo de desarrollo.

Aunque de manera incipiente, el trabajo de Fonseca insinuó además la existencia de factores de orden local y regional en la determinación de los paros cívicos. Esta línea explicativa fue retomada por Pedro Santana en un estudio sobre la relación entre desarrollo regional y movimientos cívicos (Santana, 1983) en donde demostró que la problemática de las regiones incide directamente en los movimientos populares. A través de su análisis evidenció asimismo la relación entre los movimientos regionales y la centralización político-administrativa del Estado colombiano. En general, el trabajo de Santana dejó en claro el carácter regional de muchas de las protestas y movilizaciones populares en Colombia.

Estas ideas fueron desarrolladas por el mismo autor en varios trabajos posteriores en los que introdujo nuevos elementos teóricos para la interpretación del fenómeno de los movimientos

cívicos (Santana, 1985). En especial Santana insistió en la necesidad de entender los paros cívicos como una forma de expresión en Colombia de los movimientos urbanos, tan extendidos en otros países latinoamericanos. Para esto acogió las formulaciones de Tilman Evers que interpreta este tipo de movimientos como luchas en la esfera de la reproducción (Evers, 1982). De esta manera entró de lleno en Colombia el debate sobre la teoría de los movimientos sociales urbanos.

Pero la mayoría de los estudios realizados en los últimos años sobre los movimientos cívicos se han matenido mas en la línea de investigación empírica que en la de la reflexión teórica exclusiva. Algunos trabajos se limitan a un simple relato de las acciones mas destacadas como es el caso del libro de Carlos Arango sobre las luchas por la vivienda en Colombia (Arango, 1981). El método mas común es, sin embargo, comenzar por la descripción de las diferentes modalidades de lucha urbana para tratar de hacer luego algunas generalizaciones. Este es el caso de los trabajos de Gilma Mosquera sobre las luchas populares por el suelo urbano desarrolladas en el país durante las últimas décadas (Mosquera, 1981). En el mismo sentido se orientan los estudios del equipo de investigación urbana del CINEP, que se ha ocupado del análisis de los mas recientes movimientos cívicos (Giraldo y Camargo, 1985).

De esta tendencia en el abordaje de la temática de los movimientos urbanos se han desprendido últimamente dos líneas de trabajo. Una de ellas se viene especializando en el estudio de las luchas barriales. Para ello se ha comenzado por una reflexión teórica sobre el barrio popular como la que se hace en varios artículos publicados recientemente en los que se discute su papel en los procesos de reproducción de la fuerza de trabajo (Vargas, 1986). Enfatizando mas en los aspectos sociales y políticos, otros estudios se han ocupado del movimiento barrial propiamente dicho. En este sentido algunos trabajos han hecho el

análisis del contenido estructural, la composición social y la orientación política de los movimientos populares en las principales ciudades (Serna y otros, 1980). En general, todos estos trabajos tienen en común su apoyo mas o menos explícito en la teoría de los movimientos sociales urbanos.

La otra línea de trabajo derivada del amplio interés de los investigadores por el estudio del movimiento cívico en Colombia se orientó hacia la reflexión sobre el papel de este movimiento en la mas reciente coyuntura política del país. A raíz del proceso de paz y apertura democrática planteados por el gobierno de Betancur varios analistas centraron su atención en las cada vez mas importantes luchas cívico-populares. De esta reflexión han resultado algunos trabajos sobre la incidencia del movimiento cívico en el proceso de reforma política municipal y, mas ampliamente, su relación con el poder local. Tales trabajos demuestran que los movimientos cívicos son sin duda uno de los factores que mas han determinado los recientes procesos de cambio político en el país.

Dada la importancia del análisis de la actual coyuntura por la que atravieza el movimiento cívico, esta línea de trabajo se ha profundizado al propiciar incluso la participación de los protagonistas de las luchas cívicas con la reflexión y sistematización de sus propias experiencias. Inicialmente fueron las memorias del Primer Congreso Nacional de movimientos cívicos (1984) las que recogieron el testimonio de las luchas de los pobladores de diversas regiones del país reunidos en este evento. Mas tarde se realizaron una serie de talleres regionales cuyos resultados fueron presentados en un libro sobre los movimientos cívicos en Colombia (Cabrera y otros, 1986). En la misma línea vienen desarrollándose en varias ciudades y regiones algunos trabajos de recuperación histórica de las luchas cívicas que seguramente aportaran elementos de gran interés para su mejor conocimiento.

El último de los estudios sobre los movimientos cívicos en Colombia recoge bastante bien los diferentes aspectos de que se han ocupado los investigadores de este fenómeno (López, 1987). En este trabajo de William López se parte, en efecto, del análisis de algunos factores explicativos de la protesta urbana, se describen luego algunas de sus características generales y se distinguen varias de las modalidades de movimiento urbano más frecuentes en el país. El artículo termina precisamente con una reflexión sobre la democracia local y la reforma política a la que reconoce que posibilita nuevas formas de participación ciudadana.

Como queda claro después de esta revisión bibliográfica, los movimientos cívicos han sido uno de los temas privilegiados por la investigación urbana en Colombia en los últimos años. En gran medida el peso de esta línea de trabajo refleja a nivel teórico la importancia social y política que alcanzaron a tener en el período histórico más reciente las organizaciones y movimientos de pobladores en el país.

### 1.3 BOSQUEJO HISTÓRICO DE LOS MOVIMIENTOS CÍVICOS

Efectivamente, las luchas urbanas en Colombia, conocidas como movimientos cívicos, han llegado a convertirse en las últimas décadas en un fenómeno social y político de trascendencia nacional. Ellas constituyen una forma de conflicto social de tanta importancia como el propio movimiento obrero. Mas aún, en algunos momentos de auge han representado un papel protagónico en la escena de la lucha de clases en el país. Por ello hoy en día son el centro de interés de los más diversos agentes sociales.

No obstante que son mucho menos conocidos que movimientos similares en otros países, los movimientos cívicos en Colombia son unos de los de mayor tradición en América Latina. Sus antecedentes se remontan incluso a principios de este siglo con las primeras luchas por la vivienda desarrolladas en Cali en 1.912 (Arango, 1981). Sin embargo el movimiento urbano contemporáneo comienza verdaderamente en la década del cuarenta cuando se presentan las primeras tomas masivas y organizadas de terrenos urbanizables en las principales ciudades del país.

Esta forma de lucha de los sectores populares por la consecución de un lugar donde habitar se generalizó después en la década de los cincuenta, impulsada por el partido liberal como una forma de ampliar su base política en las ciudades, en su enfrentamiento con el partido conservador. De esta manera el partido liberal logró hegemonizar por algún tiempo las luchas populares por la vivienda, lo cual consolidó a partir de 1959 con la formación e institucionalización de las juntas de acción comunal como mecanismo de movilización de los barrios populares para la autosolución de sus problemas de equipamiento colectivo y de control político de sus organizaciones.

Pero con el ascenso general de la lucha de clases en la coyuntura de los primeros periodos del Frente Nacional, a mediados del decenio de los sesenta, las luchas de los sectores populares por el suelo urbano, la vivienda y los servicios públicos básicos, no solo registraron un notable aumento cuantitativo sino que experimentaron un decisivo cambio cualitativo que marcó una nueva etapa para el movimiento popular urbano en Colombia. En el transcurso de los años sesenta, en efecto, las invasiones de predios urbanos y las movilizaciones en los barrios populares en demanda de una adecuada infraestructura urbana se hicieron cada vez mas frecuentes y combativas bajo la orientación de distintos sectores de izquierda que entraron a disputarle al liberalismo su control y hegemonía sobre las

luchas urbanas para darles un carácter mas político, puesto de manifiesto en su enfrentamiento con el Estado y la solidaridad con las luchas de otros sectores populares.

Lo mas importante de las acciones de este período fué, sin duda, la ocupación de un terreno céntrico en la ciudad de Bogotá que, dirigida por la recién creada Central Nacional Provienda y despues de vencer numerosos intentos de desalojo policial entre 1961 y 1966, logró consolidar finalmente el barrio Policarpa Salavarrieta el cual, con su original organización interna, su alto nivel de politización y su participación solidaria en otras luchas populares, se convirtió para muchos en un símbolo de la lucha por la vivienda en la perspectiva de una transformación social en Colombia. El triunfo de esta lucha permitió a la Central Nacional Provienda fortalecerse y superar los estrechos marcos locales a los que se había restringido su acción hasta entonces, pues a partir de ella logró proyectarse a nivel nacional.

A la par de estas y otras acciones, durante la década del sesenta comenzaron a desarrollarse también nuevas formas de lucha urbana entre las cuales la mas original y de mayor trascendencia fué el llamado movimiento cívico. Esta es una forma de lucha consistente en la movilización de amplios sectores de la población de una ciudad o región que generalmente conduce a una paralización total de sus actividades o paro cívico para presionar por la satisfacción de reivindicaciones casi siempre relacionadas con problemas de servicios públicos. Fuertemente determinados por los cambios en la correlación de fuerzas, los movimientos cívicos presentaron en este período distintos momentos de expansión y receso. Estos movimientos tuvieron, en efecto, un claro período de auge entre 1963 y 1965 cuando se registraron 11 paros. Sin embargo entre 1966 y 1970 no se presentó ningún paro (Medina, 1977).



Respecto de su avance cualitativo, el movimiento cívico en la década del sesenta se vió reducido sólo a algunos casos particulares de movimientos cívicos en los que se puso de manifiesto su potencialidad como fuerza social de cambio. Entre éstos, el mas notable de todos fué el movimiento cívico de Barrancabermeja que se distinguió por haber tenido cierta continuidad y, sobre todo, por su vinculación con el combativo sector de los trabajadores petroleros. Dicha ciudad fué escenario efectivamente de una importante jornada de lucha cívica en 1963 que en cierta forma marcó un hito en la historia del movimiento cívico en Colombia (Velandia, 1975).

En la década del setenta el movimiento cívico llegó a consolidarse definitivamente extendiéndose por todo el territorio nacional. Durante estos años se realizaron paros cívicos en prácticamente todas las regiones del país, desde las grandes ciudades capitales hasta los mas pequeños y apartados municipios. Así entre 1971 y 1981 se desarrollaron un total de 138 paros, cifra que era mas de diez veces mayor que la registrada en la década anterior (Fonseca, 1982).

Pero no sólo cuantitativamente avanzó el movimiento cívico durante la década del setenta. En este período alcanzó igualmente nuevos niveles de desarrollo organizativo y político. Junto al caso de Barrancabermeja, en donde se realizaron dos nuevos paros cívicos en 1975 y 1977, surgieron otras luchas en ciudades intermedias y pequeñas donde las acciones populares pusieron de manifiesto nuevas potencialidades del movimiento cívico.

Así, entre los múltiples ejemplos de movimientos y paros cívicos que se registraron en Colombia en los años setenta, se destacaron: las acciones de 1972, 1976, y 1977 en la ciudad de Florencia en las que se dió una fuerte relación entre el movimiento cívico y el movimiento campesino de la región del Caquetá, bajo cuya iniciativa y dirección se llevaron a cabo

varios paros cívicos y paros campesinos en demanda de obras de infraestructura y mejores servicios por parte del Estado; el paro regional de 1974 en Boyacá con la participación de varios municipios y la orientación de representantes de los partidos tradicionales y de los caciques y notables de la región, los cuales, sin embargo, fueron superados en el paro cívico de 1978 por la acción de los sectores populares que desbordó y desconoció la dirección del movimiento; el combativo y organizado paro obrero-popular de Yumbo en 1978 en el que a las demandas de toda la población por mejores servicios públicos y contra la corrupción administrativa se sumaron, para ser exigidas conjuntamente, las reivindicaciones propias de los obreros, estudiantes, maestros, empleados municipales, usuarios del transporte y beneficiarios del seguro social que participaban en la misma lucha; los movimientos de solidaridad entre los municipios del Oriente de Antioquia que realizaron distintas acciones de apoyo mutuo durante los frecuentes paros cívicos que se llevaron a cabo en esta región entre 1970 y 1979; y, por último, los numerosos paros cívicos de los municipios del Departamento de Nariño ante las deficiencias y altos costos de los servicios públicos, especialmente de la energía eléctrica, en los que desarrollaron las mas variadas formas de lucha hasta culminar con masivos paros regionales en 1975 y 1978 dirigidos por organizaciones cívicas de carácter departamental como el Comité de Municipios de Nariño y el Movimiento Sindical de Solidaridad con Nariño (Carrillo, 1981).

Pero durante la década de los setenta las luchas urbanas no se redujeron únicamente a los movimientos y paros cívicos en las poblaciones y ciudades intermedias. Esta década se caracterizó además por la ampliación e intensificación de las tradicionales luchas por la vivienda iniciadas en las décadas anteriores y, especialmente, por el surgimiento de nuevas formas organizativas de los sectores populares y de nuevas modalidades de lucha urbana en las ciudades colombianas.

En efecto, a pesar de la dura represión estatal a que se enfrentaban, en estos años se generalizaron las tomas masivas y organizadas de predios urbanos, las cuales no solo se incrementaron en número sino que, además, se extendieron a todas las regiones del país, alcanzando una amplia cobertura nacional. La mayoría de las ciudades fueron escenario de acciones de recuperación de tierras para la vivienda popular protagonizadas por miles de personas. Un primer recuento de este tipo de acciones permite señalar para el período 1970-1979 un total de 50 casos conocidos de invasiones de predios urbanos en los que participaron mas de 29,000 familias, mientras que para el período 1961-1969 se tuvo conocimiento solo de 30 casos de tomas de tierras con la participación de cerca de 11,000 familias (Mosquera, 1981).

Por otra parte, junto a las tradicionales formas de lucha por la vivienda se desarrollaron también nuevas modalidades como la acción legal contra urbanizadores piratas, las luchas de inquilinos contra casatenientes, la formación de cooperativas populares para la compra de terrenos, el desarrollo planificado de barrios populares y las ocupaciones de casas de inquilinato o casonas en lugares céntricos de las principales ciudades.

Sin embargo, estas distintas formas de lucha presentaron desarrollos y tendencias muy desiguales. Algunas ocurrieron sólo ocasionalmente y, en general, tendieron a desaparecer, como es el caso de las tomas de inquilinatos, debido a las escasas perspectivas de desarrollo que tenía en si misma esta modalidad de vivienda popular. Otras, como la lucha contra los estafadores en programas de vivienda y urbanizadores piratas, la adquisición comunitaria de tierras para la construcción de viviendas populares y el desarrollo planificado de los barrios, fueron igualmente ocasionales, pero esto debido mas a su novedad e incipencia que a sus posibilidades reales de desarrollo.

Las luchas de inquilinos contra grandes propietarios de viviendas en renta tenían, por su parte, una mayor tradición, pero no lograron tampoco consolidarse como una forma de lucha que impulsara decisivamente el movimiento popular urbano en Colombia, a pesar de la existencia de organizaciones de arrendatarios de vivienda con alguna importancia local, tales como la Asociación de Inquilinos del Valle de Aburrá en Medellín y mas de 50 centros de inquilinos en todo el país afiliados a Provivienda.

Las mas notorias entre las nuevas formas de lucha urbana que se desarrollaron en las grandes ciudades de Colombia durante el decenio de los setenta, fueron las movilizaciones de los habitantes de los barrios populares contra el desalojo y la expulsión de sus lugares de residencia como resultado de los programas de renovación urbana y los planes de desarrollo urbano que el Estado comenzó a implantar en este período.

El caso mas conocido de este tipo de movimientos urbanos fué el de los pobladores de los barrios populares de la zona oriental de Bogotá contra la llamada Avenida de los Cerros o Programa Integrado de Desarrollo Urbano de la Zona Oriental de Bogotá, impulsado y financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo. Frente al desalojo y expulsión de sus barrios para dar lugar a la acción de especuladores inmobiliarios y de grandes empresas constructoras, los pobladores opusieron una decidida resistencia en defensa de sus viviendas y comunidades, a través de los comités pro-defensa del barrio. Estas organizaciones, constituidas y agrupadas en la Unión de Comités Pro-defensa de la zona oriental de Bogotá desde 1971, realizaron durante este año y el siguiente todo un conjunto de movilizaciones y acciones de protesta en las que participaron los habitantes de mas de 30 barrios de la zona, hasta lograr

finalmente el abandono definitivo del proyecto por parte del gobierno (Grupo de estudios J. Russi, 1975).

No obstante la capacidad de movilización y el grado de organización que llegaron a tener en determinados momentos, y debido a sus contradicciones internas, los comités pro-defensa prácticamente desaparecieron después de dos años de lucha sin lograr consolidar una organización estable en los barrios populares. Ellos solo reaparecieron en 1975 y con menor fuerza en algunos barrios de la zona nor-oriental de la ciudad ante la nueva amenaza de desalojo representada por los circuitos viales (Vargas y Aguilar, 1976).

Experiencias similares de movilizaciones populares contra programas de renovación urbana se tuvieron en otras ciudades importantes del país como Medellín y Cali, aunque en ellas los movimientos no alcanzaron la magnitud del caso de Bogotá. En Medellín, por ejemplo, durante la última parte del decenio se desarrollaron una serie de luchas de los habitantes de distintos sectores de la ciudad afectados por la realización de obras de desarrollo urbano por el sistema de valorización que, si bien fueron muy puntuales y aisladas, tuvieron una relativa importancia en la escena política local.

Igualmente en la década de los años setenta se registraron algunas movilizaciones de los habitantes de los barrios populares y poblaciones pequeñas directamente en apoyo de las luchas obreras con las que establecieron una fuerte relación. Uno de los casos más interesantes fue el movimiento llevado a cabo por los pobladores de algunos barrios populares de la ciudad de Manizales en solidaridad con los obreros en la huelga de la empresa Unica, durante la cual, junto con la agitación de reivindicaciones propias en asambleas populares, realizaron grandes marchas de apoyo a los huelguistas y organizaron una red de abastecimiento de los trabajadores que se habían tomado la

fábrica. Otro caso relevante fué la movilización de los habitantes de La Paila en el Valle del Cauca en apoyo a los trabajadores del Ingenio Riopaila quienes, durante su huelga de 1975-76 formaron con los pobladores la llamada ciudad proletaria.

Por último, otra modalidad de lucha urbana que llegó a tener una importante presencia a lo largo de la década pasada fué la manifestación callejera y la acción de protesta contra las alzas en las tarifas de algunos servicios públicos, especialmente el transporte colectivo. Caracterizada por su alto grado de espontaneidad, su corta duración, la violencia de sus acciones y la casi total carencia de organización, esta forma de lucha tuvo, sin embargo, una amplia cobertura nacional y una frecuencia tal que se hizo casi permanente. Prácticamente todas las principales ciudades del país y muchas de menor importancia fueron escenario durante esos años de intermitentes explosiones de protesta en las que participaron amplios sectores populares, principalmente pobladores y estudiantes. Algunos ejemplos fueron las violentas manifestaciones en contra de los aumentos en las tarifas de transporte público ocurridas en Cali, Palmira, Bogotá, Cartagena y Yumbo en 1974; en Jamundí, Pereira, Buenaventura y Bucaramanga en 1975; en Popayán, Bogotá, Medellín, Valledupar, Cali y Sincelejo en 1977; y en Bogotá, Pasto, Medellín, Santa Marta, Neiva y Cali en 1979 (Villegas, 1980).

Todo este conjunto de acciones y formas de lucha constituyeron un amplio movimiento social que durante el período de los años setentas tuvo un importante auge y un decisivo desarrollo cualitativo. A pesar de las diferencias entre las distintas formas de lucha urbana y el aislamiento y desarticulación predominantes, todas contribuyeron, a su manera, a dar un gran impulso al movimiento popular urbano en Colombia. Así, éste, que había surgido y tomado una relativa importancia en la década del sesenta, en los setenta se convirtió

definitivamente en un componente fundamental de las luchas del pueblo colombiano. (7)

En general, durante este período el movimiento cívico amplió significativamente su base social, se difundió por todas las regiones del país y adquirió un peso político importante en el conjunto de las luchas populares. Sin embargo, hasta finales de la década del setenta el movimiento no había logrado cristalizar una organización que unificara las diferentes acciones y modalidades de lucha que habían surgido. La característica más común de las luchas cívicas era el aislamiento, la desarticulación y la falta de continuidad. Aunque algunas dieron lugar a organizaciones locales relativamente estables que acumularon experiencias y las desarrollaron en nuevas acciones menos espontáneas y con objetivos mejor definidos, la mayoría de las movilizaciones se agotaron en sí mismas y no dejaron organizaciones permanentes que garantizaran la continuidad de la lucha y su articulación con otras semejantes. Pocas veces se establecieron relaciones entre luchas urbanas desarrolladas en diferentes sitios que permitieran unificar fuerzas para la consecución de objetivos comunes y en las contadas ocasiones en que ésto se logró a nivel local o regional, no se mantuvo por mucho tiempo la unidad alcanzada.

En estas condiciones, ante el auge espontáneo del movimiento, el régimen mantuvo durante toda la década pasada una agresiva y durísima política de represión contra todo tipo de expresiones de la lucha popular. En respuesta a las tomas de predios urbanos los gobiernos de ese período realizaron múltiples y brutales desalojos. Con igual violencia fueron reprimidos los participantes en las acciones de protesta y manifestaciones callejeras contra aumentos de tarifas de servicios públicos y en las movilizaciones desarrolladas con motivo de los paros cívicos. Se dieron así casos como el de Fundación, donde en septiembre de 1973 fué violentamente reprimida por el ejército

una manifestación de protesta por el mal servicio de energía, dejando 3 personas muertas y mas de 25 heridas; o el de la ciudad de Bucaramanga, donde en julio de 1976 fué reprimida una manifestación de protesta contra el alza de tarifas de transporte, con saldo de un muerto, 3 heridos a bala y 200 detenidos; o el de la población de Soacha en la que en junio de 1978, en un desalojo a bala de 250 familias, fueron heridas 6 personas; o el del paro cívico de Sabanalarga en agosto de 1979 en el trascurso del cual fueron heridos 10 manifestantes y mas de 100 detenidos. Estos son solo algunos ejemplos entre muchos de la violenta política de represión que caracterizó la respuesta del Estado a las luchas del pueblo colombiano por el suelo, la vivienda y los equipamientos colectivos.

Esta situación se agudizó aún mas a finales de la década a raíz del creciente descontento de las masas populares y del ascenso general de las luchas que tuvo su punto culminante en el Paro Cívico Nacional del 14 de septiembre de 1977 contra el alto costo de la vida y por el alza general de salarios y el levantamiento del estado de sitio. (Delgado, s.f.) Para enfrentarlo, el gobierno liberal de López Michelsen tomó una serie de medidas coercitivas extraordinarias amparadas en la legislación de excepción. Estas medidas fueron recogidas y ampliadas por el llamado Estatuto de Seguridad expedido por Turbay Ayala en septiembre de 1978. Con base en este grupo de decretos policivos se desató la mas extensa y generalizada represión contra el conjunto del movimiento popular.

Desde entonces las luchas cívicas recibieron del régimen una respuesta represiva todavía mas dura que la que tradicionalmente habían soportado. Ante la agudización de la represión y dado el bajo nivel organizativo alcanzado, el movimiento cívico entró en un corto y relativo período de reflujo en 1979 y 1980. Despues de un gran auge en que las diferentes formas de lucha urbana se intensificaron, el movimiento comenzó a perder fuerza como



resultado de la ofensiva del régimen. Los combativos pobladores que en 1978 habían realizado un total de 22 paros cívicos, apenas llevaron a cabo 8 en 1979 y 11 en 1980. En general, las distintas formas de lucha urbana se hicieron menos frecuentes, especialmente aquellas que implicaban un enfrentamiento directo con el Estado.

Sin embargo, el movimiento popular urbano en Colombia no desapareció totalmente durante este período de represión. De manera esporádica y aislada siguieron presentándose diferentes acciones de masas que le dieron continuidad al movimiento. A pesar de la violenta respuesta de las fuerzas policiales se mantuvieron algunas formas de lucha urbana como las invasiones. En 1979 unas 2,000 personas invadieron la urbanización oficial Las Guacamayas pero fueron desalojadas violentamente al igual que otros invasores en Sincelejo y Cali. No obstante al año siguiente se incrementaron este tipo de acciones: en Medellín 500 familias ocuparon terrenos baldíos en el barrio 20 de julio y resistieron el desalojo policial; en Cali 80 familias invadieron predios ubicados en el sector de Bellavista, otras 600 ocuparon predios privados de Los Chorros y cerca de 1,200 familias se tomaron terrenos aledaños al barrio Siloé; en Barrancabermeja 700 familias ocuparon predios cercanos al barrio María Eugenia, 59 familias invadieron en el barrio 7 de agosto y 120 en Los Cardenales; y en Puerto Tejada fueron desalojadas 2,000 personas que habían invadido terrenos periféricos (Mosquera, 1981).

Todas estas acciones permitieron que el reflujó temporal se lograra superar rápidamente. Desde los primeros meses de 1981 se inició una nueva fase de ascenso de las más importantes formas de lucha urbana desarrolladas en torno a los problemas de vivienda y servicios públicos. En este año se realizaron, en efecto, un total de 12 paros cívicos, nuevas invasiones urbanas y algunas protestas contra las alzas en el transporte colectivo. Entre los

paros cívicos se destacaron especialmente los realizados en las regiones de Santander, Chocó, Nariño y Putumayo, los cuales señalaron el comienzo de una etapa en la que los movimientos cívicos regionales adquirieron gran importancia. De las invasiones de terrenos urbanos, las de mayor relevancia fueron las del Atlántico que comprendieron tanto su capital como otros municipios del departamento. Las protestas contra alzas en las tarifas del transporte continuaron presentándose casi con exclusividad en las grandes ciudades del país manteniéndose una tendencia de clara diferenciación entre el tipo de luchas que se presentaban en las áreas metropolitanas y las que se realizaban en regiones de menor desarrollo.

El resultado directo de la reactivación de las acciones populares a nivel urbano fué la realización del segundo Paro Cívico Nacional el 21 de octubre de 1981. Como el primero, éste se escenificó principalmente en las grandes ciudades, pero a diferencia de aquél, el segundo tuvo un carácter más cívico que laboral. Mientras el paro nacional de 1977 se produjo por la confluencia del movimiento sindical y el movimiento cívico, el paro nacional de 1981 no logró articular efectivamente las dos formas más importantes de expresión del movimiento popular en Colombia (Santana, 1981).

La tendencia ascendente del movimiento cívico se acentuó aún más después del segundo paro cívico nacional. En 1982 se realizaron 22 paros cívicos y en los años siguientes el número siguió aumentando considerablemente. Entre agosto de 1982 y agosto de 1984 se registraron un total de 52 paros cívicos superando ampliamente el promedio mensual de estos movimientos en el período anterior. En general, si se observa la curva estadística de los paros cívicos a partir de 1960, se puede comprobar que llegaron a constituir una forma de lucha reivindicativa en pleno auge en los últimos años (Giraldo y Camargo, 1985).

Este auge cuantitativo del movimiento cívico en los últimos años estuvo acompañado además de importantes cambios cualitativos. La tendencia más interesante que se presentó en la fase reciente fue la integración de las distintas formas de lucha popular urbana en un mismo movimiento social. Como resultado del desarrollo desigual de las luchas urbanas en la década del setenta, el movimiento cívico llegó a convertirse en la modalidad de acción más avanzada y con mayores perspectivas en el panorama nacional. Con un prestigio cada vez mayor entre los sectores populares, los paros cívicos se convirtieron en un punto de referencia obligado para las organizaciones populares a nivel urbano. Las formas tradicionales de lucha como las invasiones de terrenos, las protestas contra las alzas en el transporte, las luchas barriales, las movilizaciones contra proyectos de renovación, etc., tendieron entonces a integrarse al movimiento cívico. De esta manera el movimiento cívico se convirtió en la modalidad particular que en Colombia asume el movimiento social urbano.

Otro significativo cambio experimentado por el movimiento cívico en el último periodo fue la consolidación de fuertes movimientos regionales en todo el país. En la década pasada varias regiones se destacaron por la realización de frecuentes paros cívicos con una amplia cobertura social y territorial; en algunas de ellas se constituyeron organizaciones populares con cierta estabilidad que le dieron continuidad a las luchas durante varios años. Sin embargo, en ninguna de esas regiones los movimientos cívicos sobrevivieron por mucho tiempo; en todos los casos las organizaciones cívicas se disolvieron espontáneamente o fueron desmontadas por la represión. De esas luchas regionales quedó empero una gran experiencia que fue recuperada por nuevos movimientos regionales surgidos en los primeros años ochenta. Por esta época varias zonas del país reactivaron sus organizaciones y emprendieron un proceso de reivindicación

regional de gran magnitud que ha caracterizado la última etapa de desarrollo del movimiento cívico.

Entre las regiones que mas contribuyeron a este proceso de consolidación del movimiento cívico a nivel regional se encuentra el Oriente Antioqueño. Esta es una de las regiones del país con mayor tradición en el movimiento cívico; entre 1960 y 1980 se realizaron en los distintos municipios de la región un total de 16 paros cívicos de carácter local y subregional. Con base en esta experiencia, a finales de 1981 se inició un movimiento regional de amplia cobertura en contra de una empresa estatal de energía, la Electrificadora de Antioquia (Ruiz, 1983). En el curso de ese conflicto se efectuaron dos paros cívicos regionales en septiembre y octubre de 1982 en los cuales llegaron a participar 19 de los 22 municipios del Oriente de Antioquia. Debido al incumplimiento de los acuerdos pactados el movimiento continuó desarrollándose y se extendió a la región del suroeste. Con esta nuevas fuerzas, en febrero de 1984 se realizó un paro cívico interregional en el que tomaron parte mas de 30 municipios, incluida la propia capital departamental.

Otro caso particularmente importante de movimiento cívico regional es el del departamento de Nariño. Esta fué una de la regiones que mayor nivel de movilización y organización alcanzó en los años setenta, realizando un gran número de paros cívicos de carácter local y regional. Sin embargo, a finales de la década, el movimiento decayó notablemente y desaparecieron sus principales organizaciones cívicas. No fué sino hasta 1983 que vino a reactivarse el movimiento con un encuentro de organizaciones populares que presentó al gobierno nacional un pliego de peticiones respaldado por un verdadero plebiscito. Frente al incumplimiento oficial, el movimiento siguió fortaleciéndose con la conformación de comités cívicos en 45 de los 55 municipios del departamento. Para presionar el cumplimiento de las promesas, el 23 de febrero de 1984 se

realizó un paro cívico departamental y 90 días más tarde se realizó una nueva jornada masiva de protesta que comprendió la mayor parte de los municipios nariñenses (Memorias Congreso Cívico, 1984).

Un proceso semejante se desarrolló en la región del Arauca. Allí también se contaba con una importante tradición de lucha y organización popular desde la década pasada. En 1972 se había realizado un paro regional con la participación masiva de los campesinos de la zona. El movimiento se mantuvo por algún tiempo pero a mediados de la década sus organizaciones desaparecieron. En estas condiciones permaneció el movimiento cívico hasta 1982 cuando nuevamente se presentó una coyuntura favorable para llevar a cabo un vigoroso paro cívico regional. Recogiendo la experiencia anterior, se movilizaron más de 10,000 personas durante 15 días. El ejemplar nivel de organización obligó al gobierno a aceptar en principio todas las exigencias pero, dada la importancia estratégica de la región, finalmente fué objeto de una represión generalizada que prácticamente acabó con el movimiento del Sarare.

Como en los casos del Oriente Antioqueño, Nariño y Arauca, también en otras regiones se desarrollaron movimientos de gran importancia durante los primeros años de la presente década. En Barrancabermeja se realizó en abril de 1983 un nuevo paro cívico en el que, como es tradicional, participó activamente el movimiento obrero a través de sus organizaciones sindicales. En Popayán, a raíz del terremoto de marzo de 1983 que dejó sin vivienda a una gran parte de la población, se reactivó un movimiento cívico en el que se agruparon 27 de los nuevos barrios de la ciudad. Y en general, durante el período 1981-84 en diversas partes surgieron movimientos regionales que marcaron la nueva etapa de desarrollo del movimiento cívico en Colombia.

Pero el desarrollo de este movimiento no se detuvo en la etapa de las luchas regionales. El último período del movimiento cívico se caracterizó igualmente por los repetidos intentos de alcanzar la unificación nacional de las distintas formas de acción de los sectores populares urbanos. Con base en las experiencias acumuladas a nivel regional, fueron convocadas varias reuniones que buscaban establecer mecanismos de coordinación del movimiento cívico popular en todo el país.

Este objetivo se logró finalmente con la realización del Primer Congreso Nacional de movimientos cívicos. En Octubre de 1983 se reunieron en Bogotá 97 delegados oficiales de los movimientos cívicos de todo el país. Como resultado de sus deliberaciones aprobaron una plataforma unificada de lucha, una estructura organizativa y unos principios básicos del movimiento. En la plataforma de lucha se recogieron las reivindicaciones más sentidas de las distintas regiones haciendo de ellas un planteamiento global. A nivel organizativo se acordó la creación de un comité coordinador nacional y de una secretaría operativa. Y como principios del movimiento cívico se acogieron el respeto por la democracia, la autogestión, la organización por la base y el impulso al poder popular.

La realización del Primer Congreso Nacional inició la más reciente etapa en el desarrollo del movimiento cívico en Colombia. Con él cristalizaron diversas tendencias que desde tiempo atrás se venían presentando hacia la unificación de las invasiones de terrenos urbanos, las luchas barriales por equipamientos y servicios, las protestas contra alzas en el transporte, los movimientos de defensa frente a planes de renovación y, muy especialmente, los movimientos cívicos. Todas estas diferentes formas de lucha urbana se desarrollaron inicialmente de manera aislada y espontánea pero a través de un largo proceso fueron convergiendo para formar un solo movimiento social que hoy comprende y articula a la mayoría de ellas. De

esta manera se constituyó en Colombia un vasto movimiento social urbano tan rico y complejo como otros movimientos de la misma naturaleza en varios países latinoamericanos.

De esta reseña histórica del desarrollo de los movimientos cívicos en Colombia resalta pues su magnitud e importancia. Como se ha visto, en las últimas décadas el país presenció la emergencia de modalidades inéditas de organización y movilización social que vinieron a sumarse a los tradicionales movimientos clasistas. Junto al movimiento obrero, campesino, estudiantil, indígena, etc., apareció el movimiento cívico como una nueva forma de conflicto que llegó a tener una destacada participación en los procesos de cambio social. Tal es su trascendencia que por él llegó a hablarse de la urbanización de la lucha de clases en Colombia para indicar con este término la creciente importancia de las luchas y movilizaciones urbanas (Campo, 1977).

#### REFERENCIAS

1. ALVARADO, Luis : (1981), "Notas sobre las perspectivas teóricas en el análisis de la luchas reivindicativas urbanas" en Revista Mexicana de Sociología, Núm 4, Octubre, México, pp. 105-125
2. ARANGO, Carlos : (1981), Crónicas de la lucha por la vivienda en Colombia, Bogotá, Editorial Colombia Nueva.
3. BORJA, Jordi : (1975), Movimientos sociales urbanos, Buenos Aires, Editorial SIAP.
4. CABRERA, Alvaro y otros : (1986), Los movimientos cívicos, Bogotá, Editorial CINEP, 119 pp.
5. CAMPO, Urbano : (1977), La urbanización en Colombia, Bogotá, Ediciones Suramérica.
6. CARRILLO, Jaime : (1981), Los paros cívicos en Colombia, Bogotá, Editorial La Oveja Negra, 306 pp.

7. CASTELLS, Manuel : (1972), "Proposiciones teóricas para una investigación experimental sobre los movimientos sociales urbanos", en Revista Mexicana de Sociología, México, Núm 1, Enero-Marzo, pp. 1-26.
8. ----- : (1974), Movimientos sociales urbanos, México, Siglo veintiuno editores, 118 pp.
9. ----- : (1980), La cuestión urbana, 7a. edic., "Advertencia final", Madrid, Siglo veintiuno editores, 517 pp.
10. ----- : (1981), Crisis urbana y cambio social, 2a. edic., México, Siglo veintiuno editores.
11. DELGADO, Oscar : (s.f.), El paro popular del 14 de Septiembre de 1977, Bogotá, Editorial latina, 217 pp.
12. EVERS, Tilman : (1982), Movimientos barriales y Estado Luchas en la esfera de la reproducción, Bogotá, Editorial
13. FONSECA, Luz Amparo : (1982), "Los paros cívicos en Colombia", en Desarrollo y Sociedad, Cuaderno núm 3, Bogotá, Universidad de los Andes CEDE, pp. 17-30.
14. GIRALDO, Javier y CAMARGO, Santiago : (1985), El movimiento cívico en Colombia, Bogotá, Editorial CINEP.
15. HOYOS, Andrés : (1978), "Paros cívicos : de Rojas al 14 de Septiembre", en Teoría y Práctica, Núms 12-13, Bogotá, pp. 81-82
16. LOJKINE, Jean : (1979), El marxismo el Estado y la cuestión urbana, México, Siglo veintiuno editores.
17. MEDINA, Medófilo : (1977), "Los paros cívicos en Colombia", en Estudios marxistas, Núm 14, Bogotá, pp. 3-24
18. MOSQUERA, Gilma : (1981), Colombia Luchas por el suelo urbano. Reseña histórica 1950-1981, Mimeo, Cali, Universidad del Valle.
19. PRIMER CONGRESO DE MOVIMIENTOS CIVICOS MEMORIAS : (1984) Bogotá, Foro Nacional por Colombia.
20. PERLO, Manuel y SCHTEINGART, Marta : (1984), "Movimientos sociales urbanos en México", en Revista Mexicana de Sociología, Núm 4 Octubre-diciembre, pp. 105-125
21. RUIZ, Carlos : (1983), Un pueblo en lucha: el Oriente Antioqueño, Medellín, folleto.



22. SANTANA, Pedro : (1983), Desarrollo regional y paros cívicos en Colombia, Bogotá, Editorial CINEP, Serie Controversia Núm 107, 207 pp.
23. ----- : (1981), El paro popular del 14 de septiembre de 1977, Bogotá, Editorial CINEP, Serie Controversia Núm 101, 136 pp.
24. SERNA, Alba Lucía y otros : (1980), Composición social y movilización política en los barrios populares de Medellín, Medellín, UNiversidad de Antioquia.
25. VARGAS, Julian : (1986), "El barrio popular: una perspectiva sociológica del sector informal urbano", en Poder político y estructura social, Medellín, Asociación Colombiana de Sociología Capítulo de Medellín, pp. 195-214
26. VARGAS, Jorge y ABUILAR, Luis : (1976), Planeación urbana y lucha de clases. Los circuitos viales, Bogotá, Editorial CINEP, Serie controversia núm 47.
27. VELANDIA, Crisanto : (1975), La movilización social en Barrancabermeja, Mimeo, Bogotá.
28. VILLEGAS, Jorge : (1980), El libro negro de la represión 1958-1980, Bogotá, Comité de solidaridad con los presos políticos, 365 pp.

## 2. LA INDUSTRIALIZACION Y LA URBANIZACION EN ANTIOQUIA

La causa inmediata del movimiento cívico de los municipios de El Peñol y Guatapé fué la ejecución de un gran proyecto hidroeléctrico en el río Nare, al oriente del departamento de Antioquia. El conflicto resultó fundamentalmente del grave deterioro de las condiciones de vida y de trabajo de los pobladores y campesinos de la región que produjo la construcción de las obras del Embalse de El Peñol y la Central de Guatapé.

Pero las condiciones objetivas de surgimiento de este movimiento cívico, así como de muchos otros de naturaleza similar en Antioquia y otras regiones de Colombia, están dadas en el sentido más general por las características del proceso de desarrollo económico nacional, especialmente en lo que se refiere a su desigual distribución territorial. En efecto, el propio proyecto hidroeléctrico del río Nare no puede entenderse más que en el contexto del proceso de industrialización, dentro del cual la ciudad de Medellín, capital del departamento de Antioquia, ha sido uno de los polos fundamentales a nivel nacional en el transcurso de este siglo.

### 2.1. DESEQUILIBRIOS DEL DESARROLLO REGIONAL EN COLOMBIA

En Colombia, al igual que en otros países latinoamericanos, la distribución de la población y de las actividades económicas en el territorio ha sido siempre muy desigual. Una de las

características de su desarrollo es precisamente la persistencia de grandes desequilibrios entre las diferentes regiones, lo cual se traduce en la pauperización y estancamiento de algunas de ellas al lado del enriquecimiento y progreso económico de otras. A esto se suman, además, las grandes diferencias que se dan entre las condiciones de vida de la ciudad y el campo, las cuales se han visto acentuadas en las últimas décadas por el acelerado proceso de urbanización.

Sin embargo, un rasgo que distingue a Colombia de muchos otros países de América Latina es que la concentración de la población y las actividades industriales no se da exclusivamente en un solo centro urbano. A diferencia de la conocida macrocefalia que caracteriza el proceso de urbanización del subcontinente, en el país existe una amplia red de ciudades relativamente equilibrada. Aunque obviamente hay una primacía urbana de Bogotá como la capital del país, las demás ciudades se escalonan en una jerarquía que no presenta las profundas diferencias en tamaño poblacional e importancia económica de otros sistemas urbanos (Jarámillo, 1987).

La razón fundamental que explica esta baja primacía urbana en Colombia es la peculiar historia de su configuración territorial. Desde épocas precolombinas la estructura espacial del país presenta como rasgo característico, que aún hoy sigue prevaleciendo, la existencia de varias regiones muy heterogéneas y débilmente integradas. Este hecho, que obedece a circunstancias de tipo geográfico e histórico, ha incidido en forma determinante en el desarrollo económico del país y en especial en el patrón de localización de la industria desde principios de siglo hasta el presente.

Avanzando en el desarrollo de esta tendencia histórica, en el curso del presente siglo varias ciudades colombianas crecieron y se consolidaron como centros de las diferentes regiones socio-

económicas en que se divide el país. No fué posible que se constituyera una sola ciudad primada pero aparecieron numerosos núcleos urbanos que sirvieron de eje a los diferentes procesos regionales de desarrollo. "A nivel de cada región en la que se fragmenta el mercado aparecen entonces una multiplicidad de focos, cada uno sirviendo de eje a un proceso de acumulación regional" (Jaramillo, 1987:360). En cierta forma la concentración de la población y de las actividades que no se dió a nivel nacional tuvo lugar a escala regional en donde efectivamente se generó una macrocefalia urbana con características similares a la conocida en otros países.

Uno de los casos mas representativos de este proceso es precisamente la ciudad de Medellín, centro de la región antioqueña. Situada en la Cordillera de los Andes, en el occidente colombiano, Antioquia es una de las cuatro regiones socioeconómicas mas importantes del país. Su territorio es en gran parte una zona de montañas muy escarpadas que, debido a las dificultades de comunicación, permaneció durante mucho tiempo aislada de las otras regiones colombianas. Históricamente la región antioqueña comprendía los territorios de lo que hoy son los departamentos de Antioquia y el Viejo Caldas, así como parte de los departamentos del Valle y Chocó.

Durante el período colonial, la única actividad que floreció en esta región fué la minería del oro. Con la crisis de esta actividad "en el siglo XVIII Antioquia pasó a ser una de las regiones mas pobres en Colombia" (Poveda, 1982:44). Por la mala calidad de sus tierras, la agricultura no tuvo entonces el dinamismo necesario para impulsar el desarrollo regional. Sin embargo, despues de la independendencia, en el siglo XIX, la minería se reactivó con la utilización de nuevas técnicas y comenzó a tener un gran auge el comercio directamente relacionado con la explotación del oro. A estas actividades se sumó a finales de siglo el cultivo y exportación del café que vino a aportar nuevas

condiciones para el surgimiento de la industria en Antioquia a comienzos del siglo XX (Palacios, 1982: 85).

De hecho "Antioquia es la región con la mas antigua tradición industrial en Colombia y Medellín es la ciudad colombiana con la mas antigua tradición industrial" (Vellinga and Kruijt, 1983:113). Allí se dió de manera original y temprana un importante proceso de industrialización poco común en América Latina. En efecto, desde las primeras décadas de este siglo, en Antioquia concurrieron toda una serie de factores que propiciaron el surgimiento de una pujante industria, que desde entonces se ha venido desarrollando en el contexto de las mas variadas coyunturas nacionales e internacionales. Durante este proceso Medellín ha sido en varias etapas el mas importante centro industrial colombiano.

El sector fundamental del proceso de industrialización antioqueño fué desde un principio, y aún continúa siéndolo, la industria textil. Este sector fué pionero del desarrollo capitalista en Colombia, particularmente en el departamento de Antioquia. "La industria textil antioqueña se desarrolló rápidamente en las dos primeras décadas de este siglo, no obstante el hecho de que en la década final del siglo XIX la manufactura textil hubiera estado atrasada" en la región (Brew, 1977:293). En 1902 se fundó en Medellín la Compañía Antioqueña de Tejidos que fué la primera empresa textil de importancia en el país. A esta la siguieron otras grandes empresas en los años posteriores, de tal manera que para la década del veinte ya contaba la región con un importante número de establecimientos industriales entre los cuales destacaban varias fábricas de hilados y tejidos (Londoño, 1983:20).

## 2.2. DESPEGUE DE LA INDUSTRIA ANTIOQUEÑA 1900-30

En general, el proceso que condujo a la industrialización en Antioquia fué bastante complejo. Factores de muy diverso orden contribuyeron al surgimiento y rápido desarrollo de la industria en la región.

La acumulación originaria de capital durante el siglo XIX tuvo su principal fuente en las actividades mineras; pero a comienzos del siglo XX el cultivo y comercialización del café generaron también una considerable masa de capitales (López, 1982:205). Sin embargo, las riquezas generadas por el oro y el café fueron controladas indirectamente por una élite de comerciantes cuyo poder económico, político y social en la región era hegemónico. Fué esta misma burguesía comercial la que creó las primeras industrias cuando, por efectos de la guerra civil, a comienzos de siglo se presentó una crisis en el comercio y las inversiones debieron dirigirse hacia otras actividades mas rentables (Botero, 1985:177).

Paralelamente a este proceso, en la región se constituyó un amplio mercado interno que operó como un poderoso estímulo de la temprana industrialización. En la creación de este mercado también jugó un importante papel la economía cafetera. Basado en una amplia masa de capesinos parcelarios, el cultivo del café generó importantes ingresos que incrementaron notablemente la demanda de bienes de consumo. A ésta se sumó además la demanda de la población de los numerosos centro urbanos fundados en desarrollo de la colonización antioqueña que significó una gran ampliación de la frontera agrícola en dirección al sur (Parsons, 1961). Estas demandas crearon un mercado suficiente para justificar las inversiones locales en la producción de bienes de consumo ligero.

La naciente industria antioqueña pudo igualmente contar con una adecuada provisión de fuerza de trabajo, aunque en este caso la industrialización no implicó la descomposición de la economía campesina cafetera. En los comienzos de la industrialización la mano de obra fué abastecida por las economías campesinas con el aporte de excedentes de población, sin que se afectara la familia como unidad económica básica. En particular, la industrialización recibió aquella mano de obra sub-utilizada en la unidad familiar, especialmente las mujeres. Así, las primeras industrias textiles en Medellín emplearon fundamental, y casi exclusivamente, mano de obra femenina (Londoño, 1983:25).

Otro factor importante para el surgimiento de la industria antioqueña fué la disponibilidad de divisas que provenían de las exportaciones de oro y café. Con ellas fué posible traer máquinas y equipos del exterior, a pesar de las dificultades que ofrecían los deficientes medios de comunicación disponibles en la época. Esto fué favorecido en parte por una política estatal proteccionista que estimuló las iniciativas privadas de industrialización.

Además de estas circunstancias de orden económico y social, Antioquia contaba con una serie de condiciones naturales que favorecieron la localización de plantas industriales. En particular Medellín y los demás municipios del Valle de Aburrá disponían de importantes recursos de carbón en las cercanas minas de Amagá. Pero "mucho mas importancia tuvo la provisión de fuerza eléctrica de origen hidráulico, particularmente económica y fácil en la región" (Ospina, 1974:470). La económica disponibilidad de fuerza eléctrica de origen hidráulico fué efectivamente uno de los factores que determinó la implantación de las industrias en Medellín y sus alrededores. La construcción de las primeras grandes fábricas textiles se realizó precisamente teniendo en cuenta su ubicación topográfica y la abundancia de aguas.

Este aprovechamiento de las corrientes de agua para generar energía eléctrica fué desde un principio un factor de singular importancia en la industrialización de Medellín. El uso de la energía eléctrica como fuente primaria de potencia en la producción se prefirió a otras posibles fuentes disponibles como el carbón mineral, el vapor de agua o la fuerza animal. Precisamente "una de las mas significativas innovaciones tecnológicas de la industria antioqueña en la década de los veinte fué la adopción del motor eléctrico como fuerza motriz primaria en las fábricas" (Poveda; 1976, 37). Para esta época casi todas las grandes factorías textiles contaban con su propia generación eléctrica utilizando caídas de agua muy próximas.

La circunstancia de la fácil y económica disponibilidad de energía eléctrica de origen hídrico determinó además una temprana electrificación de la ciudad. Desde finales del siglo XIX Medellín contó con una pequeña planta hidroeléctrica que aprovechaba las aguas de la cercana quebrada de Santa Elena alcanzando a generar unos 250 kilovatios/hora. Con base en esta planta, en 1898, la recién constituida Compañía Antioqueña de Instalaciones Eléctricas puso en servicio el primer alumbrado público de la ciudad que apenas contaba con unas 2,500 lámparas (Barrera, 1982:21). Pero la generación eléctrica era todavía muy limitada y ni aún las sucesivas ampliaciones de la planta original permitieron el uso industrial de la energía eléctrica de servicio público. Esto sólo fué posible hasta 1921 cuando se puso en funcionamiento la nueva Planta Hidroeléctrica de Piedras Blancas con una capacidad de 2,000 kilovatios, de los cuales el 30% se dedicaron a la industria.

Con el desarrollo y creciente importancia de los servicios públicos, y en especial del servicio de energía eléctrica, pronto se hizo necesario su control estatal. Los primeros pasos en este sentido se dieron en 1913 con una empresa municipal de acueducto que se encargó del suministro de agua potable. Pero sólo fue



hasta 1920 que se logro plenamente la municipalización del conjunto de los servicio públicos que hasta entonces estaban en manos de particulares. Ese año se crearon las Empresas Públicas Municipales de Medellín como entidad descentralizada que tomó el manejo de los servicios de energía, acueducto, alcantarillado, teléfonos, mercado, plaza de ferias y matadero (Barrera, 1982:40).

Así, para finales de la década del veinte, Colombia en general y Antioquia en particular habían sufrido profundas transformaciones económicas. El café se había consolidado como pilar fundamental de la economía y principal fuente de divisas. El país y la región contaban con una incipiente pero vigorosa base de industrias manufactureras de bienes de consumo final. El mercado interno se había expandido y ofrecía especiales incentivos a la producción de nuevas mercancías. Se había desarrollado un importante mercado de trabajo estimulado por un auge en la construcción de obras públicas financiadas por el Estado. Como resultado de este esfuerzo existía ya una importante red de carreteras y ferrocarriles que a pesar de sus limitaciones facilitaba el comercio. Y "la energía eléctrica era ya la fuente mas importante de energía comercial, al menos en las principales ciudades", entre las que se destacaba Medellín (Poveda, 1976:56).

Sin embargo, ni el despegue industrial ni la notable mejora de las comunicaciones, lograron integrar plenamente al país. El aislamiento y una relativa autarquía de las diferentes regiones soioeconómicas continuó siendo la característica básica de la configuración espacial colombiana. "Los mercados siguieron siendo regionales y las industrias tendieron a localizarse en los centros urbanos de esas regiones" (JARAMILO, 1987:43). En el caso de Antioquia, Medellín se consolidó como el núcleo industrial de una extensa región a la cual controlaba con base en

sus ventajas comparativas y a través de una compleja red comercial.

### 2.3. DESARROLLO INDUSTRIAL POR SUSTITUCION DE IMPORTACIONES 1940-45

Estas eran las condiciones del desarrollo económico nacional y regional cuando sobrevino la crisis capitalista mundial a comienzos de la década de los treinta . El efecto inmediato en Colombia fué el súbito desabastecimiento de un gran volumen de productos extranjeros que tradicionalmente se venían importando. Se creó entonces la posibilidad de cubrir la amplia demanda existente con la masiva producción de manufacturas nacionales . A partir de allí se consolidó el proceso de industrialización iniciado en la década anterior , a través del modelo de sustitución de importaciones. Para esto se aprovechó al máximo la capacidad instalada que hasta entonces se encontraba relativamente ociosa (López, 1982:209).

La consolidación de la industrialización a través de la sustitución de importaciones fué un proceso particularmente intenso en Antioquia. Ante el desabastecimiento de los mercados internos, a partir de 1932 se inició un vertiginoso crecimiento de la producción fabril. "El número de empresas industriales mas que se triplicaron en el período 1930-1945 pasando de 356 a 1288; 789 de las cuales estaban localizadas en Medellín" (Vellinga and Kruijt, 1983:68). Esta ciudad se convirtió así en el centro industrial mas pujante del país, sobrepasando incluso a Bogotá a pesar de tener menor población. En particular en Medellín se estableció el mayor complejo de producción textil, que era justamente la rama industrial mas dinámica en la época (Jaramillo, 1987:354).

En el curso de este proceso se dieron significativos avances tecnológicos. Inicialmente la producción industrial se había dedicado a la producción de bienes de consumo básico como

alimentos, bebidas, textiles y vestidos. Pero en 1937 se dió un importante paso hacia la producción de bienes de capital con el establecimiento de la Empresa Siderúrgica de Medellín, en donde fué posible la instalación de un horno eléctrico de arco gracias a la disponibilidad de energía eléctrica barata y abundante (Poveda, 1976:115). Mas tarde, en la década de los cuarenta, surgieron nuevos sectores industriales como el de los químicos y bienes de consumo duradero.

Aunque desde principios de siglo la industria antioqueña se venía concentrando en el Valle de Aburrá, también existían algunos establecimientos fabriles en otros municipios del departamento de Antioquia. Sin embargo, la crisis mundial de los años treinta prácticamente puso fin a las actividades industriales fuera de Medellín y sus municipios vecinos. En estas condiciones solo se mantuvieron algunas empresas del sector primario con insumos muy localizados. "En las décadas siguientes las industrias se asentaron exclusivamente en el Valle de Aburrá" (Vellinga and Kruijt, 1983:81).

Otra característica sobresaliente de la industrialización en Antioquia durante este período fué la escasa ingerencia de empresas o capital extranjero. En general, las inversiones en los sectores industriales, tanto tradicionales como nuevos, fueron financiadas por capital antioqueño (Vellinga and Kruijt, 1983:115). Esta situación contrastaba con la que simultaneamente se presentaba en otras partes del país donde el capital extranjero jugó un importante papel en el desarrollo industrial.

El acelerado desarrollo industrial del período 1930-1945 determinó, por otra parte, el crecimiento de las principales ciudades del país y, en general, el desencadenamiento de una rapidísima urbanización. Los avances en la infraestructura sanitaria hicieron caer bruscamewnte la mortalidad mientras las pautas de fecundidad se mantenían, todo lo cual produjo un veloz

crecimiento poblacional. Se generó así un excedente demográfico, especialmente en las áreas rurales donde las condiciones de la estructura agraria impedían absorber nuevos contingentes de mano de obra. Esta sobrepoblación rural se orientó entonces hacia las actividades urbanas, entre las cuales la industria ocupaba un destacado lugar. El crecimiento de los núcleos industriales, alimentado por la migración campesina, fué, sin duda, uno de los fenómenos sociales más relevantes de la época (Jaramillo, 1987:353-354).

En el caso de la ciudad de Medellín, la etapa de la consolidación industrial significó también la aceleración de su crecimiento poblacional. La expulsión de campesinos de su región de influencia y las expectativas creadas por las nuevas actividades urbanas propiciaron un gran éxodo de migrantes hacia el Valle de Aburrá y especialmente hacia Medellín como su principal centro industrial. La ciudad pasó, en efecto, de 83,955 habitantes en 1928 a 143,952 en 1938 y a 358,189 en 1951. De este apreciable incremento demográfico, las migraciones aportaron un total de 27,237 personas en el primer período intercensal y de 119,956 en el segundo. En general, la población de Medellín creció a tasas del 3.51 % anual en el período 1928-38 y del 5.88 % en el período 1938-51, siendo esta última la más alta tasa de crecimiento poblacional de la ciudad en toda su historia. De esta manera, la participación de Medellín en la población del departamento de Antioquia más que se duplicó entre 1928 y 1951 al pasar del 10 al 23 %. (Barrera, 1982:45y71).

Con este acelerado desarrollo industrial y urbano, en el período 1930-1945 comienza a jugar un mayor papel la capacidad para crear la necesaria infraestructura urbana. "Esto es relevante en lo que se refiere directamente a la producción y en ello se destaca el suministro de electricidad en tanto fuerza energética de mucha importancia, como lo que respecta a otros servicios públicos y consumos colectivos ligados a la reproducción de la

fuerza de trabajo" (Jaramillo, 1987:44). Desde entonces se hizo evidente la estrecha relación entre desarrollo industrial y urbano, especialmente en las cuatro grandes ciudades del país donde se concentraban los establecimientos fabriles.

En este sentido se destacó también la ciudad de medellín. En el transcurso de la década de los treinta y primeros años cuarenta sus empresas municipales de servicios públicos recibieron un gran impulso. A través de un largo proceso de modernización, orientado a adecuarse a las exigencias planteadas por el desarrollo de la ciudad, las Empresas Públicas Municipales experimentaron varias reorganizaciones administrativas. En 1932 pasaron a denominarse Departamento de Empresas y Servicios, el cual estaba directamente bajo el control del Concejo Municipal. Cuatro años mas tarde recuperaron parcialmente su autonomía administrativa y en 1942 la consolidaron definitivamente. En este último año se separaron del resto de la administración municipal y se reorganizaron en tres secciones: del servicio de energía eléctrica, la primera; de los servicios de teléfonos, tranvía y acueducto, la segunda; y de los servicios de mercado, matadero, y ferias, la tercera (Barrera, 1982:52-55).

Esta modernización de las empresas municipales permitió una notable mejora cuantitativa y cualitativa de los servicios públicos en la ciudad de Medellín. En 1936 se instaló la primera planta automática de teléfonos con una capacidad de 10,000 líneas. Ese mismo año se iniciaron los trabajos de construcción de la primera planta de purificación del acueducto que distribuía las aguas de las quebradas de Santa Elena y Piedras Blancas. La obra se terminó en 1943 cuando entró en servicio la planta de agua potable de Villa Hermosa. Hasta ese momento el agua consumida por la población urbana sólo recibía clorinación (Barrera, 1982:55-64).

Pero el servicio público que mayores avances tuvo durante esta época fue con mucho el de la energía eléctrica. En efecto, desde finales de la década del veinte y comienzos de la del treinta se realizaron en Antioquia las primeras exploraciones orientadas a determinar su potencial hidroeléctrico. Ante la creciente demanda de energía resultante del desarrollo industrial, las Empresas Públicas Municipales emprendieron un programa de reconocimiento de las caídas de agua con posibilidades de utilización hidroeléctrica situadas en la región circundante de la ciudad hasta una distancia de 100 kilómetros. Desde entonces se identificaron, entre otras, las fuentes que luego serían la base de los grandes proyectos hidroeléctricos antioqueños: Guadalupe, Riogrande y Guatapé. Todos estos proyectos se fueron realizando sucesivamente para atender las enormes necesidades del crecimiento industrial y urbano de Medellín.

#### 2.4. INDUSTRIALIZACION Y CRECIMIENTO ACELERADO DE MEDELLIN 1945-64

Al terminar la segunda guerra mundial Antioquia continuaba siendo la principal región industrial en Colombia. El primer censo industrial realizado en el país en 1945 permitió constatar la supremacía antioqueña en este campo, toda vez que el departamento generaba cerca de la cuarta parte del producto industrial de la nación (Gaviria, 1982:241). Esta posición se debía en gran medida a un extraordinario crecimiento de la producción textil durante los años del conflicto bélico. En este período el sector textil se había conservado como el sector más dinámico de la industria antioqueña.

El dinamismo industrial en Antioquia se mantuvo durante toda la década de los años cincuenta. El crecimiento económico se vio favorecido por la bonanza cafetera que con sus divisas permitió una necesaria reposición y modernización de la maquinaria y

equipos utilizados hasta entonces. La nueva situación cafetera de los años cincuenta determinó además una ampliación del mercado interno que estimuló la producción nacional. En estas circunstancias, la industria antioqueña, básicamente productora de bienes de consumo, continuó creciendo aceleradamente. Entre 1945 y 1958 la producción textil en antioquia se multiplicó 15 veces (Londoño, 1983:41).

Sin embargo, a pesar del extraordinario crecimiento de la industria antioqueña "la mayoría de las nuevas empresas se asentaron en ese período en Bogotá. Antioquia perdió su posición de primera región industrial en Colombia después de 1956" (Vellinga and Kruijt, 1983:69). Así, en este período "hubo una clara reestructuración dentro del grupo de regiones centrales. Hubo una centralización de la producción en Cundinamarca (Bogotá). Valle y aún más Antioquia se quedaron atrás en términos de crecimiento" (Helmsing, 1984:136).

Esta nueva posición de la industria antioqueña en el contexto nacional se debió fundamentalmente a las características de su inserción en el proceso de sustitución de importaciones. Al principio las industrias dedicadas a la producción de bienes de consumo final experimentaron un crecimiento más acelerado; pero más tarde las que presentaron los mayores incrementos fueron las nuevas ramas de actividad tales como las productoras de bienes de consumo duradero e intermedios (Helmsing, 1984:130). Para el caso de Medellín esta tendencia tuvo un efecto negativo importante dado que precisamente su estructura industrial se caracteriza por el gran peso específico que tiene el sector de bienes de consumo final. El resultado fue que la industria antioqueña presentó una mayor rigidez para responder al cambio de énfasis en el proceso sustitutivo y entonces otras regiones, especialmente Cundinamarca, tomaron la delantera aprovechando sus ventajas de localización y de mercado.

Pero esto no significó en modo alguno un estancamiento del desarrollo industrial de Antioquia ni de su industria textil en particular. Entre 1958 y 1963 la industria antioqueña se expandió a tasas promedio de del 11.4% anual (Gaviria, 1982:241). Este elevado crecimiento industrial se debía en gran parte al sector textil favorecido por la sustitución de bienes intermedios, el abaratamiento de sus materias primas, la mayor integración vertical de sus empresas y la mas alta productividad resultante de las nuevas inversiones en equipo (Londoño, 1983:45-46). En estas condiciones, la producción textil antioqueña creció a una tasa del 12% anual en el mismo período.

El sostenido desarrollo de la industria antioqueña durante toda la década del cincuenta y primeros años del sesenta tuvo enormes repercusiones sobre las estructura urbana del Valle de Aburrá. Este fué el período en el que se dió un acelerado proceso de urbanización entendido no solo como la concentración territorial de la población sino también como un amplio proceso de cambio social. En Medellín, además del explosivo crecimiento de la población, se produjeron profundas transformaciones en la vida económica, política y cultural que la convirtieron en una de las mas modernas aglomeraciones urbanas de Colombia.

El fenomeno de mayor impacto en Medellín durante los años cincuenta fué sin duda el mantenimiento de las altas tasas de crecimiento de la población urbana que ya se venían registrando desde dos décadas atrás. En esta situación influyó significativamente la violencia política desatada con particular fuerza en esos años, la cual vino a sumarse a los tradicionales factores de expulsión campesina y de atracción de las actividades industriales y urbanas. Como resultado de estos procesos el crecimiento demográfico de Medellín conservó niveles muy elevados con una tasa del 5.83% anual durante el período 1951-1964. En el censo realizado en este último año la ciudad tenía un total de 772,887 habitantes, que representabanmas del



doble de la población registrada en el censo anterior. También en el contexto regional la participación de Medellín en la población departamental aumentó al 31% (Barrera, 1982:84).

Este acelerado crecimiento de la población tuvo importantes efectos sobre la configuración espacial de la ciudad. Durante la década del cincuenta Medellín comenzó a adquirir los rasgos fundamentales de su estructura urbana. En este período proliferaron la especulación con terrenos urbanos, las invasiones de tierras urbanizables, los barrios clandestinos, las viviendas construidas en zonas inadecuadas y, en general, empezaron a evidenciarse fenómenos de deterioro físico y ambiental en algunas áreas. La diferenciación social se hizo entonces mas notoria dando lugar a una acentuada segregación territorial de los diferentes sectores sociales, que aún hoy se mantienen como uno de los rasgos distintivos de la organización socio-espacial de la ciudad.

Por otro lado, las exigencias de la industrialización y el correspondiente proceso de urbanización tuvieron una respuesta político-administrativa relativamente adecuada en Medellín. La municipalidad se fué modernizando y constituyendo diferentes entes especializados, tales como las Oficinas de Valorización y de Obras Públicas a las cuales se encargó la construcción de las principales obras de infraestructura de la ciudad. Los servicios públicos también fueron objeto de especial interés y para su manejo se reorganizaron las empresas municipales. En 1952 se crearon las Empresas Varias que tomaron a su cargo los servicios de matadero, feria de ganado, planta de leche y transporte colectivo.

Simultáneamente se restablecieron las Empresas Públicas a las cuales se les asignó el manejo de los servicios de energía eléctrica, acueducto, alcantarillado y teléfono. Esta entidad se fortaleció aún mas en 1955 cuando definitivamente tomó el nombre

de Empresas Públicas de Medellín y legalmente se constituyó en una sección administrativa autónoma, con personería jurídica propia y patrimonio independiente para proveer los servicios públicos antes señalados en la ciudad de Medellín y otros municipios del departamento de Antioquia (Barrera, 1982:77).

Con la modernización de la administración municipal fué posible que ésta asumiera un cierto control del proceso de expansión urbana que ya empezaba a volverse caótico. Para ello se contrató la elaboración del primer plan de desarrollo urbano de la ciudad con los urbanistas europeos Paul Lester Wiener y José Luis Sert. Así Medellín fué la primera ciudad en Colombia que pudo contar con un Plan Piloto en el que se seguían los principios formulados por los Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna y las propuestas urbanísticas de Le Corbusier. Este plan estableció las directrices generales sobre usos del suelo y transporte que en 1959 fueron aprobadas por el Concejo Municipal con la denominación de Plan Director de la ciudad (Planeación Metropolitana, 1985:27).

Durante el mismo período las Empresas Públicas continuaron mejorando los servicios públicos necesarios para atender las demandas de la creciente aglomeración industrial y urbana. En este proceso la energía eléctrica siguió siendo el servicio público de mayor expansión a través de lo que desde entonces se conocieron como grandes proyectos. En 1949 entró en servicio la segunda etapa de la Central de Guadalupe con una capacidad de 10,000 kilovatios y en 1952 se pusieron en funcionamiento las dos primeras unidades de la Central de Riogrande generando kilovatios adicionales. Con estos nuevos aportes la oferta de energía llegó incluso a superar a la demanda pues mientras la capacidad generadora ascendía a 100,000 kilovatios, la demanda energética solo llegaba a los 78,000 kilovatios (Barrera, 1982:75). Para extender el servicio, desde 1951 se había iniciado la instalación de un moderno sistema subterráneo de

distribución de energía en el área de central de la ciudad y en 1953 se emprendió la rehabilitación y ampliación del resto de la red de distribución.

#### 2.4. MODELO EXPORTADOR Y METROPOLIZACION DEL VALLE DE ABURRA 1964-74

En tales condiciones avanzaba el desarrollo industrial y urbano de Antioquia a principios de la década del sesenta cuando el país en su conjunto entró en una fase de recesión económica. Entre 1963 y 1967 se evidenció en Colombia el agotamiento del proceso de sustitución de importaciones que encontró una gran barrera en la estrechez del mercado interno. En este período terminó entonces la primera etapa del proceso de industrialización colombiano que desde sus comienzos fué un típico proceso de desarrollo por sustitución de importaciones.

Esta nueva coyuntura de la industria nacional se vivió con mayor intensidad en Antioquia y particularmente en su sector textil. En el período 1963-1967 la industria antioqueña creció solo a un 3% anual, lo cual representaba casi la cuarta parte del quinquenio anterior y tan solo la mitad del promedio nacional. Frente a las restricciones del mercado interno, el sector que resultó más drásticamente afectado fué el productor de bienes de consumo cuyo peso en la estructura industrial era sustancialmente mayor en Antioquia. En estas condiciones la producción textil antioqueña registró durante el período la más fuerte reducción en su ritmo de crecimiento. La sustitución casi completa de las importaciones de tejidos determinó un estancamiento de la producción del sector textil que no logró diversificar su producción. Como resultado el sector textil de la región apenas alcanzó en esos años tasas de crecimiento del 1% anual (Gaviria, 1982:242).

Pero esta fase de recesión industrial fué rápidamente superada tanto a nivel nacional como regional. A finales de la década del sesenta comenzaron a darse una serie de impulsos a las exportaciones para acelerar nuevamente el crecimiento industrial. En esos años se decretaron un conjunto de reformas por las cuales se estableció un nuevo sistema cambiario, se aumentaron los incentivos fiscales a las exportaciones, se liberalizaron las importaciones y se constituyó el Pacto Andino con la pretensión de convertirlo en un mercado común de varios países. "El objetivo principal de las reformas de 1968 era establecer las exportaciones como generador de crecimiento económico y para este fin se requirió un reajuste estructural de la economía" (Helmsing, 1984:135). De esta manera el proceso de industrialización en Colombia entró en una nueva etapa de su desarrollo: del modelo de sustitución de importaciones se pasó al modelo de desarrollo exportador.

Antioquia fué una de las primeras regiones en beneficiarse del nuevo modelo de desarrollo hacia afuera. Con el auge de las exportaciones la industria antioqueña se reactivó prontamente, de tal manera que entre 1976 y 1970 logró expandir su producto a tasas del 8.5% anual (Gaviria, 1982:242). Esta fué una de las fases de mayor auge de la industria regional y sobre todo de su sector textil que obtuvo los máximos incrementos. Estimulada por la apertura de los mercados externos y el desarrollo de nuevos mercados internos como los de las fibras sintéticas y los tejidos de punto, la industria textil antioqueña creció a tasas del % anual durante todo el período 197.-1974. ( )

En general, la nueva etapa del desarrollo industrial, jalonado por el sector externo, tuvo un gran éxito en Colombia durante los primeros años de la década del setenta. En efecto, entre 1970 y 1974 las exportaciones colombianas de manufacturas crecieron a tasas promedias superiores al 100%, llegando a reducir significativamente el peso del café en el valor total

exportado (Gaviria, 1982:238). Esta reorientación hacia los mercados externos permitió una rápida expansión de la producción de la industria nacional que en el mismo período tuvo tasas de crecimiento del 8 al 10% anual (Poveda, 1976:81).

Otro de los importantes efectos de la nueva estrategia de desarrollo fué la modificación de la estructura industrial del país ya que las exportaciones empezaron a tener una participación creciente en la oferta total de la industria. Esta reestructuración de la oferta industrial fué especialmente notable en algunos sectores de gran importancia en la industria antioqueña. Para 1974 las exportaciones alcanzaron a representar el 24% del producto total del sector textil y el 30% del sector de las confecciones, los cuales, a su vez, representaban cerca de la mitad de la producción industrial de Antioquia. De esta manera, a partir de comienzos de la década del setenta, la industria regional llegó a tener una estrecha relación con el mercado mundial a través de las exportaciones.

A pesar de los drásticos cambios estructurales de la economía colombiana, el proceso de desarrollo industrial y urbano en Medellín no se detuvo; por el contrario se consolidó definitivamente. Una vez superada la recesión que se presentó ante el agotamiento del modelo de sustitución de importaciones y con el auge de la producción y las exportaciones manufactureras, la industria antioqueña evidenció sus tendencias hacia la concentración y polarización que beneficiaban directamente al Valle de Aburrá en detrimento del resto del departamento.

Efectivamente, durante los años sesenta se manifestaron claramente los efectos espaciales de la peculiar dinámica de localización industrial en Antioquia. Para esta época en el Valle de Aburrá ya estaban concentrados la mayor parte de la población, el ingreso, el empleo, los recursos y la infraestructura del departamento. En 1964 Medellín y los municipios vecinos albergaban

el 43% de la población antioqueña, controlaban el 92% de los empleos industriales y generaban el 96% del producto industrial. En general, la concentración de las actividades en esta zona determinó una intensa polarización de la economía antioqueña que territorialmente se organizó en forma concéntrica a su alrededor. De esta manera se produjo regionalmente una muy clara macrocefalia urbana que contrasta fuertemente con el moderado nivel de primacia urbana que se manifiesta en Colombia.

A nivel nacional, en la década del sesenta se llegó al punto de inflexión de la curva de crecimiento demográfico. También para el Valle de Aburrá comenzó a desacelerarse el crecimiento de la población debido fundamentalmente al efecto de las campañas antinatalista y la disminución del flujo de población inmigrante. En el caso de Medellín, el ritmo de crecimiento tuvo un quiebre significativo en el período intercensal 1964-1973 ya que bajó a tasas del 4.3% anual. No obstante esta tendencia, al comenzar la década del setenta la ciudad superó el millón de habitantes. En el censo de 1973 Medellín tenía una población de 1,151,762 personas y continuaba siendo el segundo centro urbano del país (Barrera, 1982:94).

Pero el fenómeno más importante desde el punto de vista territorial en la década del sesenta fue el inicio del proceso de metropolización del Valle de Aburrá. Dado el acelerado crecimiento de la población en las décadas anteriores y la gradual expansión de la mancha urbana, tanto de Medellín como de sus localidades vecinas, se empezó a conformar un área en la que se confundieron las respectivas infraestructuras y se borraron las antiguas fronteras municipales. En los años sesenta prácticamente quedaron incorporados en una misma unidad urbana los territorios de los municipios de Medellín, Bello, Itagüi y Envigado. Desde entonces estos municipios comparten idénticos problemas de orden social, económico y administrativo en un

territorio común que de hecho se constituyó en un área metropolitana.

Básicamente el área metropolitana del Valle de Aburrá se conformó por la conurbación de Medellín y sus municipios mas próximos. Sin embargo, el ámbito territorial de interacción de los diferentes procesos económicos y sociales era mas amplio e incluía también a la mayor parte de los demás municipios del Valle de Aburra. Así, el área metropolitana de Medellín llegó a comprender la casi totalidad del territorio de los 10 municipios que se localizan en este valle. En 1973 estos municipios tenían en su conjunto una población de 1,601,804 personas, de las cuales el 91.4% habitaba en las áreas urbanas. Tal población representaba el 50.4% de la población antioqueña, con lo que el área metropolitana pasó a ser en ese año la región mas poblada del departamento de Antioquia (Planeación Metropolitana, 1985:62).

Uno de los factores que mas contribuyó a este proceso de metropolización en el Valle de Aburra fué la integración de la infraestructura de servicios básicos de los distintos municipios. En esto jugaron un papel clave las Empresas Públicas de Medellín a través de la ampliación permanente de sus redes de servicios públicos. Desde 1962 las Empresas entraron a prestar el servicio de energía eléctrica a municipios distintos a Medellín. Para 1973 la energía generada por ellas llegaba ya a 69 localidades antioqueñas en forma directa o a través de la Electrificadora de Antioquia y sus Circuitos Eléctricos. En ese mismo año se firmaron los primeros convenios para la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado a los municipios mas próximos del Valle de Aburrá (Barrera, 1982:99).

En general, la cobertura de los servicios públicos en el área metropolitana de Medellín creció notablemente durante la década del sesenta. Entre 1960 y 1970 la capacidad de generación

eléctrica pasó de 137,000 a 429,000 kilovatios y el número de suscriptores a este servicio de 99,910 a 168,500. En el mismo decenio, el número de abonados al servicio telefónico se elevó de 48,556 a 118,000 y el de conexiones al servicio de acueducto pasó de 63,108 a 119,380. Para atender esta demanda, el suministro de agua se incrementó de 60 a 115 millones de metros cúbicos durante el período. De igual manera la red de alcantarillado aumentó de 338 kilómetros en 1960 a 1,105 en 1970 (Barrera, 1982:80-92).

Tan importantes incrementos en los servicios públicos fueron posibles gracias a la realización de obras de infraestructura de gran envergadura, muchas de las cuales se construyeron en las zonas aledañas al Valle de Aburrá para aprovechar sus recursos naturales en beneficio de la metrópoli. En efecto, desde la década del sesenta comenzó también un proceso de expansión de algunas actividades económicas del Valle de Aburrá hacia el cercano Valle de Rionegro, situado al oriente de Medellín. El sentido de esta invasión era la explotación de los recursos y potencialidades de la subregión del Oriente Cercano para atender las exigencias del desarrollo industrial y urbano del Valle de Aburrá. De este proceso hacía parte la explotación de los recursos hídricos y la utilización de las zonas rurales de la subregión para distintas necesidades de la población del área metropolitana de Medellín (Planeación Metropolitana, 1985:40).

Este fué el caso del servicio de acueducto, cuya capacidad se multiplicó durante la década del sesenta con base en el proyecto Rionegro localizado en el valle de su mismo nombre. Las obras de este proyecto, que contemplaba la perforación de un túnel de 8.5 kilómetros entre los dos valles, comenzaron en 1962 cuando Medellín tenía un importante déficit en el suministro de agua. Con la puesta en servicio de la primera etapa del proyecto Rionegro en 1967 la ciudad empezó a recibir 100.000 metros cúbicos diarios de agua que pusieron fin al racionamiento padecido hasta entonces.



En este mismo año se iniciaron los trabajos de la primera etapa del plan piloto de alcantarillado sanitario con el cual se buscaba la separación de las aguas lluvias y las residuales. En 1969 comenzaron las obras de la segunda etapa de este plan que estaba orientada a proteger el río Medellín de la contaminación (Barrera, 1982:80-92).

De mayor dimensión aún fueron las obras de infraestructura en las cuales se basó la expansión del servicio de energía eléctrica durante la década de los sesenta y primeros años setenta. Continuando con su programa de construcción de grandes centrales hidroeléctricas, las Empresas Públicas de Medellín comenzaron en 1963 los trabajos de la primera etapa de la Central de Guatapé. Entretanto, avanzaban los proyectos iniciados en las décadas anteriores: en 1965 concluyeron los trabajos de la tercera etapa de la Central de Riogrande y en 1966 entró en servicio la cuarta etapa de la Central de Gaudalupe. Mas tarde, en 1974 fué puesta en funcionamiento la primera etapa de la Central de Guatapé. De esta manera Antioquia se consolidaba como el primer departamenteo productor de energía eléctrica en Colombia.

Por otra parte, para responder al fenómeno de metropolización y expansión del Valle de Aburrá, desde mediados de la década del sesenta comenzaron a crearse nuevas entidades administrativas de carácter supramunicipal. Así, en 1965 se fundó la institución Municipios Asociados del Valle de Aburrá con el objetivo de promover el desarrollo integral de la zona, principalmente a través del financiamiento y ejecución de obras de infraestructura. Esta entidad fué pionera en el país en el esfuerzo de integración intermunicipal en un área con características metropolitanas, pues aún no se contaba con ninguna legislación al respecto. Esta solo se tuvo con la Reforma Constitucional de 1968 que estableció las bases legales para la

creación de asociaciones de municipios y áreas metropolitanas en Colombia.

Mas tarde se comenzó a discutir en Antioquia la necesidad de un plan de desarrollo subregiomnal que cubriera al área metropolitana del Valle de Aburrá y el Oriente Cercano. Ante el desbordamiento del fenómeno urbano de Medellín y sus municipios vecinos, el gobierno de Antioquia se vió en la necesidad de estudiar la problemática regional en un contexto económico, social y geográfico mas amplio que rebasara los límites municipales. Para ello en 1973 conformó un equipo interdisciplinario adscrito a Planeación Departamental encargado de elaborar un plan integral de desarrollo para los Valles de Aburrá y Rionegro con la participación del Departamento Nacional de Planeación, la Ofician de Planeación Municipal y las Empresas Públicas de Medellín. Dicho equipo técnico-planificador recibió el nombre de Oficia del Plan Metropolitano del Valle de Aburrá y el Oriente Cercano (Planeación Metropolitana, 1985:27).

Pero el factor mas importante del proceso de expansión de las actividades básicas del Valle de Aburrá hacia el Valle de Rionegro fueron las diversas iniciativas de descentralización industrial. Como resultado de las tendencias que caracterizaron a la industria antioqueña desde sus primeras etapas, para la década del sesenta ya empezaron a manifestarse algunas desventajas de la excesiva concentración industrial en Medellín y municipios conurbados. En general comenzaron a presentarse deseconomías de aglomeración y particularmente una cierta escacez de terrenos aptos para la implantación de industrias, lo cual hizo subir las rentas del suelo para esta actividad. Dados los altos costos de la congestión urbana en el Valle de Aburrrá, se crearon las condiciones que motivaron a varias empresas a buscar otras zonas para localizar sus nuevas plantas.

Por el otro lado, la subregión del Oriente Cercano presentaba una serie de ventajas que la hacían especialmente atractiva para que hacia ella se dirigiera la expansión industrial del Valle de Aburrá. En dicha subregión abundaban el agua y la energía eléctrica, la tierra se podía comprar a bajos precios y con pocos controles sobre su uso, la mano de obra estaba disponible a bajo costo y se disponía de un buen sistema de comunicaciones con Medellín. A estas ventajas comparativas se sumó luego la estratégica ubicación de la zona que con la construcción de la carretera Medellín - Bogotá quedó conectada con los dos principales mercados del país (Planeación Metropolitana, 1985:47).

En estas condiciones, en el curso de la década del sesenta se hicieron los primeros intentos deliberados de transferir establecimientos industriales desde el Valle de Aburrá hacia el Valle de Rionegro. Al principio fueron pequeñas firmas independientes las que se asentaron en Rionegro y municipios vecinos. Mas tarde, en los primeros años setenta, fueron las grandes empresas textiles las que trasladaron líneas completas de producción hacia esa zona, especialmente sus departamentos de productos dedicados a la exportación. No se trataba entonces de una verdadera descentralización industrial sino, mas bien, de un desbordamiento de la actividad económica de Medellín sobre los municipios de la subregión oriental. Esto se expresaba claramente en la idea, muy generalizada desde entonces, de que el Oriente Cercano era el segundo piso del Valle de Aburrá (Vellinga and Kruijt, 1983:81).

Así pues, durante la década del sesenta y primera mitad de la década del setenta, el Valle de Aburrá se consolidó definitivamente como el núcleo industrial y urbano de una economía regional altamente polarizada. Y todo ello en el contexto de profundas transformaciones económicas en el país que condujeron de una industrialización basada en la sustitución de

importaciones a otra jalonada por la dinámica de las exportaciones. En este proceso Antioquia fué una de las regiones mas beneficiadas pues su industria experimentó una notable reactivación que, a nivel espacial, se expresó en la constitución del área metropolitana de Medellín y su incipiente expansión hacia el cercano Valle de Rionegro.

## 2.6. INESTABILIDAD ECONOMICA Y EXPANSION HACIA EL ORIENTE 1974-82

A mediados de la década del setenta ocurrió un fenómeno que coyunturalmente afectó las condiciones en que avanzaba el nuevo modelo de desarrollo económico colombiano. En 1974 se presentó una aguda crisis en la economía mundial que contrajo abruptamente el mercado externo y produjo una seria recesión interna que se prolongó hasta 1976. Así en 1975 la industria nacional creció solo un 2.5%, una tasa tres veces menor que el promedio anual del quinquenio anterior. Tal situación afectó mucho mas a los sectores productores de bienes de consumo para el mercado externo y particularmente al sector textil cuya producción bajo un 7.8% en el mismo año (Gaviria, 1982:239). De esta manera se evidenció uno de los puntos críticos del recién adoptado modelo de desarrollo hacia afuera: la extrema dependencia que establecía respecto de las fluctuaciones del mercado exterior.

Dadas las estrechas relaciones que se habían establecido en los años anteriores entre la industria antioqueña y el mercado mundial a través de las exportaciones, las grandes fluctuaciones de éste se reflejaron inmediatamente en el ritmo de crecimiento de la primera. Después del auge de la producción industrial que acompañó el aumento de las exportaciones, el período 1974-1977 fué una fase de gran inestabilidad en el que se presentó la mayor crisis de la industria en Antioquia. En general la industria regional no creció en 1974 y decreció el 8.2% en 1975. El sector de bienes de consumo bajó su producción un 9.8% en el primer año

y los sectores de bienes de consumo durable y de capital cayeron un 18.9% en el segundo. Una de las mas afectadas fué la industria textil que pasó por una de sus peores crisis en este corto periodo al disminuir un 7.5% su producción en 1975 (Londoño y URIBE, 1980:26).

En medio de estas circunstancias, en 1977 surgió un nuevo fenómeno externo que incidió directamente en la economía nacional. Cuando aún se estaba en plena recesión económica, sobrevinieron las heladas del Brasil que dispararon los precios internacionales del café produciendo para Colombia una nueva bonanza de divisas. Los ingresos cafeteros resultantes, aunados a la creciente importancia de la economía subterránea, determinaron un significativo incremento de la demanda interna que en poco tiempo logró reactivar la industria colombiana (Gaviria, 1982:239). Así las cosas, en el breve lapso de tres años, dos fenómenos externos, con efectos compensatorios, permitieron superar las negativas consecuencias de la crisis mundial de la época.

La industria antioqueña también respondió inmediatamente a la nueva coyuntura económica nacional que se presentó a partir de 1977. Apoyándose en los mayores ingresos de la bonanza cafetera, el gran superávit de la balanza cambiaria nacional y la ampliación de la economía subterránea, la recuperación económica de Antioquia comenzó ese mismo año con un incremento del 5.7% en la producción industrial del Valle de Aburrá. Sin embargo, las características que para entonces presentaba la industrial regional, determinaron que su comportamiento fuera muy inestable durante el resto de la década. En 1978 la industria del Valle de Aburrá decreció nuevamente en un 4.6%; luego tuvo una fuerte recuperación en 1979 con un crecimiento del 12.3%; pero volvió a decaer en 1980 con una baja del 1.7% en su producción (Planeación Metropolitana, 1985:53). Esta notoria inestabilidad de la industria antioqueña obedecía fundamentalmente a su bajo grado de

diversificación, las escasas relaciones interindustriales en la región y su particular sensibilidad a las fluctuaciones del mercado externo (Londoño y Uribe, 1980:28).

En 1980 nuevamente se inició un período de recesión industrial que se prolongó hasta 1973. Toda una serie de factores de orden interno y externo propiciaron esta situación: la desmedida apertura de la economía a las importaciones legales e ilegales, los cambios en las políticas cambiarias nacionales, el auge de las actividades financieras especulativas, el encarecimiento de los créditos comerciales y el cierre de los mercados externos ante la nueva recesión mundial. Como en las coyunturas similares anteriores, uno de los sectores más afectados en Antioquia fué el de los textiles, el cual arrastró en su caída al resto de la industria.

Congruente con su importancia regional, durante el último período la industria antioqueña mantuvo constante su participación en el producto industrial nacional. Entre 1973 y 1980 prácticamente no hubo ninguna variación en la participación de la industria del Valle de Aburrá en la producción manufacturera nacional que fué del 20.8% en el primer año y del 20.7% en el último (Planeación Metropolitana, 1985:53). Esta situación se mantuvo no obstante la presencia de todo un conjunto de factores de carácter estructural que tendían más debilitar que a fortalecer la presencia de la industria regional en el concierto nacional.

Desde el punto de vista poblacional, en el último período simplemente se reforzaron las tendencias que ya habían empezado a manifestarse en las décadas anteriores. Aunque la tasa de crecimiento demográfico continuó descendiendo, la población del Valle de Aburrá sobrepasó los dos millones. En el período 1973-1981 el crecimiento promedio anual en el área metropolitana bajó hasta el 3.1%, pero para el último año la población de Medellín

era ya de 1,496,302 personas y la de todos los municipios de Valle de Aburra en su conjunto de 2,078,198. Esta última cifra representaba el 54.3% de la población total del departamento de Antioquia, lo cual era un claro índice de la fuerza centralizadora del área metropolitana (Planeación Metropolitana, 1985:62).

Administrativamente también continuaron creándose las bases jurídicas para intervenir sobre el proceso de metropolización que ya constituía una preocupación del orden nacional. En la segunda mitad de la década del setenta, en efecto, no solo en Antioquia sino en otras regiones del país se manifestó plenamente y con todas sus consecuencias este fenómeno. Para ello fué necesario actualizar tanto la legislación como las instituciones estatales encargadas del ordenamiento urbano. Así, en 1978 se expidió la Ley orgánica de Desarrollo Urbano que dotaba a las administraciones municipales de los necesarios instrumentos operativos para su desarrollo integral y planteaba la posibilidad de crear bancos regionales de desarrollo. Un año mas tarde el gobierno nacional firmó el decreto reglamentario de la Reforma Constitucional de 1968 por el cual se dictaban normas para la organización y funcionamiento de las áreas metropolitanas en el país (Barrera, 1982:100).

Para el caso de Medellín, ante la necesidad de contar con una empresa capaz de ejecutar programas en todos los municipios del área metropolitana, en 1977 se creó la Empresa de Desarrollo Urbano del Valle de Aburrá. Entretanto, simultáneamente la Oficina de Planeación Municipal y la del Plan Metropolitano realizaron una serie de estudios sobre el área metropolitana de Medellín orientados a establecer su diagnóstico y caracterización así como a definir las directrices de su desarrollo. Sin embargo, para 1980 no se había logrado aún formular un plan de desarrollo conjunto para los Valles de Aburrá y Rionegro, tal como se había propuesto desde 10 años atrás.

Esto solo pudo empezar a concretarse en 1981 cuando legalmente se constituyó el Area Metropolitana del Valle de Aburrá como un ente político-administrativo cuya jurisdicción comprende los territorios de Medellín y otros 9 municipios vecinos. Jurídicamente se reconoció así la creciente integración económica y física experimentada por estas localidades en las dos décadas anteriores. La creación de una Alcaldía y una Oficina de Planeación Metropolitana permitieron que finalmente se separaran las funciones de planeación para el Valle de Aburrá y la subregión del Oriente Cercano (Planeación Metropolitana, 1985:27).

Pero esta decisión de carácter administrativo no implicaba en modo alguno que el proceso de invasión y anexión del Valle de Rionegro por parte del Area Metropolitana de Medellín se hubiese detenido. Por el contrario, con la dinámica espacial de la industrialización antioqueña, a finales de la década del setenta el Valle de Rionegro alcanzó a tener una notoria importancia en el contexto departamental. Avanzando en el el proceso iniciado en la década anterior, durante este período continuaron asentándose en Rionegro y otros municipios cercanos nuevas plantas fabriles. Así, para comienzos de la década de los ochenta se encontraban instaladas en la subregión mas de 40 empresas entre grandes y medianas industrias. Con ellas el Oriente Cercano llegó a convertirse en el segundo núcleo industrial del departamento; en 1981 su producción manufacturera representó cerca del 4% del producto industrial de Antioquia.

Una característica clave de la industria de la subregión del Oriente Cercano es su especialización en la producción de bienes de consumo corriente, principalmente textiles. En este sentido su estructura es muy similar a la de la industria del Valle de Aburrá de la cual es en gran parte subsidiaria. Por ello no se pudo constituir en Rionegro y demás municipios del Oriente unas



base industrial relativamente autónoma con capacidad de dinamizar el resto de la economía de la subregión. La industria del Valle de Rionegro siguió siendo básicamente dependiente y complementaria de la industria del Área Metropolitana de Medellín.

El otro factor que a mediados de la década del setenta convirtió al Oriente Antioqueño en una de las subregiones de mayor peso en la economía del departamento fué su riqueza en el recurso hídrico. Puesto que la subregión se caracteriza por la abundancia de ríos adecuados para el aprovechamiento energético y el suministro de agua potable, en ella se localizaron un buen número de proyectos, algunos de los cuales se contaban entre los más importantes a nivel nacional. En 1976 se terminó la segunda etapa del Proyecto Rionegro que a través del embalse de la Fe dotó al Área Metropolitana de Medellín de agua suficiente para atender su demanda hasta finales de la década (Barrera, 1982:99). Dos años más tarde concluyó también la segunda etapa de la Central Hidroeléctrica de Guatapé que con sus 560,000 kilovatios de generación total cubría el déficit de energía del departamento de Antioquia hasta la década del ochenta.

La realización de este tipo de grandes proyectos fué la base fundamental del vertiginoso crecimiento de las Empresas Públicas de Medellín durante el último período. Para 1980 todas las cifras relativas a los servicios públicos a su cargo se habían incrementado notablemente. En el servicio de acueducto el número de suscriptores era ya casi de 197,000 y la capacidad de suministro de 700,000 metros cúbicos de agua diarios superaba incluso a la demanda que apenas llegaba a los 590,000 metros cúbicos diarios. Las redes de aguas lluvias y de aguas negras tenían ya una longitud de 12,766 kilómetros y el servicio telefónico atendía a 217,500 abonados (Barrera, 1982:110).

Con la terminación de las grandes centrales hidroeléctricas proyectadas desde la década de los treinta, en los primeros años ochenta la generación y distribución de energía continuó siendo el servicio líder de las Empresas Públicas de Medellín. En 1980 el sistema de generación de las Empresas lo componían las tres grandes centrales de Guadalupe, Riogrande y Guatapé y la pequeña y antigua planta de Piedras Blancas. Todas ellas en su conjunto tenían una capacidad de producción de 1,119,000 kilovatios que representaban un incremento del 160% con respecto a la capacidad de generación de las Empresas en 1970. Igualmente había aumentado la cobertura de este servicio, llegando el número de suscriptores a una cifra cercana a los 290.000 (EE. PP. de Med., 1980).

El enorme crecimiento de la capacidad operativa de las Empresas Públicas de Medellín le permitió extender su radio de acción efectiva a todo el Valle de Aburrá y gran parte del departamento de Antioquia. En la década de los ochenta las Empresas ya tenían a su cargo la prestación de casi todos los servicios públicos en los municipios del Área Metropolitana, con lo cual daban una sólida base a su integración político-administrativa. En el servicio telefónico la cobertura era total en los municipios del Valle de Aburrá y se extendía además al municipio de Rionegro en el Oriente Cercano. A su vez las redes de acueducto y alcantarillado se habían ampliado hasta los municipios de Bello, Itagüí y Envigado.

Por su parte, con el servicio de energía las Empresas Públicas sobrepasaron incluso los límites departamentales. En 1980 las Empresas atendían directamente a los 10 municipios del Valle de Aburrá y a otros 7 del departamento de Antioquia en donde estaban localizadas las principales centrales hidroeléctricas. A través de la Electrificadora de Antioquia y los Circuitos Eléctricos cubrían indirectamente la demanda de energía de 83 municipios antioqueños más, distribuidos por todas las

subregiones del departamento. Adicionalmente suministraban energía eléctrica para dos municipios del vecino departamento del Chocó, entre los cuales se contaba su capital (EE. PP. de Med., 1980.)

En esta notable expansión del área de influencia y en la creciente importancia regional de las Empresas Públicas de Medellín jugó un papel determinante el Proyecto Hidroeléctrico del Río Nare. El Embalse de El Peñol y la Central de Guatapé fueron el mas grande proyecto realizado por las Empresas Públicas en toda su historia. En su momento eran las mayores obras de su tipo en Colombia y unas de un enorme paso adelante en el desarrollo del sector eléctrico de Antioquia y el país.

#### REFERENCIAS

1. BARRERA, Héctor : (1982), Medellín: evolución histórico-demográfica, Medellín, Planeación Metropolitana, 129 pp.
2. BOTERO, Fernando : (1985), La industrialización en Antioquia. Génesis y consolidación 1900-1930, Medellín, CIE Universidad de Antioquia, 182 pp.
3. BREW, Robert : (1977), El desarrollo económico de Antioquia desde la independencia hasta 1920, Bogotá.
4. EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN. Revista, Vol. 2 Num. 4 Octubre-diciembre.
5. GAVIRIA, Juan Felipe : (1982), " La expansión de la estructura industrial en Antioquia: 1930-1970", en Los estudios regionales en Colombia. El caso de Antioquia, Medellín, Fundación Antioqueña para los Estudios Sociales, pp. 231-248.

6. HELMSING, Bert : (1984), "División regional del trabajo en la industria colombiana 1954-1980, en **Desarrollo y Sociedad**, Núm 4 Mayo, Bogotá, Universidad de los Andes CEDE, pp. 127-145.
7. JARAMILLO, Samuel : (1987), **La configuración del espacio regional en Colombia**, Bogotá, Universidad de los Andes CEDE, 367 pp.
8. LONDOÑO, Carlos : (1983), **Origen y desarrollo de la industrial textil en Colombia**, Medellín, Universidad de Antioquia CIE, 65 pp.
9. LONDOÑO, Juan Luis y URIBE, José Darío : (1980), "Estructura y crecimiento de la industria Antioqueña en las dos últimas décadas", en **Revista Antioqueña de Economía**, pp. 19-33.
10. LOPEZ, Hugo : (1982), "El desarrollo histórico de la industria en Antioquia. El período de consolidación", en **Los estudios regionales en Colombia El caso de Antioquia**, op. cit. pp. 187-211.
11. OSPINA V., Luis : (1974), **Industria y protección en Colombia 1810-1930**, Medellín, Editorial La Oveja Negra, 633 pp.
12. PALACIOS, Marco : (1982), " El café en la vida de Antioquia", en **Los estudios regionales en Colombia El caso de Antioquia**, op. cit. pp. 85-99.
13. PARSONS, James : (1961), **La colonización antioqueña en el occidente colombiano**, Bogotá, Banco de la República, 344 pp.
14. PLANEACION METROPOLITANA : (1985), **Plan de desarrollo metropolitano del Valle de Aburrá**, Medellín, 243 pp.
15. POVEDA R., Gabriel : (1976), **Políticas económicas, desarrollo industrial y tecnología en Colombia 1925-1975**, Bogotá, COLCIENCIAS, 376 pp.
16. \_\_\_\_\_ : (1982), "Minas y mineros de Antioquia." en **Los estudio regionales en Colombia El caso de Antioquia**, op. cit. pp. 41-71.
17. VELLINGA, Menno and KRUIJT, Dirk : (1893), **Industrialization y regional developmente in Colombia**, Amsterdam, CEDLA, Incidentele Publicaties 26. 183 pp.

### **3. EL PROYECTO HIDROELECTRICO DEL RIO NARE**

La Central de Guatapé y el Embalse de El Peñol se localizan en el Oriente del departamento de Antioquia a una distancia de 50 kilómetros de la ciudad de Medellín. Allí captan las aguas de la amplia cuenca del trayecto inicial del río Rionegro-Nare que recorre un altiplano de relieve irregular en la vertiente Este de la Cordillera Central. Es ésta una región de alta montaña y elevada precipitación pluvial, cuyas corrientes descienden rápidamente hacia la cercana cuenca del río Magdalena. Tales condiciones hacen del Oriente Antioqueño una zona privilegiada para la generación de energía eléctrica (ver plano con la localización de la Central de Guatapé y demás centreales de la subregión) en donde el primer aprovechamiento importante fué precisamente el gran proyecto hidroeléctrico Nare-Guatapé.

#### **3.1. ESTUDIOS PRELIMINARES Y PROYECTOS PARA EL RIO NARE 1930-64**

La exploración inicial del río Nare con fines energéticos fué ejecutada por un ingeniero antioqueño alrededor de 1930. Posteriormente, en 1932, un grupo de estudiantes de ingeniería dirigidos por su profesor de la Escuela de Minas realizaron una evaluación del potencial hidroeléctrico de Antioquia del cual hacía parte importante la hoya del río Nare. En este estudio se proponía la desviación del Nare al río Nus a través de un túnel

de 20 kilómetros, con una caída de 750 metros y una producción de 350,000 kilovatios.

En 1940 la Empresa de Energía Eléctrica encargó al mismo profesor de la Escuela de Minas la evaluación de cinco anteproyectos para el aprovechamiento hidroeléctrico y el abastecimiento de agua a la ciudad de Medellín, entre los cuales se incluían específicamente dos en el río Nare. El primero planteaba el levantamiento de una presa en la desembocadura de la quebrada Marinilla y la formación de un embalse de 12 kilómetros que inundaría parte de la población de igual nombre. El segundo proponía represar el río Rionegro en la desembocadura de la quebrada Chachafruto. Ambos proyectos contemplaban la conducción de las aguas del río Nare hasta el Valle de Aburrá a través de dos túneles de gran longitud.

Años más tarde, en 1954, la empresa norteamericana de consultoría Gai Panamerican Corporation, división de Gilbert Associates, presentó a las Empresas Públicas un estudio en el que mencionaba las grandes posibilidades del río Nare para la generación de energía a lo largo de la mayor parte de su trayecto. En el mismo año la firma nacional de ingenieros OLAP rindió un informe similar en el que identificaba tres posibles puntos para el embalse del río. Igualmente recomendaba tres aprovechamientos hidroeléctricos en los sitios el Chocho, Santa Rita y La Cortada, utilizando saltos brutos de 200, 250 y 180 metros respectivamente. Entre éstos OLAP escogía el sitio de Santa Rita como el lugar más apropiado para construir una represa que permitiera la explotación del potencial energético del Nare.

Esta idea se precisó en 1955 en un estudio preliminar elaborado por la Sociedad General de Estudios y Servicio Industriales, filial de Sogei de Francia, que presentó un anteproyecto de dos centrales hidroeléctricas en el río Nare; una en las proximidades de la población de Alejandría y otra en el

sitio Santa Rita. Sogeico evaluó varias alternativas: una presa en Santa Rita con el embalse a una elevación que no inundaba la zona urbana del municipio de El Peñol; una segunda por la cota del vertedero actual que la cubría totalmente; y otra por una elevación todavía mas alta. Para un segundo desarrollo se estudió una presa en el sitio de La Sabina, aguas abajo de Alejandria, por una cota mucho mas baja (Vásquez, 1980:12). Según el anteproyecto, en cada uno de estos lugares se construirían centrales subterráneas con una capacidad de 150,000 kilovatios.

Para esta época las posibilidades hidroeléctricas del río Nare eran pues incuestionables. No solo en la primera parte del trayecto, que era la mas estudiada, se había comprobado una gran capacidad de generación; también en la parte baja se preveía un alto potencial hidroeléctrico con la utilización de una caída de agua disponible de hasta 1,200 metros. Así lo reconocía el Plan Nacional de Electrificación que por entonces le asignaba al río Nare un potencial de 500.000 kilovatios aprovechando apenas las caídas de agua en el trayecto explorado del río.

Como complemento de estos estudios, en 1956 las Empresas Públicas contrataron el levantamiento aerofotogramétrico de la subregión con la firma Levantamientos Planimétricos. Los resultados de este trabajo permitieron ver la posibilidad de desviar las aguas del río Nare hacia la cuenca del río Guatapé con la que tiene una considerable diferencia de altura. Tal diferencia permitía aprovechar una caída de 800 metros en una sola obra. Las Empresa decidieron entonces ampliar el contrato con Sogeico para relajar un análisis mas detallado de la alternativa del desvío del Nare al Guatapé.

Sogeico terminó sus estudios en 1957. En su nueva propuesta contemplaba la conservación de la represa de Santa Rita y la construcción de dos grandes centrales subterráneas en serie. La primera, llamada de Guatapé, tendría una caída bruta de 527

metros y una capacidad de generación de 300,000 kilovatios. La segunda, denominada de San Rafael, tendría una caída de 360 metros y una capacidad de generación de 200.000 kilovatios.

Esta alternativa de desviación del río Nare al Guatapé y la construcción de dos centrales susubterráneas no fué, sim embargo, acogida totalment4e. Sogeico se mostraba todavia renuente frente a ella; sus objeciones eran mas económicas que técnicas, pues los costos de un proyecto de tan grandes dimensiones excedía ampliamente la capacidad financiera de las Empresas Públicas de Medellín.

A pesar de esto, las Empresas continuaron con su intrés en la propuesta y en el mismo año encomendaron al Instituto Agustín Codazzi el levantamiento aerofotogramétrico de una amplia zona que abarcaba el aprovechamiento posible del río Nare. Con el objeto de tener una visión general que permitiera tomar una decisión definitiva adelantaron también diferentes estudios: reconocimientos hidrológicos de las posibles fuentes aprovechables, investigaciones topográficas de las cuencas de interés y perforaciones geológicas en los sitios de probables construcciones.

Los resultados de todos estos estudios permitieron finalmente a las Empresas Públicas señalar el Proyecto Nare-Guatapé como el mas aconsejable técnica y económicamente. El argumento principal a su favor era la necesidad de una central hidroeléctrica de gran magnitud que permitiera atender adecuadamente el acelerado crecimiento de la demanda energética de la ciudad de Medellín. Según el criterio de las Empresas, el proyecto se decidió justamente en el momento en que se había desarrollado la técnica de construcción de centrales subterráneas y el auge de la demanda de energía eléctrica del Valle de Aburrá lo justificaba plenamente (Ospina, 1966:565).



Para 1958 ya estaba prácticamente decidida la construcción del complejo hidroeléctrico Nare-Guatapé. Este año se terminó el anteproyecto original que proponía un embalse de 1,000 millones de metros cúbicos de agua y dos centrales subterráneas con una potencia de 500,000 kilovatios. Era, en efecto, una idea ambiciosa si se tiene en cuenta que la capacidad de generación de todas las plantas de las Empresas Públicas de Medellín apenas llegaba en ese tiempo a los 140,000 kilovatios.

Sin embargo, no fué sino hasta dos años mas tarde que se realizaron los estudios definitivos. En 1960 las Empresas refrendaron con la Societat Edison de Milán y la firma Ingenieria Técnica General de Medellín un contrato para la elaboración del proyecto básico de la primera etapa de la Central Hidroeléctrica del Nare y la preparación de especificaciones para la construcción de obras y principales equipos. Simultáneamente se adelantaban los estudios y trabajos de campo necesarios para elaborar un informe con planos y especificaciones generales que sirviera de base a una solicitud de crédito dirigida a entidades financieras internacionales.

La respuesta de éstas fué inmediata; el mismo año el Banco Mundial hizo efectivo un empréstito por valor de 12 millones de dólares para financiar los estudios que aún faltaban (Ibid: 564). Tal empréstito permitió, además, iniciar la compra de tierras en la zona que sería inundada por la represa de Santa Rita y comenzar los estudios orientados a identificar los puntos a los que podría trasladarse la cabecera municipal de El Peñol.

A fines de 1960 el consorcio Edison-Integral presentó a las Empresas Públicas el proyecto definitivo de la central hidroeléctrica que aprovecharía las aguas del rio Nare. Entre las alternativas estudiadas había centrales que tomaban sus aguas de una represa en el municipio de Alejandría y por un túnel descargaba al rio Bizcocho. Otra tomaba las aguas del Nare desde

Santa Rita, las depositaba en la quebrada El Popo, mas abajo de Ajejandria, y luego las desviaba hacia El Bizcocho en una o dos centrales. El estudio concluía nuevamente que, de todas las alternativas propuestas, la mas aconsejable era la de Guatapé.

Sobre esta base, en 1963 las Empresas Públicas contrataron con Integral el diseño e interventoría de la Central Hidroeléctrica de Guatapé en su primera etapa. Terminado este contrato se firmó inmediatamente otro por el cual Integral, con la asesoría de Hanza Engineering de los Estados Unidos, se encargaba de la ingeniería de la obra.

Con el proyecto definitivo ya listo, las Empresas Públicas de Medellín presentaron al Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento una solicitud de crédito por 40 millones de dólares que representaba un poco mas del 50% del costo calculado para las obras de la primera etapa de la Central de Guatapé. El BIRFF otorgó este empréstito destinado a la financiación de los gastos extranjeros del proyecto en 1964. Las condiciones del contrato estipulaban un período de 35 años con un pago de cuotas semestrales a partir de 1969 e intereses del 5% anual. Como financiación complementaria para el proyecto la Agency for International Development de los Estados Unidos ofreció también un préstamo a largo plazo por la suma de 20 millones de dolares (Ibid: 566).

Al mes siguiente de firmados estos empréstitos internacionales las Empresas Públicas decretaron una sensible alza de tarifas para los usuarios del servicio de energía eléctrica con el fin de garantizar la oportuna amortización de las deudas contraídas (Ibid: 569). De esta manera culminaba la etapa de estudios y proyectos asegurando todas las condiciones necesarias para iniciar los trabajos de construcción del gran Proyecto Hidroelectrico del rio Nare.

### 3.2. CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DEL PROYECTO NARE 1964-80

Varias razones de orden técnico y económico determinaron que desde un principio se planteara la construcción de las obras de la Central de Guatapé en dos etapas. En primer lugar estaba, evidentemente la magnitud del proyecto que exigía su ejecución por partes; a esto se sumaba el hecho bastante significativo de que la demanda de energía de la ciudad de Medellín y el departamento de Antioquia se demoraría todavía varios años en copar la oferta potencial del proyecto; y finalmente , los altos costos financieros de la obra hacían que lo mas aconsejable fuera diferir las inversiones. Atendiendo a estas consideraciones las Empresas Públicas decidieron además dividir los trabajos en varios contratos que permitieron que su realización no fuera simultánea.

El contrato A para la construcción de las obras iniciales de la Central de Guatapé se adjudicó en 1964. En marzo de ese año el consorcio formado por las empresas McNámara Corporation de Canadá y Paul Hardeman de Panamá comenzó la excavación del túnel de fuga y una parte del túnel de acceso a la casa de máquinas de la primera etapa. Los trabajos de este contrato se terminaron en noviembre de 1966 con un retraso de varias semanas respecto del programa de ejecución de obras formulado originalmente. (Vásquez, 1980:14).

La ejecución del contrato B se inició en abril de 1966 por parte de las empresas Impresit de Milán-Italia, Impresit del Pacífico y Octavio Bertolero del Perú. Este era uno de los mas importantes pues comprendía trabajos que iban desde la captación hasta la salida en fuga; incluía la excavación del túnel de captación, de la caverna de la casa de máquinas y de la longitud faltante del túnel de fuga; comprendía además el montaje de la tubería de presión, los concretos para las dos unidades de generación y la construcción de la torre de captación y el pozo

de quietamiento, siendo estas dos últimas las únicas obras de superficie pues las demás era subterráneas. Debido a las múltiples dificultades afrontadas en su construcción, el consorcio Impreber solo pudo concluir estas obras en julio de 1970 con una demora de un año en algunos casos.

A este mismo consorcio se le entregó el contrato C para la construcción de la primera etapa de la presa de Santa Rita. Las principales obras de este contrato consistían en la desviación del río por un canal, el levantamiento de los terraplenes principal y secundario y la construcción del vertedero y el túnel de salida. Tales trabajo se iniciaron en enero de 1967 y se terminaron en julio de 1970 conjuntamente con las otras obras de la Central que estaban a cargo de Impreber.

Factores de diverso orden hicieron que la construcción de las obras de la primera etapa de la Central de Guatapé se demoraran mas de los previsto en los planes de las Empresa Públicas de Medellín. Errores técnicos en la construcción, inexperiencia de algunos contratistas, problemas financieros, demoras en la entrega de equipos y conflictos con los pobladores de la zona determinaron que el llenado de la primera etapa del embalse de El Peñol no pudiera realizarse en la fecha fijada de antemano (Vásquez, 1980: 31).

Pero las Empresas Públicas tenían prisa en comenzar la inundación de la primera etapa del Embalse de El Peñol. A pesar de no haber recibido la totalidad de las obras y equipos contratados, en 1970 las Empresa Públicas de Medellín decidieron iniciar el llenado del embalse. El 24 de enero de ese año cerraron las compuertas y 32 días mas tarde estuvo llena la represa.

Mucho mas se demoró la entrada en servicio de la Central de Guatapé. Debido al incumplimiento en la entrega de algunos

elementos indispensables por parte de sus proveedores internacionales, la primera unidad solo pudo ponerse en operación en julio de 1971 y la cuarta tuvo que esperar hasta febrero del año siguiente. De este modo, la primera etapa del sistema hidroeléctrico del río Nare solo pudo trabajar a plena capacidad a partir de 1972, cuatro años después de la fecha señalada en el proyecto original.

La última etapa de este proyecto se inició con el contrato D para la construcción de la segunda parte de la presa de Santa Rita. De ello se encargó el consorcio Entrecanales Tavora de España y Grandicón de Colombia que comenzó sus trabajos en enero de 1973. En lo fundamental se trataba de la elevación de la presa apoyándose en el terraplén de la primera etapa y de la construcción de un nuevo vertedero, dos presas auxiliares y varios llenos de refuerzo en zonas débiles. Los contratistas entregaron estas obras en febrero de 1976.

Con algunas variaciones, la construcción de las obras de la segunda etapa de la Central de Guatapé consistió prácticamente en una duplicación del trabajo realizado en la primera. El contrato E que comprendía a las obras correspondientes a la central propiamente dicha los obtuvo el consorcio italiano Impregilo-Ingéniero Recchi. En su ejecución fue necesario construir una segunda torre de captación, instalar una nueva tubería de presión, ampliar la caverna de la sala de máquinas para dar cabida al resto de las unidades de generación y excavar otros túneles de conducción y descarga paralelos a los primeros. Estos trabajos se realizaron entre marzo de 1974 y noviembre de 1978 (Integral, 1979).

A pesar de que en un principio las Empresas Públicas pensaban que la segunda etapa estaría concluida en 1972, las obras completas del proyecto Nare solo estuvieron listas 8 años más tarde. El taponamiento del viejo vertedero dió comienzo al

último llenado de la represa el día 23 de mayo de 1978. Pero dada su dimensión, el embalse de El Peñol todavía tardó 2 años más en llenarse definitivamente, cuando llegó a ser el mayor sistema regulador de aguas de todo el país (Ospina, 1966:571)

Como sucedió con la primera etapa, el grupo de generadores de la segunda demoró un tiempo adicional para entrar en servicio; no fue sino hasta febrero de 1979 que pudo trabajar la primera unidad, mientras que la última lo hizo en enero de 1980 (Vásquez, 1980:45). Así con la puesta en operación de todas las unidades de la Central de Guatapé culminó la larga historia del Proyecto de Nare.

### 3.3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES DE LA CENTRAL DE GUATAPE

Aparte de su contribución al crecimiento de la generación eléctrica en Antioquia, la Central de Guatapé significó también un gran avance técnico. A diferencia de las Centrales de Guadalupe y Riogrande, la mayor parte de la obra era subterránea, lo cual exigió la utilización de una alta tecnología en su construcción. Sin lugar a dudas, esta Central fue para su época la más importante y ambiciosa obra de ingeniería acometida por empresa alguna en el país.

En su primera etapa la Central Hidroeléctrica de Guatapé entró a generar 280,000 kilovatios. Esta producción se duplicó con la segunda etapa hasta alcanzar una capacidad de generación total de 560,000 kilovatios. En cada etapa operan cuatro generadores con un potencial por unidad de 70,000 kilovatios. Ver gráfico con "Planta y perfil del sistema hidroeléctrico del río Nare")

La principal obra de la central hidroeléctrica propiamente dicha es una casa de máquinas subterránea que con sus 650 metros

de profundidad figuraría como la mas profunda del mundo (Vasquez, 1980:15). Esta obra consta básicamente de dos cavernas paralelas en las que se alojan respectivamente un grupo de turbogeneradores y otro de transformadores. La primera caverna tiene aproximadamente 180 metros de longitud, 33 metros de ancho y 24 metros de altura; la segunda caverna tiene una longitud de 166 metros, una anchura de 22 metros y una altura de 11 metros.

En su conjunto, la sala de máquinas comprende otra serie de obras que requirieron importantes perforaciones: la galería de barras que comunica las cavernas de generadores y transformadores, los fosos para turbinas, los canales de descarga, la galería de compuertas, la galería de acceso y el foso de bombas. Además de lo anterior están las excavaciones por debajo de la galería de acceso en donde se ubican servicios sanitarios, oficinas, equipos de telecomando, baterías, compresores, etc. (Vásquez, 1980:30).

A las cavernas de la Central Hidroeléctrica de Guatapé se llega por un túnel de acceso con una longitud de casi 2 kilometros. Este túnel de acceso es una vía vehicular que a su lado tiene una zona para los cables de alta tensión y los de comando que vienen de la subestación. En su primera parte se divide en forma de Y; a la izquierda va la entrada de vehículos y a la derecha van los cables. La parte para vehículos tiene una anchura de libre de mas de 5 metros y una altura superior a los 4 metros, lo cual permite el acceso de camiones de gran tamaño y capacidad de carga. El ramal para los cables tiene mas de cuatro metros de ancho para alojar 12 líneas de 230 kilovattios. A partir de la unión de esos dos ramales el túnel sigue hasta la casa de máquinas con una anchura de mas de 7 metros y una altura de casi 6 metros (Vasquez, 1980:27)

La casa de máquinas es complementada por otra serie de obras subterráneas de gran magnitud. El esquema general comprende dos

partes: las obras que conducen el agua hasta los turbogeneradores y las que le dan salida una vez utilizada. Estas obras son en su mayoría túneles que tienen una extensión de mas de 22 kilómetros para todo el complejo.

La primera parte del sistema de la Central del Nare comienza con dos torres de captación en el Embalse de El Peñol en un sitio próximo a la cuenca del rio Guatapé. Estas torres son dos estructuras contiguas, de una altura aproximada de 58 metros y un diámetro de 10 metros, que inmediatamente se conectan a dos pozos verticales de 87 metros de profundidad y 3.5 metros de diámetro. Los pozos de captación llegan hasta dos túneles paralelos que tienen una longitud aproximada de 4,900 metros.

Al final del recorrido de los túneles de captación se encuentran las almenaras y la cámara de válvulas. Las almenaras son dos túneles verticales con dos secciones, un pozo elevador y un tanque superior. La cámara de válvulas es un ensanchamiento en la unión de los túneles de acceso y de captación con espacio para dos válvulas de mariposa y sus controles (Vásquez, 1980:26). La excavación para la cámara de válvulas tiene una sección de 16 por 12 metros y una altura de 10 metros.

Después de la cámara de válvulas se inician las tuberías de presión que tienen una longitud de 874 metros en el tramo de descenso y una inclinación de 48 grados. A pesar de ser subterráneas, las tuberías de presión no son empotradas en la roca sino libres, apoyadas sobre silletas y sujetas con anclajes. El diámetro de los tubos varía entre los distintos tramos con un promedio de 3 metros hasta llegar al punto de distribución. Los distribuidores comienzan con una bifurcación que reduce el diámetro de la tubería; luego cada ramal vuelve a dividirse en dos y a reducir nuevamente el diámetro de la tubería; así llegan a la casa de máquinas cuatro ramales menores por cada tubería de presión.



Todas estas obras conducen el agua del río Nare desde el Embalse de El Peñol hasta la casa de máquinas; allí es utilizada para generar energía eléctrica y luego es desalojada hacia el cauce del río Guatapé.

La segunda parte del sistema hidroeléctrico Nare-Guatapé se inicia con los canales de descarga que recogen el agua empleada en cada generador. En la confluencia de los canales arranca el túnel de fuga que tiene una longitud de 4,500 metros y una sección promedio de 6 metros de ancho por 5 de altura. Este túnel termina en una estructura disipadora de energía donde se juntan los ríos Guatapé y Bizcocho. El pozo de quietamiento es la última obra de todo el sistema que canaliza el agua de la central (Vásquez, 1980:31).

Otra importante serie de obras de la Central de Guatapé es la que permite la conducción de la energía producida hasta los lugares de consumo. Esta serie se inicia con la galería de cables de alta tensión que a su salida empalma con el edificio de ventiladores y la estructura donde los cables se vuelven aéreos. Dicha estructura está soportada por cinco torres de 37 metros de altura desde las cuales los cables siguen hasta la subestación apoyados en torres especiales. En la subestación se encuentra el edificio de comando y un sistema de equipos y torres que sirven de punto de partida para dos líneas de transmisión de 220 kilovoltios. Estas dos líneas llevan la energía eléctrica desde Guatapé hasta Medellín, una a la subestación de Miraflores y otra a la subestación de Envigado (Vásquez, 1980:29).

A pesar del número y la magnitud de estas obras, las mayores dimensiones del Proyecto Nare son las de la represa de El Peñol. Esta consta, en lo fundamental, de la presa de Santa Rita y el embalse propiamente dicho.

En la primera etapa del Proyecto la presa de Santa Rita consistía en un terraplén de 30 metros de altura que fué necesario aumentar en 5 metros ante la posibilidad de crecientes que pudieran sobrepasarlo. La presa tenía un vertedero del tipo de embudo, de 16 metros de diámetro y con un pozo de 31 metros que comunicaba con el túnel de salida (Vásquez, 1980:33). Al cerrarse la compuerta de esta etapa se formó un embalse de 76 millones de metros cúbicos de agua que inundó cerca de 1,300 hectáreas.

Con la segunda etapa, las dimensiones de la represa de El Peñol crecieron enormemente. La presa de Santa Rita se elevó a una altura de 50 metros y su corona se extendió hasta los 900 metros. Para su construcción se emplearon más de 3 millones de metros cúbicos de limos y roca descompuesta que se depositaron en parte sobre el primer dique. El vertedero de la presa, de canal revestido, tiene una longitud de 214 metros y una anchura entre 30 y 80 metros. El Embalse de El Peñol aumentó su capacidad de almacenamiento hasta 1,200 millones de metros cúbicos de agua. En consecuencia, el área inundada también se incrementó notablemente pues el lago artificial que se formó llegó a cubrir 6,300 hectáreas.

Igualmente altas son las cifras de costos y financiamientos de este Proyecto Nare-Guatapé. Su primera etapa tuvo un costo de 78.4 millones de dólares, equivalentes a 1,234 millones de pesos a precios corrientes de 1962 a 1972. El 50% de este valor fué financiado con un préstamo del BIRF por la suma de 39 millones de dólares. La segunda etapa costó 150 millones de dólares que equivalen a 5,161 millones de pesos a precios corrientes de 1969 a 1980. El 51% de su financiación fué cubierta por varios préstamos internacionales (BIRF principalmente) que sumaron 63.8 millones de dólares (42.5%) y por préstamos nacionales que alcanzaron la suma de 448 millones de pesos (8.5%) (EE.PP. de Med., 19:59-64). Así la Central de Guatapé se caracterizó no solo

por sus grandes dimensiones físicas y elevado nivel tecnológico; también fué un gran proyecto en el orden económico y financiero.

### 3.4. EFECTOS ECONOMICOS Y SOCIALES DEL PROYECTO NARE-GUATAPE

Dadas las grandes dimensiones del Proyecto Nare, su efecto inmediato fué la pérdida de un importante número de vidas humanas. Durante la construcción de la Central de Guatapé murieron 34 hombres a causa de diversos accidentes de trabajo. Esta "cuota de sacrificio" correspondió en su mayoría a los obreros de las firmas y consorcios contratistas, pero incluyó además a trabajadores de las Empresas Públicas. Del total de muertos; 3 eran del personal de MacNámara, 23 de Impreber, 6 de Impregilo y 2 de las Empresas (Vásquez, 1980:19). Tales cifras dan cuenta por si solas del elevado costo de esta obra faraónica.

Sin embargo, no fueron estas muertes el único rubro a incluir entre los costos humanos y sociales del Proyecto Hidroeléctrico del río Nare. Su construcción causó múltiples y graves problemas de orden económico y social en los municipios en donde está localizado. Fué dramático, en efecto, el impacto de esta obra sobre las calidad de vida de los pobladores de las zonas urbanas mas cercanas y las condiciones de trabajo de los campesinos de la subregión. En general, la ejecución de este proyecto representó el mayor traumatismo sufrido por las localidades de El Peñol y Guatapé en toda su historia. Ningún otro acontecimiento había producido tal conmoción en estos municipios.

Algunos efectos negativos fueron previstos por los pocos y limitados estudios preliminares que realizaron las Empresas Públicas de Medellín a través del llamado Comité del Nare. Este comité presentó un primer informe sobre las repercusiones del Proyecto en el Municipio de El Peñol desde 1962; luego entregó un

informe similar sobre el Municipio de Guatapé en 1966. Pero ambos estudios fueron rechazados por los pobladores que los consideraron insuficientes y claramente parcializados en favor de las Empresas Públicas. Por ello exigieron nuevas investigaciones que profundizaron en el conocimiento sobre el impacto socio-económico de las obras de la central hidroeléctrica; sin embargo, el desinterés y la desidia de las Empresas demoraron mucho tiempo su realización. Así, en su mayoría, las nefastas consecuencias del Embalse de El Peñol y la Central de Guatapé sobre el medio humano circundante no fueron conocidas sino hasta que se manifestaron con toda su fuerza en el curso de los trabajos.

El mas inmediato efecto del represamiento del rio Nare fué la inundación de las cabeceras municipales de El Peñol y Guatapé y el consecuente desalojo de sus pobladores. La primera de ellas fué totalmente cubierta por las aguas obligando al traslado de toda la población a otro lugar. Como resultado del embalse se afectaron el 89% de las 938 propiedades urbanas de El Peñol, entre las cuales se incluían residencias, locales comerciales, escuelas, colegios, hospital, asilo, casa cural, templo, cementerio, plaza de ferias y matadero. Este hecho determinó el desplazamiento de un total de 3,955 habitantes del casco urbano (Comité del Nare, 1966:25).

En el caso de Guatapé fué un poco menor la magnitud de este problema pues la inundación de la cabecera municipal apenas se realizó parcialmente. En la zona urbana de este municipio, de 521 propiedades fueron afectadas 124, entre las cuales se contaban varias residencias, un local comercial, una escuela, el matadero y 21 predios agrícolas incluidos en el perímetro urbano. La destrucción de residencias y locales para dar paso a la represa en el área urbana de este municipio implicó el desalojo de 734 pobladores (Comité del Nare, 1966:15).

Las zonas rurales de la subregión también resultaron gravemente afectadas por el embalse. En El Peñol las aguas de la represa inundaron 3,261 hectáreas que representaban el 24% del territorio municipal, mientras que en Guatapé se perdieron 3,031 hectáreas que constituían el 37% del municipio. Esto lógicamente produjo la inhabilitación, deterioro y desarticulación del área rural de los dos municipios. En el primero fueron inundadas 239 propiedades rurales, incluyendo habitaciones y escuelas. De la población campesina quedaron afectados directamente unos 2,320 habitantes que se vieron obligados a desplazarse a la cabecera o a otras veredas. En el segundo municipio el embalse afectó a 178 propiedades rurales entre habitaciones y escuelas que quedaron inundadas y a un total de 1,218 habitantes que fueron desalojados (Comité del Nare, 1966:17).

La inundación de las zonas urbanas y buena parte de las áreas rurales significó además grandes pérdidas en vivienda. Como consecuencia del desalojo de las cabeceras municipales y algunas veredas, gran número de familias quedaron sin habitación. En Guatapé fueron destruidas en total 274 residencias de las cuales 100 se localizaban en la cabecera municipal y 174 en las veredas. Mucho más grave fue el problema habitacional en El Peñol donde el área urbana fue totalmente cubierta por las aguas. Allí se perdieron en total 909 viviendas entre las cuales se contaban 237 casas campesinas y 672 habitaciones urbanas (Comité del Nare, 1966:17-18). El de la vivienda se convirtió así en uno de los más agudos problemas sociales generados por el Embalse de El Peñol.

Esta obra determinó también significativas pérdidas en la infraestructura vial de ambos municipios. Las aguas represadas destruyeron calles, carreteras, caminos veredales y puentes de gran importancia para las comunicaciones en la zona. En el caso de El Peñol la inundación de la localidad implicó de hecho la pérdida total de sus vías urbanas; además, como resultado del necesario desplazamiento de la cabecera municipal hacia otro

sitio, toda la red de caminos que la comunicaba con las veredas quedó desarticulada. En Guatapé solo se afectó parcialmente la infraestructura vial del municipio debido a que la inundación no fué completa; sin embargo, sufrieron importantes daños algunas calles aledañas a la plaza principal y las carreteras que comunican el área urbana con las veredas y municipios vecinos.

Algo similar ocurrió con otros servicios públicos como las redes de acueducto, alcantarillado y energía, las cuales se perdieron totalmente en El Peñol. En Guatapé quedaron interrumpidas dichas redes en la parte baja de la zona urbana inundada por el segundo embalse. En cuanto a los planteles educativos los dos municipios tuvieron mas o menos las mismas pérdidas con la diferencia de que en El Peñol la mayoría de las 6 escuelas y colegios destruidos eran de la cabecera urbana, mientras que en Guatapé casi todas las 5 escuelas perdidas estaban localizadas en el área rural (Comité del Nare, 1966:18).

Todo esto produjo evidentemente un grave deterioro de las condiciones de vida de pobladores y campesinos de El Peñol y Guatapé. En las zonas urbanas los habitantes vieron disminuir la calidad de los servicios públicos y en las áreas rurales los campesinos quedaron incomunicados de sus respectivas veredas municipales. La destrucción de gran parte del equipamiento básico produjo una verdadera situación de emergencia social en los dos municipios afectados.

Otro importante efecto negativo de la represa de Santa Rita fué la inundación de grandes extensiones de tierra dedicadas a la agricultura y a la ganadería. Estas constituían la base de la economía de los dos municipios y su pérdida representó el mas grave problema afrontado por los campesinos de zona. En el Peñol resultaron afectadas por el embalse el 35% de las tierras productivas y en Guatapé desapareció bajo el agua el 56% del área dedicada a cultivos y a pastos. Lo peor de todo es que estas

tierras estaban localizadas en las partes mas bajas, especialmente en las vegas del rio, y eran, por ello las de mayor producción agrícola y ganadera. En estas circunstancias, el sector agrícola de ambos municipios experimentó profundos cambios que afectaron negativamente las condiciones de trabajo de los campesinos.

Fueron múltiples, en efecto, las consecuencias económicas directas de esta situación: escasearon los terrenos para cultivos, aumentó su demanda, subieron los precios del suelo, disminuyó el tamaño de las parcelas, cambió la tenencia de la tierra, aumentaron los costos de readecuación de nuevos terrenos, bajó la productividad del trabajo agrícola, se sustituyeron cultivos y aparecieron nuevos usos del suelo. En general, toda la estructura del sector primario de El Peñol y Guatapé se modificó sustancialmente a raíz del embalse. Su impacto total se manifestó claramente en la disminución de la producción agropecuaria de ambos municipios en mas de un 70% (Codesarrollo, 1982:16-17).

Estos cambios en el sector agrícola tuvieron a su vez importantes efectos sobre el empleo y los ingresos en las dos localidades. Aunque durante el período de construcción de la central hidroeléctrica se crearon algunos puestos de trabajo para los pobladores de la zona y aumentaron las entradas monetarias de algunos sectores económicos locales, al final se incrementó la tasa de desempleo y bajó notablemente el nivel de ingresos. El mas afectado en este sentido fué el sector campesino que desde un principio vió reducidas sus oportunidades de trabajo ante la disminución del área para la producción agrícola. Los sectores comercial, artesanal y de servicios tuvieron una cierta bonanza en el tiempo de la construcción de las obras pero, apenas terminaron éstas, su situación económica se deterioró dramáticamente. Cuando los trabajadores de la central abandonaron la zona, bajó sustancialmente la demanda y muchos

establecimientos comerciales y de servicios simplemente desaparecieron. En definitiva, después de una transitoria y aparente mejora en el empleo y el ingreso, en El Peñol y Guatapé se evidenciaron los desastrosos efectos de la central sobre las condiciones de trabajo de los pobladores y campesinos.

Hasta los ingresos municipales se redujeron como consecuencia del gran proyecto hidroeléctrico. La compra de la mayor parte de las tierras de El Peñol y Guatapé por parte de las Empresas Públicas de Medellín implicó una disminución considerable en las entradas fiscales de ambos municipios al estar las empresas legalmente exoneradas del pago de impuesto predial por sus propiedades (Cie Universidad de Antioquia, 1969:90). En Guatapé, además, la administración municipal dejó de percibir el impuesto que cobraba por la extracción de materiales de playa, los cuales fueron utilizados en la construcción de las obras de la central. Para colmo, los gobiernos departamental y nacional mermaron sus auxilios presupuestales con destino a las dos localidades argumentando que las Empresas Públicas realizaban allí importantes inversiones.

Pero no sólo en el aspecto económico resultaron afectados los pobladores de El Peñol y Guatapé. La vida social en su conjunto sufrió graves traumatismos a causa de las obras de la central hidroeléctrica. Prácticamente en todos los ámbitos de la sociedad local se registraron cambios importantes. El impacto negativo del Proyecto Nare se sintió en el campo educativo, a nivel comunitario, en la estructura familiar, en el aspecto cultural y, en general, en la vida cotidiana de las gentes de los dos municipios.

Uno de los efectos sociales más importantes del Proyecto Hidroeléctrico del Nare fue la amplia corriente migratoria que generó en la zona. En este sentido produjo la migración de núcleos familiares completos tanto del área urbana como de la



rural. Así, sólo en Guatapé, donde no hubo la necesidad de trasladar la cabecera a otro sitio, manifestaron su interés por emigrar el 51% del total de familias del municipio, entre las cuales se contaban 210 que vivían en la cabecera y 157 en las veredas (Codesarrollo, 1971: 30). La mayor parte de este éxodo se dirigió hacia la ciudad de Medellín y otros municipios del Oriente Antioqueño.

También en el campo educativo se sintieron con rigor las repercusiones de las obras de la represa. Con la destrucción de varias escuelas y colegios, tanto en las cabeceras como en las veredas, disminuyeron considerablemente los recursos locativos aunque, como resultado de la migración, se redujo igualmente la población escolarizable. A esto se sumaron fenómenos como el ausentismo, el bajo rendimiento académico y la deserción de los alumnos. Incluso llegaron a desaparecer otras formas de educación no formal como las escuelas radiofónicas y los cursos agropecuarios (Codesarrollo, 1971:34). A consecuencia de todo ello aumentó el analfabetismo en la zona.

Por otra parte, en las comunidades locales la llegada de nuevos grupos de trabajadores, técnicos, veraneantes y turistas ocasionó una estratificación social con el surgimiento de diferencias económicas y de prestigio antes inexistentes. Esta inmigración de gentes extraña produjo importantes cambios socio-culturales como el cosmopolitismo y el aumento de las aspiraciones e inconformidad de la población nativa. Tales cambios repercutieron directamente en el debilitamiento de la cohesión interna de las comunidades tradicionales. El resultado fué un proceso de desintegración comunitaria ante la pérdida del sentido de solidaridad entre vecinos y paisanos.

Este proceso se vió reforzado a nivel ideológico por un debilitamiento de los valores culturales propios de la población, la adquisición de nuevas costumbres por parte de los mas jóvenes

y un sentimiento generalizado de desarraigo debido a las dificultades que tuvieron los pobladores para readaptarse a un medio tan radicalmente transformado. La supresión de gran parte del anterior paisaje de colinas y valles para convertirlo en una zona lacustre, tuvo como consecuencia la pérdida de la identidad de gentes con su hábitat natural, lo cual produjo, a su vez, un fuerte sentimiento de inseguridad.

Tal situación afectó incluso a las sólidas tradiciones familiares y religiosas en las dos localidades. La vida familiar se vió amenazada por la desintegración, el madresolterismo y el debilitamiento de las relaciones entre sus miembros. En el aspecto religioso se produjo un deterioro de las creencias de las gentes que se hizo evidente por las desaparición de grupos y cofradías de carácter socio-religioso, así como por un relajamiento en las normas morales de la población (Codesarrollo, 1971: 35).

A todo esto se sumó, finalmente, la aparición de graves fenómenos de descomposición social, antes prácticamente desconocidos en las dos localidades. Con la llegada de personas extrañas, surgieron ciertas patologías sociales como la prostitución y la delincuencia. En ambos municipios aumentó el consumo de licores y por primera vez comenzaron a registrarse casos de farmacodependencia (Codesarrollo, 1971: 36).

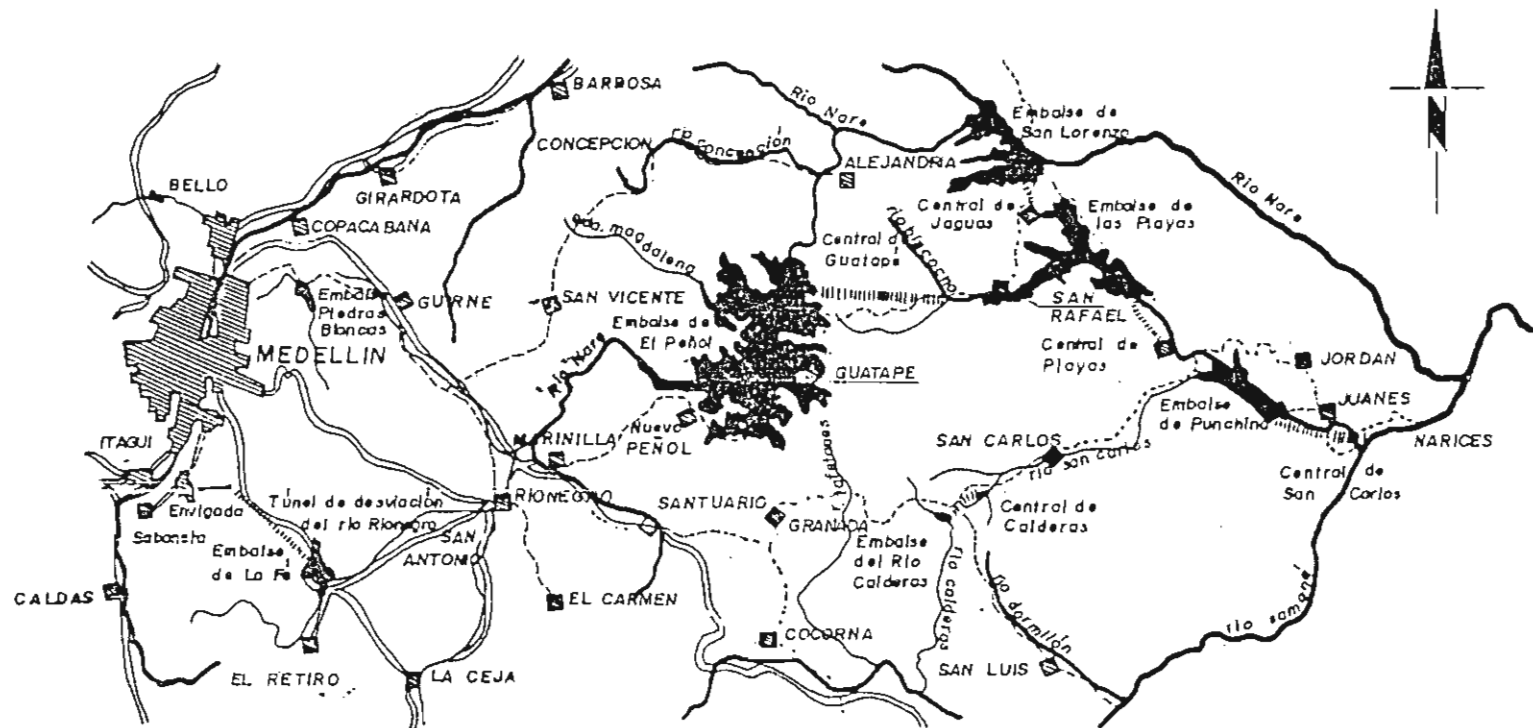
Como resultado de este cúmulo de problemas, en los municipios de El Peñol y Guatapé surgieron una serie de tensiones que rápidamente desembocaron en un conflicto social de grandes dimensiones. Frente a la gravedad de la situación económica y social generada por el Proyecto Hidroeléctrico del Nare, los pobladores y campesinos se organizaron y movilizaron masivamente para protestar y exigir soluciones a las Empresas Públicas de Medellín, responsables de las obras. Fue así como el principal efecto social de la Central de Guatapé terminó siendo,

precisamente, el desarrollo de un amplio e intenso movimiento cívico.

## REFERENCIAS

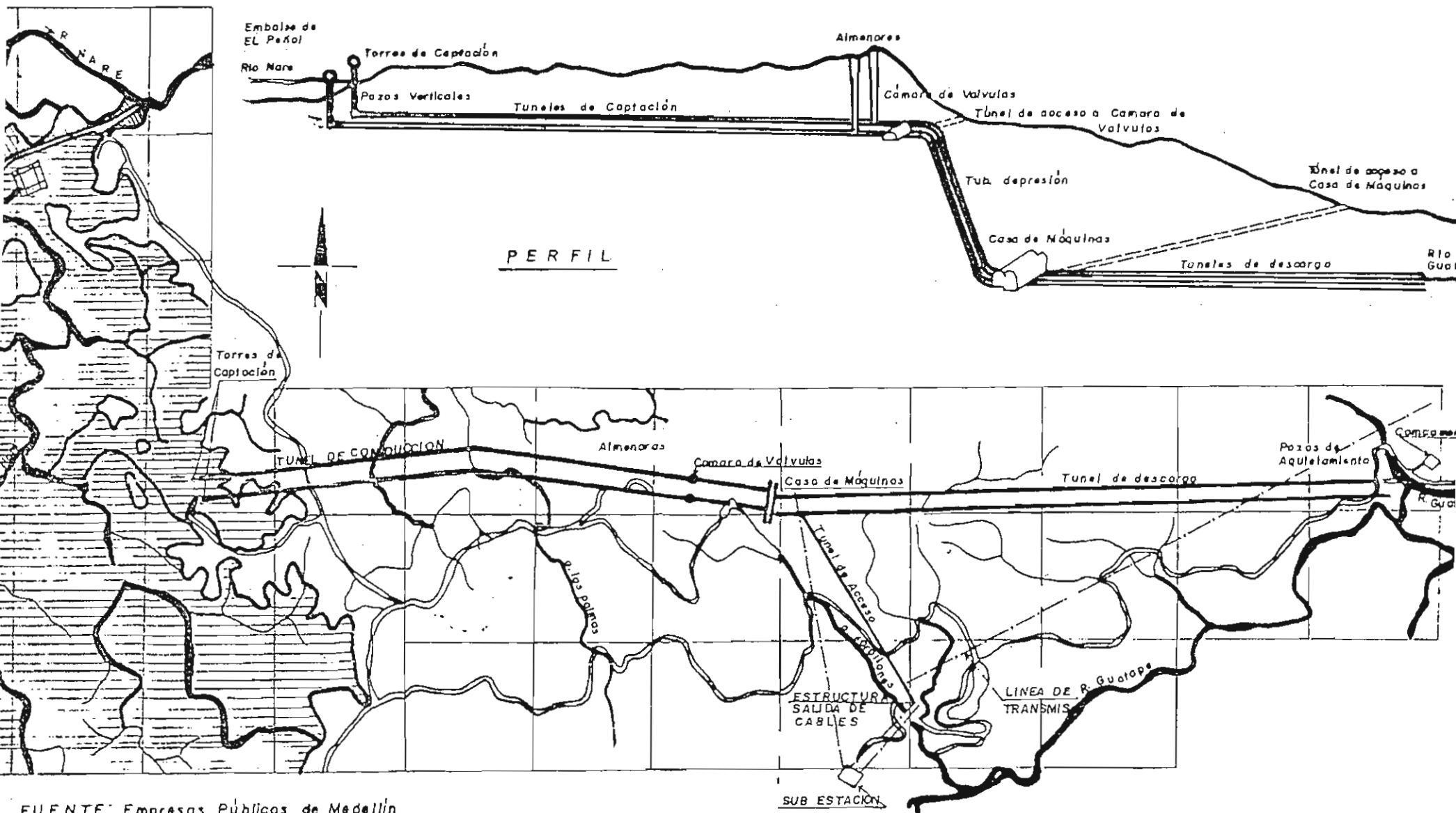
1. ARANZAZU, Amelia y otras. (1970) Programa de emergencia de trabajo social para el Municipio de El Peñol. Universidad Pontificia Bolivariana Facultad de Trabajo Social, Medellín.
2. CIE UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA. (1969) Estudio socioeconómico del Municipio de Guatapé. Editorial U. de A., Medellín.
3. CODESARROLLO. (1966) Estudio sobre el Peñol y la incidencia del Proyecto Nare. Editorial U. de A., Medellín.
4. \_\_\_\_\_ (1971) El Peñol: situación actual y afectación con la represa del Nare. Medellín.
5. \_\_\_\_\_ (1982) Consecuencias socio-económicas de la Central Hidroeléctrica del Nare en el Municipio de Guatapé. Medellín.
6. COMITE DE EL PEÑOL. (1962) Informe sobre El Peñol. Medellín.
7. COMITE DEL NARE. (1966) Informe sobre el Municipio de Guatapé Recomendaciones. Medellín.
8. EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN. (1980) "Costos y rendimientos del Proyecto Guatapé". Revista Empresas Públicas de Medellín. Vol. 2 No. 1 Ene-Mar.
9. INTEGRAL. (1979) Proyecto Hidroeléctrico de Guatapé. Central de Guatapé. Etapa II. Informe de construcción. Medellín.
10. OSPINA, Libardo. (1966) Una vida, una lucha, una victoria. Monografía histórica de las Empresas y Servicios Públicos de Medellín. Editorial Colina, Medellín.
11. VASQUEZ, Gabriel. (1979) "Notas para un informe histórico del Proyecto Nare" Revista Empresas Públicas de Medellín. Vol. 1 No. 5 Oct-Dic.

## GRAFICO 2 ORIENTE ANTIOQUENO LOCALIZACION DE LOS PROYECTOS HIDROELECTRICOS Y MUNICIPIOS AFECTADOS.



FUENTE: ISA: Interconexión Eléctrica S.A.

# GRAFICO 3 PLANTA Y PERFIL DEL PROYECTO HIDROELECTRICO DEL RIO NARE



FUENTE: Empresas Públicas de Medellín

PLANTA

#### **4. EL MOVIMIENTO CIVICO DE LOS MUNICIPIOS DE EL PEÑOL Y GUATAPE**

Pocos o ninguno de los movimientos cívicos en Colombia tiene una historia tan prolongada como la lucha de los pobladores de los municipios de El Peñol y Guatapé. No son raros los movimientos que duran apenas unas cuantas semanas y aún días. El caso más común son los movimientos que tienen una vida de algunos meses. Unos pocos han llegado a mantenerse por varios años. Pero es difícil señalar otro movimiento cívico en el país que, como el de estos dos municipios, tenga una historia de décadas.

Este movimiento cívico surge, en efecto, a principios de la década del sesenta y aún hoy se conserva con toda su fuerza. Durante tan largo período ha pasado lógicamente por diversas fases de auge y receso, por éxitos y fracasos, que hacen de él uno de los más interesantes y aleccionadores entre los movimientos cívicos en Colombia. Para comprenderlo mejor conviene entonces seguir su rica historia a través de sus diferentes etapas de desarrollo desde 1960 hasta 1982.

##### **4.1. PRIMEROS CONFLICTOS CON LOS POBLADORES 1960-64**

Aunque los estudios para el aprovechamiento hidroeléctrico del río Nare se venían realizando desde 1954 no fué sino hasta comienzos de la década del sesenta que los pobladores de El Peñol

y Guatapé tuvieron algún conocimiento de este proyecto. Mientras las Empresas Públicas de Medellín contrataban la elaboración del diseño definitivo, en estos municipios se carecía de toda información sobre la obra que afectaría tan profundamente sus vidas. En la decisión de construir una central de tal magnitud estuvieron ausentes por completo las comunidades directamente interesadas.

El primer indicio de los problemas a que se verían abocados lo tuvieron los habitantes de El Peñol en 1960 cuando se decretó la congelación de sus propiedades con el fin de evitar la especulación sobre las tierras que deberían comprar las Empresas Públicas. Esta medida no suscitó, sin embargo, ninguna respuesta de la población que no llegó a percibir sus implicaciones. En general, las gentes ignoraron o no le concedieron mayor importancia a la situación creada.

Los únicos que en un principio se interesaron por conocer mas a fondo el problema fueron los sacerdotes y concejales del municipio de El Peñol. En noviembre de 1960 la Parroquia y en enero del año siguiente el Concejo Municipal, solicitaron a la empresa información sobre su proyecto de la Central del Nare. En su respuesta "el gerente general de las Empresas Públicas de Medellín anunció por primera vez oficialmente que los estudios preliminares sobre el desarrollo hidroeléctrico del río Nare contemplaban el total anegamiento de la cabecera del municipio de El Peñol y de una parte de la cabecera del municipio de Guatapé" (El Pregón de Oriente, 01/03/68:2). De esta manera sólo en 1961 pudo conocer la opinión pública un proyecto cuyos estudios se estaban adelantando desde hacia casi 10 años.

Desde que dieron las primeras noticias sobre el Proyecto Nare, las Empresas Públicas insistieron en su magnitud e importancia nacional. Se trataba del "mas grande de su índole en América Latina" y "colocará a Medellín en las mejores condiciones

en cuanto a generación de energía pues tendrá posibilidades de exportar tanto para los municipios de Antioquia como para otros departamentos colombianos" se expresaba en varios artículos de prensa (El Colombiano, 09/06/61:19). Pero, sobre todo, la propaganda oficial aseguraba que el desarrollo hidroeléctrico del río Nare era una obra que "redimirá una de las mas ricas y promisorias regiones del Oriente Antioqueño" pues "la industria, el turismo y la agricultura recibirán un notable impulso" (El Colombiano, 13/04/61:9). Según las Empresas, este proyecto presentaba las mayores ventajas tanto para el país como para la zona en la que se realizaría.

Sin embargo, los estudios con que hasta ese momento contaban las Empresas Públicas eran exclusivamente carácter técnico. A pesar de ser evidente que el proyecto tendría graves consecuencias para la subregión y sus pobladores, no se había realizado ningún estudio sobre el impacto socio-económico de la Central de Guatapé. Esta situación comenzó a inquietar a los directivos de las Empresas cuando vieron inminente la necesidad de dar mas información sobre el proyecto.

Por esto, en abril de 1961, atendiendo una solicitud de las Empresas Públicas, el gobernador de Antioquia creó el llamado Comité del El Peñol en el que participaban representantes del municipio, la administración departamental y funcionarios de la empresa. De acuerdo con el decreto de creación, este equipo técnico se encargaría de "planear, estudiar y proponer las soluciones mas aconsejables para los municipios afectados por la construcción de la Central Hidroeléctrica del Nare" (Decreto 232 bis de 20/04/61 de la Gobernación de Antioquia). En particular, al Comité se le asignó tarea de presentar recomendaciones sobre el sitio al que debería ser trasladada la cabecera del municipio de El Peñol una vez se procediera al represamiento de las aguas del embalse.



La instalación del Comité de El Peñol permitió evidenciar el primer conflicto entre las Empresas Públicas y los municipios amenazados por el proyecto de la central. El problema inicial que tenían los pobladores era el de contar con información exacta acerca del impacto de las obras sobre la economía, el medio ambiente y sus condiciones de vida. El Comité trató de cubrir este vacío y en septiembre de 1962 presentó un estudio sobre la situación social del municipio de El Peñol en el que además recomendaba el sitio Guamito-Horizontes como el más apropiado para construir la nueva cabecera (Comité del Nare, 1962). Pero este "Informe sobre El Peñol" fue rechazado por toda la comunidad que lo calificó de incompleto y superficial. Se planteó así un primer conflicto entre la empresa estatal y los pobladores que consideraban el Comité de El Peñol como un organismo ineficiente y poco funcional.

Junto a este proceso se desarrollaba simultáneamente otro conflicto originado en la compra de tierras adelantada por las Empresas Públicas. Desde un principio éstas asumieron una política discriminatoria que estimuló la acción abusiva y rapaz de los intermediarios, especialmente en contra de los campesinos y pobladores más pobres. La gravedad del problema exaltó muy pronto los ánimos de la población hasta el punto que el Concejo Municipal entró en abierto enfrentamiento con las Empresas Públicas. En agosto de 1962 aprobó una resolución en la que protestaba por la "discriminación en las compras y abusos de algunos intermediarios, pues a unos aceptaban y a otros rechazaban" en calidad de vocero autorizado del municipio, (El Pregón de Oriente, 3/O8/68:1a). Al conflicto se sumó enseguida el periódico local "La Chispa" que aseguraba que "la paciencia se está agotando por motivos que bien conocemos ya que las Empresas Públicas sin escrúpulo alguno prosiguen sus programas sin acceder a nuestras peticiones" (La Chispa, 1962). De esta manera se inició una dura confrontación por la negociación de tierras que se mantuvo por varios lustros.

En estas circunstancias apareció en 1963 la primera organización que se presentó ante al opinión pública como representante de los pobladores. Se llamaba "Junta pro-defensa del Municipio de El Peñol" y estaba conformada por miembros de la colonia peñolita en Medellín, entre los que se destacaban especialmente algunos juristas. Bajo su influencia, la posición básica de esta organización era que "la defensa de los intereses legítimos debe estar confiada a la ley, el derecho y la justicia". Sobre esta base adelantaron sus actividades en el campo exclusivamente jurídico. De ellos surgió la idea de procurar la firma de un contrato entre el Municipio de El Peñol y las Empresas Públicas de Medellín en que éstas asumieran legalmente sus responsabilidades y compromisos con las comunidades afectadas por las obras de la Central del Nare. En este sentido, en octubre del mismo año presentaron al gerente de las Empresas un estudio en el que consignaban "los puntos básicos sobre los que van a iniciarse las conversaciones" para llegar a un posible acuerdo. (Momento Municipal, 15/10/63:1).

También a fines de 1963 llegaron a la zona los primeros equipos y grupos de trabajadores encargados de las obras preliminares para la construcción de la central. Por ese tiempo empezaron a transitar por las calles de Guatapé las máquinas y vehículos pesados de los contratistas que causaron los primeros daños en residencias y redes de servicios públicos. Una casa de la zona urbana fué destruida y tuvo que ser comprada por las Empresas Públicas. Desde esa negociación inicial aparecieron los intermediarios que alteraron por completo el sistema de precios de las propiedades inmuebles de ese municipio. Así, ante la proximidad del comienzo de los trabajos a plenitud, la tensión se elevó considerablemente.

En el Peñol, por su parte, los pobladores exigieron iniciar inmediatamente las conversaciones sobre política de compras y las

Empresas Públicas las condicionaron a la aceptación del sitio que ellos habían elegido para el traslado de la cabecera municipal. Pero este conflicto no se pudo resolver y con él terminó la primera fase del movimiento.

En resumen, durante el período 1960-1964 apenas alcanzaron a plantearse los problemas que dieron origen al movimiento cívico de El Peñol y Guatapé. Entre éstos se destacaron tres especialmente: la inexistencia de estudios serios y profundos sobre el impacto socio-económico de la central, el comienzo de una arbitraria política de compra de tierras por parte de las Empresas Públicas y la necesidad de definir el sitio donde debería construirse la nueva cabecera municipal de El Peñol. Con dichos conflictos sin resolver el movimiento pasó a otra fase de su desarrollo.

#### 4.2. NEGOCIACIONES POR EL CONTRATO MAESTRO 1964-69

Al comenzar la construcción de las obras de la Central del Nare en marzo de 1964 se inició también un segundo momento del conflicto entre las Empresas Públicas de Medellín y los pobladores de El Peñol y Guatapé. Desde el punto de vista de la empresa este período estuvo caracterizado por un gran avance en los trabajos de la primera etapa de la central; y desde la perspectiva de los pobladores fué un fase en la que casi todos sus esfuerzos estuvieron orientados a lograr la firma de un contrato que les garantizara la preservación de sus derechos y la solución de sus problemas.

El primer acontecimiento importante registrado en esta segunda fase del movimiento fué el retiro de dos representantes del Concejo Municipal de El Peñol ante el Comité del Nare en diciembre de 1964. Esta actitud no implicó, sin embargo, una radicalización del Concejo frente a las Empresas Públicas. de

hecho lo que sucedió fué la consolidación de una posición conciliadora que había sido promovida inicialmente por la "junta pro-defensa". Aunque ésta desapareció rápidamente por no estar fuertemente arraigada en la población local, su orientación negociadora se impuso en la práctica durante todo este período. La idea de promover la firma de un contrato con las Empresas Públicas de Medellín fue recogida por el Concejo Municipal y la Parroquia de El Peñol que se constituyeron en los abanderados del movimiento durante casi toda esta fase.

En esta orientación del movimiento jugaron un papel fundamental los sacerdotes de El Peñol. Apoyados en las fuertes convicciones religiosas de la población, la Parroquia se convirtió en esta etapa del movimiento en un elemento aglutinador de los pobladores. Prácticamente se hizo innecesaria cualquier otra forma organizativa pues ella asumió gran parte de las funciones de convocatoria, reunión, toma de conciencia, movilización y orientación de las comunidades afectadas por las obras de la central. Por ello se convirtió también en el principal vocero ante las Empresas Públicas de Medellín y las autoridades civiles en general.

En efecto, desde los primeros meses de 1964, a través de un comunicado público, el clero del Oriente Antioqueño solicitó a las Empresas Públicas la realización de un estudio socio-económico integral de la zona afectada por la construcción de las obras y la definición del sitio en el que sería ubicada la nueva cabecera municipal de El Peñol. Esta petición fué apoyada por el obispo de la Diócesis de Sonsón (a la que pertenecen todas las parroquias de esta subregión) en una visita pastoral al municipio realizada en julio de ese mismo año y en la que ofrecía a sus habitantes "la colaboración desinteresada, decisiva y constante de su obispo, del clero y de los apóstoles seculares que estamos interesados en la solución, la más justa, la más conveniente y la

más favorable a los problemas tan complejos que sufre el pueblo de El Peñol" (El Fregón de Oriente, 04/04/88:10).

Siguiendo esta línea, durante el primer semestre de 1965 las parroquias de San Rafael, El Peñol y Guatapé realizaron con su feligresía una Misión que llegó a constituir más de 80 centros misionales. Entre los temas de reflexión propuestos por la Iglesia se encontraba un análisis de la situación social a la que se verían abocados los tres municipios por causa de la Hidroeléctrica del Nare. Como culminación de este proceso, en julio se reunieron en Guatapé representantes de las tres parroquias con el fin de acordar una estrategia común en las negociaciones con las Empresas Públicas de Medellín. Entre las conclusiones se aprobó exigir la firma de un contrato entre las partes involucradas en el conflicto (Entrevista Párroco de El Peñol, 08/08/84).

Durante 1966 la Parroquia de El Peñol continuó promoviendo la toma de conciencia de los pobladores y auspició varias visitas al municipio de Guatavita (Cundinamarca) para que conocieran directamente la problemática de esa población cuya área urbana también sería inundada por una represa y trasladada a otro sitio. El 15 de septiembre de ese año una delegación de 50 pobladores de El Peñol, acompañados por uno de los sacerdotes de la Parroquia, presenciaron el desalojo de los últimos habitantes del viejo pueblo de Guatavita para dar comienzo al embalse del mismo nombre. De allí en adelante ese ejemplo fue uno de los puntos de referencia fundamentales de los pobladores en su conflicto con las Empresas Públicas. "No ovidaremos a Guatavita" era uno de los lemas que, acompañados de las fotos correspondientes, colgaban de las paredes de la casa cural de El Peñol.

Un papel semejante cumplió en esta fase del movimiento el Concejo de este municipio. Aunque no tuvo el poder de convocatoria de la Parroquia, se erigió también en vocero de las

comunidades afectadas. En su calidad de representante legal del municipio asumió la dirección del proceso de negociaciones con las Empresas Públicas desarrollado a lo largo de todo este período. En sus manos estuvieron prácticamente todas las decisiones importantes que se tomaron en esta fase de conversaciones y acuerdos.

Su primera iniciativa en este sentido fué la de contratar con una entidad independiente de las partes en conflicto un verdadero estudio socio-económico del municipio. En septiembre de 1964 el Concejo de El Peñol solicitó a las Empresas Públicas financiar un nuevo estudio que debería ser realizado por la Corporación de Desarrollo, una entidad privada sin ánimo de lucro y con sede en Medellín, que de allí en adelante jugaría un papel de gran trascendencia para el movimiento. En febrero siguiente las Empresas aceptaron pagar tal estudio pero insistieron en la necesidad de definir pronto el sitio a donde debería trasladarse la población urbana desalojada. Codesarrollo entregó su informe en octubre de 1965 recomendando "que se efectuaran contratos bilaterales con base en una amplia política social y sugiriendo el sitio Horizontes como el mas indicado para la construcción de la nueva cabecera" (Codesarrollo, 1965).

El informe de Codesarrollo fué ampliamente acogido por los pobladores de El Peñol. En enero de 1966 el Concejo manifestó su acuerdo con el sitio recomendado por esa entidad pero condicionó su autorización para el traslado de la población a la firma de un contrato con las Empresas Públicas. A tal fin, unos meses mas tarde envió a éstas un comunicado en el que precisaba los puntos sobre los cuales deberían girar las conversaciones. Las Empresas aceptaron y en noviembre firmaron con el Concejo un convenio por el cual se encargaba nuevamente a Codesarrollo elaborar "un proyecto de contrato que contuviera las bases generales de las relaciones entre las partes" (El Pregón de Oriente, 01/02/68:8). Este acuerdo fué aceptado por los sacerdotes de las localidades

afectadas que sugirieron además a Codesarrollo como la entidad asesora de los municipios en las negociaciones.

En estas circunstancias, sólo a finales de 1967 pudieron comenzar las conversaciones directas entre las Empresas Públicas y el Municipio de El Peñol. Con tal propósito, en octubre de ese año el Concejo Municipal se declaró en comisión negociadora permanente. Sin embargo, las negociaciones entre las partes en conflicto tropezaron con grandes dificultades. Primero fué el diferendo acerca de la participación de Codesarrollo en las comisiones negociadoras; luego fueron los desacuerdos frente a muchos de los puntos contemplados en el proyecto de contrato. Así transcurrieron las negociaciones durante casi todo el año de 1968 en medio de continuas trabas y engaños por parte de las Empresas Públicas.

Pero no todo fueron diálogos y acuerdos durante este período. A medida que avanzaba la construcción de las obras y se acercaba el momento de inaugurar el primer embalse, fué incrementándose nuevamente la tensión entre la población amenazada. En este sentido 1968 fué también el año en que comenzó a agudizarse el conflicto. El descontento de los pobladores con el proceso de negociaciones que se adelantaba se hizo manifiesto.

Este aumento de la tensión estuvo acompañado por la aparición en escena de nuevas organizaciones de los pobladores y campesinos que también entraron a intervenir directamente en el conflicto. Durante 1968 se distinguieron especialmente las Juntas de Acción Comunal que se ocuparon del problema de la negociación de tierras. Impulsado por la Junta de Acción Comunal Municipal y otras instituciones, ese año se firmó el "Pacto de Caballeros" por el cual todos los pobladores se comprometieron a no negociar con las Empresas Públicas ni venderle sus propiedades hasta tanto ellas no aceptaran el Contrato Maestro.

Transcurrido un año de conversaciones sin ningún resultado concreto, los habitantes de El Peñol decidieron aumentar su presión sobre la empresa. En diciembre realizaron una concentración y manifestación para exigir a las comisiones negociadoras que sesionaran abiertamente y no en secreto como lo venían haciendo. Estando en ese momento reunidos los representantes de las Empresas con el Concejo Municipal en la casa cural, los pobladores obligaron a declarar "Cabildo Abierto" para expresar directamente sus demandas a los comisionados. En respuesta a sus exigencias los funcionarios de las Empresas cedieron en los puntos que aún estaban en discusión y así el acuerdo prácticamente quedó listo.

en adelante las reuniones de las comisiones negociadoras fueron simplemente rutinarias. En Mayo siguiente la Junta Directiva de las Empresas le dió aprobación al acuerdo logrado y en abril el Concejo Municipal lo ratificó en tercer debate. De esta manera, el 12 de abril de 1969 se firmó el "Contrato Maestro" entre las Empresas Públicas de Medellín y el Municipio de El Peñol, el cual fué registrado como escritura pública.

Este contrato con el que terminó la fase de negociaciones en El Peñol constituyó sin duda un gran triunfo para los pobladores. Un documento de esta naturaleza no tenía antecedentes ni se ha vuelto a firmar en Colombia otro con iguales características. Es un verdadero pliego de peticiones aceptado legalmente por las Empresas Públicas de Medellín, en el que se consignan minuciosa y sistemáticamente todas las reivindicaciones de movimiento cívico de esta localidad. El Contrato Maestro es un amplio documento en el que las Empresas Públicas se comprometieron a prevenir todos los daños que fueran evitables, a racionalizar el proceso de compra de tierras, a pagar las indemnizaciones correspondientes a los perjuicios causados, a construir la nueva cabecera



municipal según especificaciones claramente estipuladas, a contribuir al desarrollo integral de la zona y a darles participación a los pobladores en la toma de decisiones que pudieran afectarlos. Prácticamente todos los puntos que habían sido motivo del conflicto fueron tenidos en cuenta para su elaboración y quedaron acordadas por escrito las respectivas soluciones.

En contraste con el éxito alcanzado por los pobladores de El Peñol, el proceso de negociaciones que se adelantó paralelamente entre los representantes de Guatapé y las Empresas Públicas sólo condujo a que surgieran los primeros enfrentamientos violentos en la zona. Esta situación se debió en parte a la manifiesta política de las Empresas de dar tratamiento diferencial a las dos poblaciones afectadas por una misma problemática; pero también fué un efecto de las particulares condiciones en que se desarrolló el conflicto en Guatapé.

Como en el caso de El Peñol, después de un período inicial de conversaciones, 1968 fué también un año altamente conflictivo en Guatapé. No sólo había un gran descontento entre los pobladores por la conducta de las Empresas Públicas en las negociaciones; varios problemas que venían de atrás comenzaron a volverse críticos ante el avance en la construcción de las obras de la central. En particular se hizo más conflictivo el proceso de compra de tierras que la empresa estaba acelerando por esa misma razón. Las manifestaciones de descontento por este motivo se hicieron cada vez más frecuentes en Guatapé.

El conflicto se agudizó aún más en el segundo semestre de 1968 cuando las Empresas Públicas comenzaron a llevar piezas de gran dimensión y peso con destino a las instalaciones de la Central del Nare. Su paso por las estrechas calles de la población no sólo causaba grandes daños sino que se hacía en las horas de la noche sin previo conocimiento de las autoridades

municipales. Para protestar por esta situación los pobladores detuvieron por varias horas uno de los vehículos de la empresa que transportaba la bifurcación de la tubería de presión, una pieza clave en los equipos de la central. El hecho no pasó a mayores pero marcó el inicio de una serie de enfrentamientos directos entre los habitantes de Guatapé y las Empresas Públicas de Medellín (Entrevista con pobladores, 08/84).

La situación se volvió tan tensa que en marzo de 1969 la Alcaldía de Guatapé se vió obligada a advertir a la empresa sobre los problemas a los que se vería enfrentada de continuar el paso de vehículos pesados por la población sin que de inmediato se entrara en conversaciones de fondo sobre el conflicto existente. Las Empresas Públicas respondieron al alcalde asegurando que no habría mas dilación en las negociaciones con ese municipio. Sin embargo, los vehículos de los contratistas continuaron transportando las grandes piezas y las conversaciones prometidas no se iniciaron. Se crearon así las condiciones para que el movimiento cívico pasara a otra fase.

#### 4.3. PAROS CIVICOS EN GUATAPE Y EL PEÑOL 1969-70

Los últimos meses de construcción de las obras de la primera etapa de la central y los meses posteriores al cierre de compuertas para dar inicio al primer embalse, constituyeron uno de los periodos mas conflictivos en toda la historia del movimiento cívico de El Peñol y Guatapé. Con la terminación de las obras de las primera fase del Proyecto Nare se agudizaron al máximo las contradicciones entre los intereses de la empresa estatal y los pobladores de la zona. El dilatado proceso de negociaciones adelantado hasta ese momento entró en crisis y el enfrentamiento directo tomó su lugar. Los acontecimientos se precipitaron entonces en ambas localidades. Los pobladores y campesinos decidieron recurrir a acciones de fuerza para obligar

a las Empresas Públicas de Medellín a escuchar sus demandas y atender sus peticiones.

Esta fase de auge del movimiento cívico comenzó en Guatapé en abril de 1969. En medio de los numerosos problemas que allí se venían presentando se produjo un hecho que exaltó definitivamente los ánimos de sus habitantes. Como consecuencia del paso de un vehículo de gran tonelaje se destruyeron las fachadas de varias casas en la entrada de la zona urbana y se produjeron graves daños en las redes de acueducto y alcantarillado del municipio. Los pobladores trataron de impedir nuevamente el paso de vehículos de las Empresas Públicas pero en esta oportunidad intervino la fuerza pública para protegerlos. En protesta los guatapenses decretaron un paro cívico el 30 de abril de 1969 (El Colombiano, 01/05/69:1a).

El primer paro cívico de Guatapé se mantuvo por tres días. Durante ese tiempo los pobladores paralizaron todas las actividades comerciales, educativas, administrativas y de transporte del municipio como medida de presión para que las Empresas Públicas atendieran sus reclamos. El levantamiento del paro lo condicionaron a la suspensión del paso de vehículos pesados por las calles de la población y la reparación de los daños causados a residencias y redes de servicios públicos; además planteaban una serie de reivindicaciones muy sentidas por los campesinos y pobladores: la eliminación de los intermediarios en las transacciones comerciales, el pago oportuno de las propiedades vendidas, la negociación directa con los propietarios, la suspensión de las expropiaciones en marcha y el reconocimiento de indemnizaciones. Con el objeto de presentar estas exigencias a las Empresas Públicas y a las autoridades departamentales conformaron una "junta negociadora" con personas de reconocido prestigio social.

La reunión de la junta negociadora con el gobernador de Antioquia se llevó a cabo el 2 de mayo. Allí los representantes de los pobladores, "después de algunos análisis del problema decidieron aceptar la asesoría de la Corporación Social de Desarrollo y la mediación que había ofrecido el Departamento" For su parte, las autoridades se comprometieron a presentar soluciones concretas si los pobladores retornaban a sus actividades normales. "Con base en este acuerdo los dirigentes cívicos de El Peñol aconsejaron a sus amigos la suspensión del movimiento que adelantaban" (El Colombiano, 03/05/69:1a). Atendiendo la sugerencia, los habitantes de Guatapé levantaron el paro cívico al día siguiente con la condición de que continuaran las conversaciones entre sus delegados, altos funcionarios de las Empresas y el Gobierno Departamental.

Después del primer paro cívico en Guatapé las conversaciones entre las partes continuaron regularmente y en ellas se volvió a plantear la propuesta de mediación de Codesarrollo en el conflicto. En julio de 1969 las Empresas notificaron al Concejo Municipal su acuerdo para que esa entidad asesorara al municipio en las negociaciones. La primera tarea de Codesarrollo en este sentido fué presentar al Concejo una lista de los estudios que serían necesarios para evaluar la problemática de Guatapé. Con tal propósito, en octubre el Concejo Municipal solicitó a las Empresas Públicas la entrega de los estudios que ya tenía sobre el municipio. En general, la entidad estatal aceptó tácitamente todos los planteamientos hechos por Guatapé pero ninguno de esos acuerdos logró formalizarse en algún documento o contrato, como lo exigían los pobladores.

Un proceso igualmente conflictivo se vivía en El Peñol por esos mismos meses. Luego de la firma del Contrato Maestro entre las Empresas Públicas de Medellín y el Municipio la tensión no cedió como se esperaba; por el contrario, el conflicto se agudizó ante la inminencia de la inundación causada por la primera etapa

del embalse. En junio de 1969 las Empresas iniciaron la construcción de las obras de defensa de la parte baja de la cabecera municipal ante la oposición generalizada de los pobladores (El Colombiano, 10/06/69:8). Estos habían tomado la decisión de no aceptar ningún tipo de inundación hasta que las Empresas Públicas no construyeran el nuevo pueblo. En su opinión los trabajos en el dique de protección implicaban el comienzo del desalojo masivo en momentos en que todavía no contaban con un lugar seguro y estable para el traslado. Presionados por su afán de poner pronto en funcionamiento las primeras unidades de la Central, las Empresas insistieron en construir el muro de contención aún en terrenos que no habían sido negociados. Los pobladores respondieron entonces paralizando las máquinas de los contratistas y obligando a sus obreros a abandonar los lugares de trabajo. El propósito era detener el avance de las obras, pero nuevamente intervino la fuerza pública y los trabajos continuaron. Así, a pesar del rechazo de los pobladores, las obras de defensa de la zona urbana de El Peñol estuvieron listas a fines de ese año.

Otra fuente de conflicto interno de El Peñol durante este período fué la firma del contrato entre las Empresas Públicas y la Parroquia. Siendo partícipe del "pacto de caballeros", la Parroquia de El Peñol se había comprometido como los demás propietarios de la localidad a no negociar con las Empresas hasta que éstas no firmaran el Contrato Maestro. Los pobladores vieron en este pacto una eficaz medida de presión frente a las Empresas y tácitamente lo mantuvieron para exigirle a esa entidad la construcción de la nueva cabecera municipal antes de cualquier inundación. Sin embargo, el obispo de la diócesis decidió darle vía libre a la negociación con la empresa estatal reconociendo el interés que tenía en inaugurar prontamente la primera etapa de la Central de Guatapé. Las conversaciones se iniciaron a mediados de año y el 13 de octubre de 1969 se firmó el contrato por el cual las Empresas Públicas de Medellín se comprometían a pagar a la

Parroquia de El Peñol una fuerte suma de dinero por concepto de compra de propiedades e indemnizaciones y a construir en la nueva cabecera municipal las obras necesarias para mantener el culto religioso (El Colombiano, 10/10/69:18). Estando pendiente en esos momentos la lucha contra las obras de defensa, los pobladores consideraron ese acto como una traición a su movimiento.

No se habían solucionado aún estos problemas cuando las Empresas Públicas de Medellín anunciaron oficialmente que el año siguiente entraría en operaciones la primera etapa de la Central de Guatapé. En diciembre de 1969 precisaron que el cierre de compuertas para iniciar la primera etapa del embalse de El Peñol se haría en menos de un mes.

Ante la gravedad y urgencia de la situación creada, los pobladores de los dos municipios reaccionaron simultáneamente. En Guatapé los sacerdotes de la Parroquia dieron a conocer una carta abierta en la que denunciaban a las Empresas Públicas de Medellín por la violación de muchos de los compromisos contraídos y hacían un llamado al Concejo y a la comunidad en general para que defendieran los intereses del municipio. En El Peñol se unieron nuevamente el Concejo Municipal, la Parroquia y todos los pobladores para enviar un "memorial" a la empresa estatal en el que señalaban el incumplimiento de muchas de sus obligaciones contractuales previas al inicio del almacenamiento del agua; en el documento expresaban además su sorpresa ante "el anuncio del gerente de Empresas Públicas de que a partir del 22 de enero próximo, en cualquier momento puede iniciarse la inundación de tierras correspondientes a la primera etapa del embalse de El Peñol" (El Colombiano, 15/01/70:20).

Continuando con esta línea de acción, el 20 de enero de 1970, los pobladores de Guatapé y El Peñol exigieron a las Empresas Públicas que reconsideraran su decisión de proceder de inmediato a poner en marcha la primera etapa de la central

hidroeléctrica. En sendas cartas y oficios, los estamentos sociales básicos de estas localidades acusaban a las Empresas de "atentar contra la tranquilidad pública al ordenar ellas el cierre de compuertas para el primer embalse" (El Colombiano, 23/01/70:12).

La reacción de las autoridades departamentales a las demandas de los pobladores fué la de darles un tratamiento de orden público. Ante el creciente descontento en El Peñol y Guatapé, el Secretario de Gobierno del Departamento manifestó a los medios de comunicación que "las autoridades han realizado investigaciones tendientes a establecer las amenazas de paros cívicos de que se ha hecho mención en algunas poblaciones de Antioquia, pudiendo comprobar que las versiones carecen de fundamento; según el funcionario, lo que ocurría era que había "agitadores que tienen el propósito de capitalizar la situación para alterar el orden". Por tal razón fué nombrado un nuevo Alcalde para El Peñol con precisas instrucciones de la Secretaría de Gobierno para evitar que elementos ajenos a la localidad traten de perturbar la tranquilidad en un momento dado" (El Colombiano, 14/01/70:21).

Apoyándose en esta actitud de las autoridades departamentales, las Empresas Públicas dieron comienzo a la primera etapa de la Central de Guatapé el 24 de enero de 1970. En las horas de la madrugada de ese día, bajo protección policial, los técnicos de la empresa cerraron las compuertas de la presa de Santa Rita y el Embalse de El Peñol empezó a llenarse (El Colombiano, 27/01/70:20).

Los primeros en reaccionar fueron los pobladores de Guatapé; dos días mas tarde, el 26 de enero, decretaron un nuevo paro cívico, con carácter indefinido, para protestar por el comienzo del embalse y el "no cumplimiento del contrato en la adquisición de tierras por parte de las Empresas Públicas". En este sentido,

el problema mas grave era el de los campesinos que veían amenazadas sus parcelas por las aguas sin que se hubiera llegado a ningún acuerdo previo con las Empresas; según un sacerdote de la Parroquia, "quien hace las veces de vocero de numerosos campesinos, a por lo menos 37 no se les ha comprado sus tierras que ahora se encuentran amenazadas por la inundación que se inició el sábado"; un caso representativo de esta situación era el del labriego "quien ni siquiera sabía lo que venía sucediendo y el domingo, cuando se levantó, observó que el cultivo de tomates había sido inundado, perdiendo la totalidad de la cosecha". Por ello "los dirigentes del paro manifestaron, refiriéndose al levantamiento del mismo, que sólo se produciría una vez que las autoridades hubieran resuelto el problema" (El Colombiano, 27/01/70:4).

Como en el caso anterior, el cese de actividades fué total durante el tiempo de su vigencia. En él participaron comerciantes, transportadores, campesinos, estudiantes, amas de casa y demás sectores sociales del municipio que nombraron sus representantes para constituir una "junta pro-defensa de Guatapé". Esta junta se encargó de la orientación del movimiento y de la representación de los pobladores ante las autoridades y funcionarios de las Empresas Públicas.

En el primer día de paro se registraron algunos enfrentamientos entre los pobladores y la fuerza pública. Desde las horas de la mañana el alcalde decretó la ley seca y la población fué militarizada; a tal efecto se trajeron refuerzos policiales de Rionegro ya que se consideraba insuficiente el pie de fuerza existente en Guatapé. Por la tarde los pobladores levantaron barricadas en las calles y bloquearon las vías de entrada al municipio; se presentaron varias pedreas y varios periodistas de Medellín fueron retenidos durante algunas horas por los pobladores. En la noche, sin embargo, la calma retornó a la localidad.



Un hecho sobresaliente en este paro cívico fué el apoyo que dieron los pobladores de El Peñol y otros municipios del Oriente Antioqueño. Por primera vez en esta zona se desarrolló un movimiento de solidaridad entre pobladores de distintas localidades. Algunos habitantes de El Peñol, especialmente campesinos, participaron en las acciones de Guatapé. En Rionegro, por su parte, bloquearon la vía regional a fin de impedir el paso de vehículos hacia estos dos municipios.

Las conversaciones entre la "junta pro-defensa de Guatapé y las Empresas Públicas solo pudieron llevarse a cabo el segundo día de cese de actividades. Rápidamente se llegó a un acuerdo que posibilitó el levantamiento del paro cívico. Presionada por los acontecimientos, la empresa se comprometió de nuevo a dar solución a los diversos problemas que tenía pendientes con los pobladores: revisión de la política de negociación de tierras, pago de indemnizaciones, suspensión de juicios de expropiación, reubicación adecuada de las familias desalojadas por el embalse y creación de puestos de trabajo para las personas que quedaran sin empleo. Igualmente aceptó entregar en pocos días los estudios tendientes a la elaboración de un "contrato maestro" con Guatapé similar al que había firmado con el municipio de El Peñol (El Colombiano, 28/01/70:24).

Con la resolución del conflicto de Guatapé, las Empresas tuvieron tiempo de pasar a ocuparse de los problemas que tenían con los habitantes de El Peñol. Desde fines del año anterior la empresa había presentado una demanda de expropiación contra varios propietarios de parcelas que serían inundadas por la primera etapa del embalse y con los cuales no lograron un acuerdo directo. Para discidir esta situación se realizó en enero una prolongada reunión de concejales y dirigentes cívicos de el Peñol con el gerente de las Empresas Públicas y el obispo de Sonsón-Rionegro en la que se acordó la firma de un nuevo

"convenio" entre las partes en conflicto. Entre los puntos convenidos se destacaban la supresión de las demandas de expropiación instauradas, el desarrollo de negociaciones por la vía del arreglo directo, la realización de las obras de defensa de la cabecera no concluidas, la ejecución de un programa de emergencia para los desplazados por la primera etapa del embalse y la reorganización del proceso de negociación de tierras con el fin de evitar las injusticias que se estaban cometiendo (Texto del Convenio, 07/02/70).

Después de tantos compromisos, acuerdos, pactos y contratos incumplidos por las Empresas Públicas, la firma de este convenio no tranquilizó en absoluto a los habitantes de El Peñol. El hecho concreto era que las aguas del embalse seguían subiendo rápidamente, las parcelas se inundaban de un día para otro, las negociaciones no se aceleraban y los pagos de las tierras no se cumplían. Para protestar por esta situación los campesinos y pobladores decidieron movilizarse.

Así, el 5 de marzo de 1970 se dió comienzo a un paro cívico en El Peñol para protestar por el manejo que las Empresas Públicas de Medellín estaban dando al proceso de negociación de tierras. Al cese de actividades se sumaron todos los habitantes del municipio destacándose en especial los cosecheros o aparceros, los parceleros minifundistas y los jornaleros agrícolas que eran los más directamente perjudicados por la inundación de las principales tierras de cultivo. Se formó entonces una nueva "Junta prodefensa de El Peñol" con la participación esta vez de representantes de las Juntas de Acción Comunal, las Asociaciones de Usuarios Campesinos, el Sindicato Agrícola, la Asociación de Desempleados, la Cooperativa de El Peñol, el Concejo Municipal, la Parroquia y la Personería.

Como en los otros casos, el paro cívico de El Peñol significó el cese de todas las actividades de la población;

fueron cerrados todos los establecimientos comerciales y educativos y los pobladores realizaron mitines y marchas de protesta por las calles del municipio; algunas vías de acceso fueron bloqueadas para impedir el paso de vehículos de los contratistas de la Central. De esta forma se mantuvo la movilización durante 36 horas en medio de una fuerte militarización ordenada por las autoridades departamentales (El Colombiano, 06/03/70:1a).

El segundo día se realizaron algunas conversaciones de miembros de la junta pro-defensa con autoridades civiles y de policía en las que los pobladores aceptaron levantar el paro cívico e iniciar negociaciones directas con las Empresas Públicas. Como era fin de semana, la junta decidió suspender temporalmente el movimiento para permitir el acceso a los campesinos al mercado dominical. Anunció, sin embargo, que reanudaría el paro si la empresa no atendía inmediatamente sus demandas. Según los dirigentes, "como la situación no ha variado, entonces los paros seguirán" (El Colombiano, 7/03/70:22).

Pero los paros no se repitieron en El Peñol, a pesar de que las conversaciones con las Empresas Públicas tampoco se reiniciaron, ni los graves problemas de los cosecheros se resolvieron en modo alguno. El movimiento de campesinos y pobladores perdió fuerza y nuevamente tomaron la iniciativa los sectores que promovían la vía jurídica en el conflicto con la empresa estatal. El Concejo Municipal y la Parroquia volvieron a ser los protagonistas del proceso y otra vez se desarrolló un largo período de negociaciones entre los Municipios de El Peñol y Guatapé y las Empresas Públicas de Medellín.

#### 4.4. NUEVAS NEGOCIACIONES CON EMPRESAS PUBLICAS 1970-75

Después de haber construido la etapa inicial del Proyecto Nare y superado momentos de gran tensión a causa del cierre de compuertas, las preocupaciones de las Empresas Públicas se centraron en la puesta en marcha de la nueva obra. A pesar de haber insistido en la urgencia de proceder al represamiento del río Nare, la empresa se demoró todavía un año y medio en dar al servicio la primera unidad generadora. Debido a problemas en la recepción de algunos equipos, la Central de Guatapé sólo pudo ser inaugurada en julio de 1971 y puesta plenamente en operación en 1972.

Al mismo tiempo las Empresas Públicas fueron adelantando las gestiones que le permitieran continuar con su proyecto. Así, en febrero de 1971 presentaron "una solicitud de financiación por 40 millones de dólares ante el Grupo de Consulta de París para adelantar la construcción de la segunda etapa de la Central Hidroeléctrica del Nare". Este crédito fué concedido por la BIRF en el marco del acuerdo global con el Grupo de Consulta por el cual el país podía "concertar empréstitos por mas de 500 millones de dólares con diferentes entidades crediticias internacionales" (El Colombiano, 2/03,71:2). Con base en el préstamo correspondiente, las obras de la etapa final de la Central de Guatapé pudieron comenzar en enero de 1973.

Por otro lado, desde el punto de vista del movimiento cívico, el período se caracterizó por la continuación del proceso de negociaciones iniciado desde las fases anteriores. Sin embargo, los conflictos con las Empresas Públicas de Medellín no desaparecieron totalmente; durante esta etapa no faltaron situaciones de enfrentamiento directo entre los pobladores y la empresa. Las negociaciones fueron particularmente difíciles en Guatapé en razón de la arbitraria conducta de las Empresas en su relación con este municipio. Mientras en El Peñol aceptaron firmar grandes contratos con el Municipio y la Parroquia, en

Guatapé se negaron en forma sistemática a reconocer sus responsabilidades y compromisos.

En general las discusiones entre Empresas Públicas de Medellín y el Municipio de Guatapé durante este período giraron en torno a la reubicación del sector urbano que sería inundado en la segunda etapa del embalse y a la necesidad de firmar un Contrato Maestro que regulara las relaciones entre las dos entidades. Como resultado del primer paro cívico, Guatapé había logrado que las Empresas aceptaran la asesoría de Codesarrollo en el proceso de negociaciones. De inmediato la Corporación se ocupó de hacer una evaluación de los estudios preparados por la entidad estatal respecto de la relocalización de la cabecera municipal. En este sentido, en abril de 1970 entregó un informe en el que concluía que el mismo sitio donde estaba ubicada la zona urbana del municipio resultaba apropiado si se ejecutaban las obras de adecuación propuestas por una firma de ingenieros de Medellín; igualmente presentaba una serie de recomendaciones que servirían de base a un convenio entre el Municipio y las Empresas (Codesarrollo, 1972).

Estas conclusiones de Codesarrollo fueron aceptadas en su totalidad por las dos partes, con la condición de que en el proceso de negociaciones se definieran las respectivas responsabilidades. Tal requisito se cumplió en junio de ese año cuando fueron acordadas las bases del contrato que firmarían las dos entidades, entre las cuales se contaba la elaboración de un "Plan Piloto de Desarrollo Urbano para el Municipio de Guatapé" (Codesarrollo, 1982). Sin embargo, al mes siguiente las Empresa Comunicaron que desistían de los acuerdos logrados y que no estaban interesadas en ninguno de los estudios propuestos; argumentaban para esto que se habían equivocado en la toma de decisiones durante el proceso de negociaciones.

Ante esta actitud, los contactos de Guatapé con las Empresas Públicas se suspendieron durante varios meses. Así se mantuvo hasta que tuvo que intervenir la Gobernación de Antioquia en el conflicto para invitar a las partes a reiniciar conversaciones. Atendiendo a esta invitación oficial, en julio de 1971 volvieron a reunirse los representantes del municipio de Guatapé y las Empresas Públicas de Medellín. Sin embargo, esta nueva ronda de diálogos fracasó otra vez y las negociaciones quedaron congeladas durante un tiempo más.

La iniciativa para restablecer las discusiones la tomaron más tarde las propias Empresas Públicas; en enero de 1972 la Junta Directiva reiteró su ofrecimiento de ejecutar un programa de obras públicas en Guatapé. El Concejo insistió en su tesis de que tal proyecto no podía llevarse a cabo independientemente de un Plan Regulador para el Municipio. Las conversaciones continuaron en forma esporádica y, después de muchos contratiempos, las Empresas reconocieron la necesidad del Plan Regulador; así, en marzo de 1973 se firmó por fin un contrato tripartito por el cual se encargó a Codesarrollo la elaboración de un "Plan de desarrollo Urbano para el Municipio de Guatapé" financiado por las Empresas Públicas de Medellín (Contrato No.9/D.J.-4641/20, 24/10/73).

Este comportamiento de la empresa estatal en Guatapé contrastó visiblemente con sus ejecuciones en El Peñol durante este mismo período. Mientras en el primero dilató por más de tres años las negociaciones para llegar a aceptar simplemente la realización de un estudio, en este último municipio puso en marcha un buen número de programas de desarrollo económico y social con costos relativamente importantes. En efecto, en cumplimiento de obligaciones contraídas en el Contrato Maestro, entre 1970 y 1972 las Empresas emprendieron los programas de trabajo social, saneamiento ambiental, forestal y agropecuario, de capacitación y de modernización de la administración

municipal, todos los cuales fueron articulados a un "Plan Decenal de Desarrollo" de El Peñol.

Una atención similar dedicaron las Empresas Públicas al problema de los diseños urbanísticos para la nueva cabecera de este municipio. También en cumplimiento de compromisos señalados explícitamente en el Contrato Maestro, dieron cierta participación a los pobladores en la discusión del proyecto definitivo. Sin embargo, los habitantes decidieron intervenir activamente y para tener mas elementos de juicio hicieron nuevamente varios viajes a la población de Guatavita. Con base en ellos formularon algunas sugerencias que permitieron que el Concejo Municipal seleccionara en 1971 el proyecto para la construcción del Nuevo Peñol.

Esta conducta de las Empresas Públicas relativamente favorable a El Peñol no cubrió, sin embargo, todos los aspectos de su problemática ni duró mucho tiempo. Otras fuentes de conflicto, tanto o mas trascendentales que las anteriores, fueron descuidadas por la empresa estatal y con su vigencia se mantuvo el enfrentamiento. En especial los problemas de negociación de tierras nunca fueron resueltos; por el contrario tendieron a agudizarse en esta fase del movimiento.

En efecto, a fines de 1972 muchos de los campesinos de El Peñol llevaban mas de 30 meses sin que se les pagara sus parcelas ni se les reconociera indemnizaciones. Ante esta situación el concejo Municipal se vió precisado a urgir a la empresa para procedieran al pago de las propiedades inidadas en la primera etapa del embalse. Pero el proceso de negociaciones poco se modificó en los meses siguientes y el problema de tierras continuó siendo una importante fuente de conflictos con los campesinos.

Igualmente conflictivas fueron las relaciones entre la Parroquia de El Peñol y las Empresas Públicas en esta fase. En desarrollo de las negociaciones acordadas en el contrato firmado por las dos entidades surgieron importantes diferencias en lo referente a la construcción del cementerio, la casa cural y el templo. El hecho motivó la solidaridad de los sacerdotes de las parroquias vecinas que, en octubre de 1973, conjuntamente notificaron la suspensión de conversaciones hasta tanto no se modificara la actitud de la empresa estatal. En su comunicado los sacerdotes de El Peñol, Guatapé, San Rafael y Marinilla respaldaron también a la Parroquia de Guatapé en su solicitud de que las Empresas firmaran con ella convenios bilaterales semejantes a los celebrados con El Peñol.

El mantenimiento de estos conflictos fué nuevamente haciendo aparecer signos de descontento entre los pobladores de los dos municipios afectados por la política de las Empresas Públicas. Tales sentimientos se manifestaron violentamente en los últimos meses de este período cuando un grupo que se identificó como las "Fuerzas Armadas de Guatapé" FAG perpetró varios atentados contra instalaciones de la empresa en la zona de trabajos de la central. En agosto de 1974 una bomba causó averías de consideración a un vehículo de las Empresas (El Correo, 27/08/74:3) y en septiembre una nueva explosión destruyó parte del edificio de la planta telefónica de la Central dejando incomunicados a los municipios cercanos por varios meses. Aunque los daños materiales fueron cuantiosos, ninguno de los atentados causó víctimas (El Correo, 24/09/74:1a).

A pesar de la violencia de estas acciones la situación del conflicto no varió sustancialmente; las negociaciones entre la empresa y los representantes de los dos municipios mantuvieron la dinámica adquirida en la última fase. Sin embargo, lo que no lograron los atentados lo produjo al poco tiempo la noticia de la iniciación de trabajos en el Nuevo Peñol. A fines de 1974 las



Empresas Públicas anunciaron que en el mes de enero siguiente comenzarían la explanación del terreno en el que se construiría la nueva cabecera municipal (El Correo, 06/11/74:3). Tal anuncio motivó gran inquietud entre los pobladores porque otra vez se planteaba el problema de su desalojo y traslado masivo. La tensión social en la zona empezó a elevarse de nuevo y el movimiento pasó a otra fase en la que se vió amenazada la supervivencia misma del municipio de El Peñol.

#### 4.5. AGUDIZACION DEL CONFLICTO EN EL PEÑOL 1975-78

Los trabajos de construcción del Nuevo Peñol en el sitio Guamito-Horizontes comenzaron oficialmente el 25 de enero de 1975. Ese día se realizaron las primeras explanaciones del terreno, a las cuales se les dió un gran despliegue publicitario. En su propaganda las Empresas Públicas aseguraban que "el Nuevo Peñol sería un centro piloto del turismo" cuyas ventajas, "puede decirse con toda seguridad, no se presentan en ningún otro municipio colombiano (El Correo, 27/01/75:3).

El inicio de los trabajos en la nueva cabecera no hizo mas que agravar los problemas que ya se vivían en el viejo pueblo condenado a ser cubierto por las aguas del segundo embalse. Puesto que solo quedaban pocos años antes de la inundación, prácticamente todas las obras y programas en beneficio de la comunidad se paralizaron. A pesar de que existían grandes necesidades en materia de acueducto, alcantarillado, pavimentación de calles y construcción de centros escolares, la administración municipal solamente se dedicó a acometer algunas obras de escasa importancia. Los pobladores en general quedaron a la espera de nuevas definiciones sobre la suerte que correrían. La expectativa por el futuro inmediato fué el sentimiento dominante durante algunos meses (El Colombiano, 27/05/75:20).

Una situación igualmente angustiosa vivían los pobladores de Guatapé ante el desarrollo de las obras de la segunda etapa. Allí llevaban ya más de seis años tratando por todos los medios que las Empresas Públicas de Medellín firmaran con el Municipio y la Parroquia unos contratos similares a los acordados con El Peñol desde 1969. Pero la empresa continuaba dilatando las negociaciones acudiendo a toda clase de pretextos.

Ante los abusos y atropellos cometidos por las Empresas Públicas en el proceso de adquisición de tierras, los pobladores y campesinos de Guatapé continuaron sus denuncias y manifestaciones de protesta. El hecho más significativo se presentó en abril de 1975: en desarrollo de los trabajos de la central, empleados de una compañía contratista destruyeron sin previo aviso y sin indemnización alguna, los cultivos de un aparcerero de la región; ante la protesta del campesino, el Alcalde lo conminó a pagar una multa en el caso de oponerse nuevamente a la entrada de los obreros de las Empresas a su parcela. La arbitrariedad del procedimiento exaltó de inmediato los ánimos de los habitantes de Guatapé que denunciaron la posición del Alcalde en favor de los intereses de las Empresas Públicas y amenazaron con realizar un nuevo paro cívico si no se corregía esta situación.

En el municipio de El Peñol el conflicto también se agudizó cuando las Empresas llegaron a plantear la posibilidad de abandonar el proyecto de construir el Nuevo Peñol. En una reunión celebrada el 25 de septiembre de 1975 en las oficinas de Medellín, el gerente general propuso a una comisión de campesinos y pobladores desistir de la idea de construir la nueva cabecera municipal a cambio de una indemnización mayor a cada uno de los habitantes del viejo pueblo (Entrevista con campesinos de El Peñol, 08/84). La situación se tornó entonces verdaderamente desesperada para los pobladores de este municipio.

El enfrentamiento alcanzo su máxima intensidad a fines de 1976, cuando las Empresa comenzaron a destruir las viviendas adquiridas tanto en la zona urbana como en las áreas rurales que serían inundadas en la segunda etapa del embalse. Hasta ese momento habían permitido que muchos de los propietarios a quienes compraron sus casas continuaran habitándolas hasta que encontraran una nueva solución de vivienda. Por esta razón la cabecera municipal había logrado mantenerse relativamente intacta sin que se presentara un déficit de vivienda de gran magnitud. Pero desde el mes de noviembre las Empresas cambiaron su política al respecto: empezaron a exigir la entrega de las propiedades negociadas para derribarlas y a ofrecer incentivos económicos a las familias que vendieron sus viviendas ya demolidas. Se inició así la destrucción sistemática del viejo pueblo.

En general, con la demolición paulatina de la zona urbana se deterioraron sesiblemente las condiciones de vida de los pobladores. En El Peñol se empezó a vivir una gran emergencia social en la que hacían falta viviendas, los servicios públicos funcionaban a medias y escaseaban los bienes de consumo básico. La cabecera municipal semidestruida daba la apariencia de haber sido bombardeada y sus habitantes sufrían la angustia de vivir en medio de sus ruinas sin seguridad alguna de que tendrían un nuevo pueblo. La incertidumbre y zozobra permanentes eran los sentimientos comunes entre las gentes. Sin duda fué este el período mas doloroso y traumático que vivieron los peñolitas durante todo el proceso.

Frente a la rudeza del desalojo los habitantes de El Peñol reaccionaron también violentamente. Los choque entre pobladores y empleados de la empresa encargados de las demoliciones se hicieron constantes; muchos de los incidentes fueron verdaderas batallas campales que dejaron saldos de varios heridos. La

tensión era permanente y se vivía un ambiente de beligerancia que a cada rato generaba nuevos enfrentamientos.

Para manejar la situación las autoridades departamentales decidieron militarizar la población. Desde Medellín y algunas localidades vecinas fueron enviados numerosos efectivos policiales que reforzaron a los ya acantonados en este municipio. El patrullaje militar se estableció regularmente y toda la zona quedó bajo el control de la policía. Por primera vez los habitantes de El Peñol conocieron los vehículos anti-motines y las fuerzas especiales de la institución armada. Durante varios meses los peñolitas vivieron algo muy semejante a una ocupación militar.

Como una forma de contrarrestar el acoso y las medidas de presión ejercidas por las Empresas Públicas y las autoridades departamentales, los pobladores de El Peñol iniciaron por su parte una amplia e intensa campaña de denuncia de los atropellos de que venían siendo víctimas. En abril de 1977, los dirigentes cívicos y religiosos propusieron la constitución de un "Tribunal de Arbitramento" que resolviera las divergencias que se presentaban entre la comunidad y la empresa por las medidas que estaba adoptando en el desalojo del viejo pueblo (El Colombiano, 14/04/77:1a). Continuando con su campaña, los pobladores convocaron a un "Foro de concejales del Oriente Antioqueño" en el que se aprobó denunciar a las Empresas Públicas de Medellín ante el Comité Internacional de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas por las "flagrantes y permanentes violaciones de los derechos humanos de la comunidad de la zona" (Declaración del Foro de Concejales del Oriente). Con el mismo propósito, varios días después, se envió una carta al Procurador General de la Nación solicitando la designación de investigadores especiales que calificaran las conductas ilegales de la empresa. Por otra parte, en un "memorando" enviado al Gobernador de Antioquia las diferentes organizaciones cívicas de El Peñol consignaron los

puntos que consideraban importante para tratar en un diálogo directo con la administración departamental (Texto del Memorando, 04/77).

A pesar de la fuerte reacción de los pobladores de El Peñol, las Empresas Públicas no cedieron en su empeño de acelerar el desalojo de la zona que sería inundada. Mientras las protestas arreciaban, ellas continuaron desarrollando sus planes sin interrupción alguna; ese mismo mes de Abril abrieron la licitación para la construcción de las primeras 300 viviendas en la nueva cabecera municipal y de una vez advirtieron que ésta debería estar terminada antes de un año (El Colombiano, 06/04/77:1a).

Lo imperativo de esta decisión era justificado por las Empresas Públicas por la urgencia de poner en funcionamiento los generadores de la segunda etapa. Sin embargo la forma en que comenzaron a construir el Nuevo Peñol no correspondía en modo alguno a la prisa que pretendían tener. Apenas en mayo se levantaron las primeras viviendas y se inició la instalación de redes de servicios públicos básicos. En definitiva, cuando apenas faltaban seis meses para el traslado definitivo, de las casi 700 viviendas que prometía, la empresa estatal sólo había edificado 19 y ni siquiera estaban en condiciones de ser habitadas.

Otro hecho que se denunciaba por parte de los pobladores de El Peñol era la flagrante arbitrariedad de las actuaciones de las Empresas. De hecho éstas se pusieron "al margen de la ley", violando claras normas constitucionales, al desconocer las atribuciones y facultades municipales en materia de ordenamiento urbanístico. A ello se agregaba la falta de información precisa y oportuna sobre los planes de traslado, lo cual mantenía a la población en la mas completa incertidumbre. El abuso llegó al extremo de que la empresa estatal decidiera por su propia cuenta

"quienes pueden y quienes no pueden vivir en el nuevo pueblo" (El Colombiano, 10/06/77:9).

Para tratar de encontrar alguna solución a los graves problemas que enfrentaba, la comunidad de El Peñol insistió de nuevo en buscar el diálogo directo con las Empresas Públicas. En este sentido llegaron incluso a plantear la posibilidad de reconsiderar algunos de los puntos pactados desde 1969 que eran considerados por la empresa como "exageradas pretensiones" de los pobladores. A tal fin se formó un "Comité de diálogo" en el que participaban destacados dirigentes políticos antioqueños que buscó por todos los medios que se reanudaran las negociaciones. En idéntica actitud estaban los pobladores de Guatapé durante los últimos meses de 1977. En agosto el Concejo Municipal nombró una nueva "Junta negociadora" que viajó a Medellín a presentar un "memorando" de solicitudes. Sin embargo, todas las "comisiones" encontraron la misma rotunda negativa de las Empresas Públicas a entablar conversaciones.

Esta obstinada oposición al diálogo y el acelerado deterioro de las condiciones de vida de los pobladores fueron conduciendo rápidamente a una situación en la que el conflicto podía asumir otra vez formas violentas de un momento a otro. Así lo avirtieron varios funcionarios y personalidades de la región quienes observaban "síntomas que permiten prever su agudización debido al comportamiento de las Empresas Públicas de Medellín, ya que éstas no han dejado de emplear las vías de hecho contra la población, respaldados al parecer por otros organismos del gobierno" (El Colombiano, 10/06/77:9). Y efectivamente, apenas se iniciaba el año 1978 cuando estalló una violenta reacción de los pobladores contra el acoso a que venían siendo sometidos por parte de la empresa estatal.

## 5.6. NUEVOS PAROS CIVICOS EN GUATAPE Y EL PEÑOL 1978

La chispa que desató la súbita e impetuosa movilización de los pobladores y campesinos, fué la destrucción de uno de los establecimientos educativos del área urbana de Guatapé. En desarrollo de su programa de desalojo parcial de la cabecera de este municipio, y dada la inminencia de la segunda inundación, el 4 de enero de 1978 un grupo de empleados de las Empresas Públicas, autorizados por el Alcalde, iniciaron el traslado y demolición de la escuela de niñas de la localidad. Esta acción fué detectada por los pobladores que se reunieron en la plaza principal y se dirigieron enseguida a la escuela para impedir que continuara la labor de demolición. A las 8 de la noche lograron hacer retirar a los trabajadores de las Empresas a pesar de la protección policial con la que contaban (El Colombiano, 07/01/78:10B).

Todavía exhaltados por la acción de las Empresas y el Alcalde, los habitantes continuaron su protesta encendiendo fogatas callejeras durante las primeras horas de la noche. Con el ánimo de controlar la situación que se presentaba, el Alcalde solicitó refuerzos de policía a algunas poblaciones vecinas; pero esto enardeció aún mas a los pobladores que continuaron con mayor furor realizando mítines por las calles del municipio. La tensión llegó a tal punto que las autoridades se vieron obligadas a "decretar la ley seca y el toque de queda desde la una hasta las seis de la mañana" (El Colombiano, 06/01/78:1a). Esta orden fué comunicada por los altoparlantes de la Alcaldía y, ante las amenazas policiales, los pobladores se refugiaron en sus residencias ya casi a la madrugada.

Una de las primera medidas tomadas por los guatapenses fué la designación de una "Junta Pro-defensa del Pueblo" encargada de la negociación con las Empresas Públicas; esta junta estaba integrada por el cura párroco, dos concejales, el secretario del Concejo, el personero municipal, un estudiante y un comerciante.

Su tarea inmediata era la de "impedir que se ejecutara el traslado de la escuela de niñas puesto que se consideraba esta estructura como la última trinchera de los pobladores en el largo litigio con las Empresas Públicas de Medellín" (El Colombiano, 07/01/78:10B). Con tal fin, la Junta Pro-defensa decretó un paro cívico total en Guatapé desde la misma noche del miércoles 4 de enero.

En cumplimiento de esta orden la población amaneció al día siguiente en el mas completo cese de actividades; ninguno de los establecimientos públicos o comerciales abrió sus puertas como medio de presión a las autoridades para que dieran solución a los problemas de la comunidad local. Durante las horas de la mañana los miembros de la Junta Cívica estuvieron reunidos con el Alcalde municipal para exponerle los criterios y objetivos de su movimiento. En la tarde se realizó una asamblea en la que los pobladores continuaron desarrollando su organización; con el objeto de apoyar y asesorar a la junta principal se nombraron varias comisiones: de finanzas, de coordinación, de divulgación y prensa, etc.; allí se acordó también exigir que las conversaciones con las Empresas Públicas se realizaran en una ciudad diferente a la capital del Departamento por considerar que ésta no era un lugar neutro para el conflicto (El Colombiano, 06/01/78:10A).

Entretanto mas de un centenar de policias fueron enviados desde Medellín y otro municipio vecinos con el fin de "controlar el orden público en Guatapé". Apoyados en esta fuerza, las máquinas y trabajadores de la empresa culminaron su labor de demolición de la escuela de niñas sin que se presentaran nuevos enfrentamientos con los pobladores. Por su parte, éstos reafirmaron su decisión de continuar con la parálisis total de actividades hasta tanto no se llegara a un acuerdo con las Empresa Públicas sobre la serie de exigencias que se venían planteando (El Tiempo, 07/01/78:3A).



El viernes 6 de enero el paro cívico siguió cumpliéndose con todo rigor a pesar de ser día festivo; la población se mantuvo en tensa calma a la espera de que las Empresas y las autoridades departamentales aceptaran entrar en negociaciones. Para respaldar esta petición se realizó en la tarde una nutrida y beligerante manifestación en la plaza principal sin que se presentaran desórdenes o encuentros con la policía. La Junta Pro-defensa del Pueblo anunció que el cese de actividades se haría efectivo hasta las doce de la noche y se mantendría con paros escalonados hasta lograr los objetivos propuestos. En su comunicado la junta denunciaba además la falta de solidaridad con el movimiento por parte de los "tradicionales gamonales del pueblo que no aparecen cuando se les necesita sino en tiempos de elecciones" (Boletín de la Junta Pro-defensa, 06/01/78).

El cese de actividades prosiguió el día sábado sin ningún incidente destacado o cambio de actitud de los antagonistas. Pero después de tres días de paro cívico total los alimentos empezaron a escasear en Guatapé; debido al cierre del comercio los habitantes tenían grandes dificultades para abastecerse. Esta situación suscitó de inmediato la solidaridad de los municipios vecinos de donde "se enviaron grandes mercados para auxiliar a los pobladores de Guatapé" (El Tiempo, 11/01/78"12A). En El Peñol se discutió incluso la posibilidad de realizar un paro cívico de solidaridad con los guatapenses.

Estos por su parte, exasperados por la conducta de la empresa estatal que rechazaba sistemáticamente las propuestas de entablar conversaciones, se vieron obligados a recurrir a medidas de presión más radicales. Aprovechando que el día domingo se presenta el mayor tráfico en la zona, procedieron a cerrar las entradas del pueblo e impedir el paso de vehículos hacia otros municipios. Pronto llegó la fuerza pública a levantar el bloqueo y dispersar a los manifestantes, pero fueron recibidos con una

violenta pedrea; los agentes de policía respondieron con disparos al aire lo cual enardeció aún más a los pobladores que los enfrentaron con gran temeridad. La lucha se generalizó luego a toda la zona urbana y se mantuvo con igual violencia durante varias horas. La acción de los manifestantes fue tan impetuosa que incluso lograron apedrear el cuartel de la policía, un hecho que los funcionarios estatales calificaron de "asonada".

La reacción de la fuerza pública fue igualmente enérgica. Durante la noche recuperaron el control de la población e iniciaron un operativo de allanamientos a residencias en busca de los líderes del movimiento. En total fueron detenidas 16 personas, incluido el personero municipal, que también integraba la junta cívica. Las autoridades decretaron la ley seca y militarizaron el municipio de Guatapé (Alternativa, 23/01/78).

Pero la represión no logró detener el movimiento de protesta; por el contrario, éste prosiguió con mayor fuerza al recibir el respaldo solidario de otros municipios de la subregión. Así el lunes 9 de enero El Peñol se sumó al movimiento realizando un "paro cívico de 24 hora" convocado por el Sindicato Agrícola, las Acciones Comunes, el Comité de Comerciantes y otras organizaciones de pobladores. El cese de actividades se desarrolló pacíficamente bajo la dirección de una "Junta Coordinadora de Solidaridad con Guatapé". Hasta el propio Concejo Municipal de El Peñol se pronunció públicamente para "apoyar la justa causa de los habitantes de Guatapé" y en comunicado pidió "la solidaridad de los otros municipios del Oriente para lograr los objetivos de los habitantes del mencionado municipio" (El Colombiano, 09/01/78:9B).

Ante el agravamiento de la situación de orden público las autoridades departamentales y los funcionarios de la empresa se vieron obligados a ceder en su intransigente posición de no negociar mientras continuara el cese de actividades. El

Gobernador de Antioquia convocó a una reunión de las partes interesadas para discutir la problemática que se presentaba. Pero el diálogo no logró tampoco reducir la tensión en la zona. La crítica situación se agudizó aún más a raíz de los atentados dinamiteros perpetrados al amanecer del día siguiente contra dos torres de transmisión de energía cercanas a la central hidroeléctrica. Por otro lado los dirigentes del movimiento cívico rompieron las negociaciones al ver que la única propuesta de las autoridades era hacer simplemente una revisión de documentos anteriores.

Ante la definitiva ruptura de las conversaciones entre el gobierno y los pobladores intervino de nuevo el obispo de la diócesis Sonsón-Rionegro para mediar en el conflicto. Ante la solicitud de diálogo formulada por el prelado, los pobladores propiciaron una salida al punto muerto en el que se hallaba el conflicto. El miércoles 11 de enero, después de una semana de cese total de actividades decidieron levantar temporalmente el paro con el objeto de facilitar un entendimiento con las autoridades. Como condiciones para hacer efectiva esta decisión exigieron la libertad inmediata de los detenidos, la derogatoria de las medidas represivas y la pronta realización de una reunión entre las partes. Según advertían, el paro se reanudaría al día siguiente en caso de que no se llegara a un acuerdo en la reunión que proponían (El Colombiano, 12/01/78:8).

El gobierno departamental acogió favorablemente esta iniciativa y enseguida dió orden para que se dejara libres a las personas retenidas por su participación en el movimiento. La reunión tuvo lugar en las horas de la tarde y como salida inmediata se convino la conformación de un comité especial en el que representantes de las dos partes se encargaran de revisar los puntos pendientes de arreglo. A partir de este acuerdo disminuyó en gran medida la tensión en Guatapé; la situación tendió a normalizarse. El Alcalde cuestionado fué trasladado a otro

municipio y los pobladores reanudaron poco a poco sus actividades.

Pero, en contraste con la abierta actitud de los pobladores, la posición de la autoridades departamentales y de las Empresas Públicas de Medellín siguieron siendo igualmente intransigentes. De hecho éstas últimas, principal causante del conflicto, no intervinieron en las conversaciones que condujeron al arreglo y se negaron sistemáticamente a participar en los diálogos que siguieron. Su única preocupación era el rápido desalojo de las cabeceras urbanas que serían inundadas por la segunda etapa del embalse. Consecuentemente, desde ese mismo mes de enero de 1978, la empresa estatal inició el traslado de la población de El Peñol hacia la nueva cabecera a pesar de que todavía faltaban muchas obras y servicios que la hicieran habitable.

Siguiendo con esta política, la demolición del viejo pueblo se aceleró dramáticamente y el problema de la vivienda llegó a su climax; cerca de 300 familias se vieron de un momento a otro sin ninguna posibilidad de obtener una vivienda (El Colombiano, 12/01/78:8A). Durante los primeros meses de 1978 el conflicto en El Peñol llegó a su punto culminante: de un lado las Empresas Públicas apremiaban el desalojo, acudiendo incluso a las vías de hecho; y del otro, los pobladores se resistían a desocupar hasta tanto no tuvieran las garantías y las condiciones necesarias para habitar la nueva cabecera.

En medio de estas circunstancias las Empresas Públicas lograron firmar con la Parroquia de El Peñol un acuerdo que puso fin al prolongado litigio entre las dos entidades. Según este acuerdo, "todas las propiedades parroquiales pasan a las Empresas Públicas" y, por lo tanto, entre las partes "no queda pendiente asunto alguno en forma directa" (El Colombiano, 07/02/78:2A). De esta manera la empresa conseguía superar uno de los principales obstáculos para el avance de su programa de desalojo del Viejo

Peñol. La demolición de las propiedades de la Iglesia prácticamente le daba el golpe final al pueblo y reducía sesiblemente las fuerzas que se oponían al traslado en las condiciones impuestas por el ente oficial. Desde ese momento la suerte del antiguo poblado quedó echada

Sin embargo, la resistencia de los pobladores frente al desalojo se mantuvo por unas semanas mas. Las protestas se fueron haciendo cada vez frecuentes a medida que zvanzaba el proceso de desalojo y se acercaba la fecha de la segunda inundación. A finales de marzo los estudiantes del Liceo de Bachillerato realizaron un paro de actividades de una semana para rechazar la decisión detraslado hacia las nuevas instalaciones de la unidad educativa que aún no estaba plenamente terminada y presentaba además grandes deficiencias. A ellos se sumó luego toda la población de El Peñol para protestar por la precipitud con que se hacía el traslado de otro establecimiento educativo sin consultar con los afectados. Un ambiente de fuerte tensión se vivió en los primeros días de abril, duerante los cuales los padres de familia estuvieron "exteriorizando su inconformidad por el repentino traslado del mobiliario de la escuela de niños a la nueva cabecera, por cuanto no está concluido el edificio y los educando no disponen de grantías suficientes para lograr su trensporte diario a las instalacionesen donde deberán proseguir las clases" (El Colombiano, 09/04/78:7B).

Prácticamente todos los grupos sociales de El Peñol participaron en este espontáneo movimiento de resistencia que se generalizó en las últimas semanas previas al desalojo definitivo. Incluso los comerciantes entraron a minifestarse al sentir lesionados sus intereses por los procedimientos de las Empresas Públicas; ya terminando abril numerosos propietarios de negocios en el Viejo Peñol exigieron a la empresa una indemnización por el lucro cesante y los perjuicios causados por la inminente evacuación. Los sectores mas beligerantes en esos

momentos fueron los estudiantes y campesinos de la zona. Por esos días realizaron en la localidad un "encuentro campesino popular" en el que propusieron "organizar a la población para cuajar un movimiento que obligue a las Empresas Públicas de Medellín al cumplimiento de los compromisos adquiridos" (El Proletario, 04/78).

Pero las condiciones en que vivían hicieron imposible la organización de un movimiento mas fuerte y mejor estructurado. Las protestas de los diferentes grupos sociales se desarrollaron aisladamente motivadas por sus problemas particulares mas inmediatos. La inminencia de la inundación y la conciencia de que este proceso ya no se podía detener desalentaron a gran parte de la población. La situación se hizo cada vez mas desesperada obligando a que al final sólo se pudieran buscar individualmente las formas de salir lo mejor librado posible. Así llegó el momento en que las Empresas Públicas iniciaron el llenado de la segunda etapa del embalse y los pobladores tuvieron que desalojar definitivamente el Viejo Peñol.

Una falla técnica imprevista obligó a la empresa estatal a demorar por unos días la operación de cierre de compuertas originalmente fijada para el 14 de mayo. Pero el problema fué rápidamente superado y el 23 de mayo de 1978 se realizó finalmente el cierre del dique del vertedero y el taponamiento del túnel de descarga para dar comienzo al represamiento de las aguas del segundo embalse. Concluyó de esta forma la que fué calificada como "la mayor obra de ingeniería civil de Antioquia en toda su historia" (El Colombiano, 25/05/78:15A).

Los pobladores se negaron hasta el último momento a abandonar el viejo pueblo, símbolo de sus tradiciones y de su lucha. Algunas familias permanecieron en el poblado semi-destruido aún después de que se inició el represamiento; sólo salieron cuando las aguas del embalse empezaron a cubrir

definitivamente la zona urbana y resultó materialmente imposible permanecer allí (El Colombiano, 26/05/78:1a).

De esta manera terminó el periodo mas conflictivo del movimiento cívico desarrollado por los pobladores y campesinos de El Peñol y Guatapé contra las Empresas Públicas de Medellín. Pero, a pesar de que en esta coyuntura la tensión llegó a su punto mas alto, ella fué apenas otra fase de una prolongada confrontación que aún no concluía. Después de haberse instalado precariamente en la nueva cabecera, los peñolitas continuaron su lucha por conservarse como una comunidad integrada y levantar su nuevo pueblo en el lugar que tan duramente habían ganado a la Empresa Públicas. Se inició entonces lo que puede considerarse com la última etapa del movimiento cívico generado por el Proyecto Nare.

#### 4.7. REFLUJO DEL MOVIMIENTO CIVICO 1978-82

El traslado de la nueva cabecera municipal no alivió en modo alguno la difícil situación que padecían desde tiempo atrás los pobladores de El Peñol; por el contrario, implicó que surgieran problemas adicionales que debieron afrontar sin estar preparados para ello. Su hábitat tradicional y sus condiciones de vida cambiaron radicalmente produciendo fuertes sentimientos de desarraigo y falta de identidad con un medio abruptamente transformado. Los habitantes del Nuevo Peñol se vieron así forzados a iniciar un difícil proceso de reacomodo a una situación completamente extraña.

En nada propiciaba esta necesaria readaptación la nueva sede urbana del municipio. Dada la precipitud con que se había efectuado la mudanza, todavía no estaban completamente terminadas las obras ni funcionando plenamente los servicios públicos básicos, hacían falta muchas viviendas y algunas de las

principales instalaciones y equipamientos urbanos. Esto hizo que durante las primeras semanas se viviese un ambiente de emergencia social en el Nuevo Peñol, como si la permanencia allí fuera apenas provisional y transitoria. Pero la realidad era que éste iba a ser el asentamiento definitivo de los pobladores desplazados y estos decidieron enfrentar el reto de construir su comunidad y su pueblo. La lucha continuó entonces para exigir a las Empresas Públicas el cumplimiento de todos sus compromisos adquiridos respecto de la construcción y dotación de la nueva zona urbana que en gran parte estaban consignados en el Contrato Maestro y otros convenios debidamente firmados y legalizados.

Puesto que aún faltaba tanto por construir, las preocupaciones de los pobladores se centraron en exigir la terminación de las obras ya en marcha y el cumplimiento con las que aún no se iniciaban. Estas exigencias hicieron que pronto se reanudaran los enfrentamientos entre los habitantes del Nuevo Peñol y las Empresas Públicas de Medellín con características similares a los ocurridos en las anteriores etapas.

En general, durante este período todos los sectores sociales de El Peñol y Guatapé afrontaban graves dificultades y por ello reclamaban una u otra obra indispensable para satisfacer sus necesidades básicas. Los artesanos pedían locales para trabajar, los pobladores el arreglo y alumbrado de calles, los estudiantes la dotación de la unidad educativa, los campesinos la reconstrucción de los caminos rurales, etc.. En las veredas se exigía la reposición de las escuelas y puestos de salud perdidos en la inundación, y en la cabecera la terminación y dotación del equipamiento urbano mas necesario como los locales de la administración municipal, la cárcel y las canchas deportivas entre otras. Una lista elaborada por el Concejo de El Peñol a fines de 1978 enumeraba todas las obras que adeudaban las empresas al municipio desde 1974 (Actas sesiones del Concejo, 04/10/78).



Sin embargo, en el reclamo de las obras que aún faltaban, la presión de los pobladores y campesinos fue bastante débil. En general, el movimiento entró en una etapa de reflujo desde el traumático desalojo del viejo pueblo. Presionados por las difíciles condiciones de vida a que estaban sometidos, los habitantes de El Peñol perdieron la iniciativa y las acciones colectivas de protesta se hicieron cada vez más esporádicas. "Con el traslado de la cabecera y la diseminación de la población en el Nuevo Peñol, surge un descontrol en las organizaciones que las va atomizando hasta desaparecer la mayoría de ellas: sindicato agrícola, usuarios campesinos, consejo estudiantil, asociación de comerciantes, etc." (Rivera, 1986:2). En estas circunstancias al Cabildo Municipal se le facilitaba tener una posición conciliadora y establecer cordiales relaciones con las Empresas Públicas.

Sin embargo, no todos los sectores sociales se desmovilizaron por completo; algunos núcleos de campesinos y estudiantes mantuvieron la agitación permanente de la problemática que afectaba al municipio. Con tal fin plantearon la necesidad de buscar nuevas vías de expresión de las necesidades y aspiraciones de los pobladores y decidieron intervenir en el debate electoral a nivel local. Así, en medio de la confusión reinante desde el proceso de traslado, un pequeño grupo socialista estableció una alianza con sectores del liberalismo y el progresismo conservador para participar en las elecciones municipales; esta alianza electoral obtuvo votación suficiente para llevar a un representante al Concejo, pero, en general, la experiencia fue bastante negativa: el concejal elegido, de filiación liberal, "adelantó su gestión a título personal sin consultar para nada a la organización, para terminar siendo adjudicatario de una casa de las Empresa Públicas y marginándose del movimiento" (Rivera, 1986:2).

En una fase semejante de receso entró la movilización de los pobladores de Guatapé después de haber realizado el violento y prolongado paro cívico de los primeros meses de 1978. Con la segunda etapa del embalse se perdió una cuarta parte de la cabecera urbana y cerca de un centenar de familias fueron trasladadas a una nueva urbanización construida por las Empresas Públicas en la parte alta del municipio. Como en El Peñol, la lucha de los habitantes se centró desde entonces en exigir que la empresa entregara la gran cantidad de obras con las que debía sustituir las pérdidas causadas e indemnizar a la población. En este caso, sin embargo, los pobladores tenían la desventaja de no contar con documentos legales similares al Contrato Maestro que habían logrado en El Peñol; aprovechando esta circunstancia las Empresas Públicas dilataron aún más el cumplimiento de sus obligaciones con Guatapé y por ello sólo muy pocos trabajos fueron ejecutados en esta localidad.

En medio de estas circunstancias, en 1980 estalló nuevamente un paro cívico en Guatapé. Aunque también fue un paro contra las Empresas Públicas, en esta oportunidad el problema que lo motivó no estaba directamente relacionado con los efectos negativos generados por la central hidroeléctrica; la causa inmediata de este conflicto fue la inesperada alza de tarifas en el servicio de energía eléctrica que se prestaba en la localidad.

Desde la década del sesenta, las Empresas Públicas habían venido vendiendo en bloque la energía que distribuían los municipios de la zona de la represa; las tarifas para los usuarios eran fijadas entonces por las administraciones municipales que además facturaban y cobraban las cuentas de este servicio. Sin embargo, en octubre de 1979, el Municipio de Guatapé y las Empresas Públicas celebraron un contrato por el que éstas se hicieron directamente cargo del suministro y distribución domiciliaria de la energía eléctrica en la localidad. Lo primero que hizo la empresa de Medellín fue

establecer un nuevo sistema de tarifas a fin de nivelarlas con las de otros municipios. Esta medida repercutió directamente en las cuentas de cobro que aumentaron en una magnitud que los usuarios consideraron inaceptable. Tal situación motivo de inmediato la protesta de la población, especialmente de los comerciantes que eran los mas afectados por las nuevas tarifas.

Ante la protesta de los usuarios, las Empresas actuaron con la misma displicencia con que lo habían hecho para atender otras reclamaciones. Y, al igual que en ocasiones anteriores, los pobladores no tuvieron otra alternativa que recurrir a medidas de presión directas. Así, el 8 de abril de 1980, un grupo de comerciantes de Guatapé entró en un cese de actividades indefinido para protestar por "el escandaloso reajuste en el servicio de energía eléctrica decretado por las Empresas Públicas de Medellín" y exigir que fuera "nuevamente asumida por la administración municipal la responsabilidad de los recaudos por razón del servicio de energía eléctrica en la municipalidad". Para coordinar las acciones se nombró una "Junta integrada por comerciantes e influyentes ciudadanos de Guatapé" (El Colombiano, 16/04/80:2A).

A este paro no se sumaron, sin embargo, los demás sectores sociales del municipio. Aunque la mayoría de las cantinas, graneros, almacenes y demás establecimientos comerciales permanecieron cerrados, otras actividades continuaron desarrollándose normalmente; las oficinas públicas, centros educativos y empresas de transporte abrieron sus puertas y prestaron sus servicios en forma ordinaria.

En la base de esta posición estaba el hecho de que las nuevas tarifas afectaban sobre todo al sector comercial y en mucho menor medida a los usuarios del servicio residencial; además, buena parte de los habitantes opinaba que el movimiento era dirigido por el grupo que menor participación había tenido en

los anteriores conflictos y no tenía, por lo tanto, autoridad para convocar el respaldo del resto de los pobladores. Pero, en general, el carácter apenas parcial del cese de actividades mostraba claramente la tendencia predominante hacia la desorganización y la demovilización de los pobladores de Guatapé; esta etapa representó ciertamente la casi desaparición del movimiento cívico de esa localidad.

Dadas estas condiciones, el conflicto se desarrolló en medio de relativa calma y sin la gran tensión que caracterizó a los paros cívicos precedentes. No obstante, el cese parcial de actividades se mantuvo por ocho días. La prolongación del paro se debió principalmente a la decidia de las autoridades y la intransigencia de las Empresas Públicas. Sólo la intervención del Concejo Municipal, que revocó el contrato que había dado origen al conflicto, permitió a los comerciantes levantar el cese de actividades a partir del 15 de abril. En esta fecha la situación se normalizó definitivamente y desde entonces no se volvió a presentar una movilización cívica importante en Guatapé.

Las mismas condiciones de desmovilización imperaron en El Peñol durante el resto del período. En general fué una fase de receso de la lucha de los pobladores quienes, "embelesados arreglando la casa nueva, llegan a olvidar que Empresas Públicas no ha cumplido cabalmente, que no hay tierras de cultivo y no hay empleo en una población considerablemente urbana" (Rivera, 1986:2). Por ello muy pocos acontecimientos de interés se registraron en el transcurso de esos años; sólo algunos hechos llegaron a alterar la aparente tranquilidad que se vivió en El Peñol entre 1978 y 1982.

Entre las escasas manifestaciones de la decisión de algunos sectores de pobladores de continuar en su lucha, se destacaron especialmente sus periódicas intervenciones en las elecciones municipales. Recogiendo su anterior experiencia, en 1980 un grupo

de estudiantes y campesinos determinó lanzar su propia lista de candidatos al Concejo, independientemente de los partidos tradicionales. "Saltamos a la palestra con una clientela fundamentalmente estudiantil y una campaña de poco mas de un mes para un resultado halagador: un concejal socialista" (Rivera, 1986:2). Igual acogida tuvo este grupo en el debate electoral de 1982 en el que participaron a nombre del Frente Democrático. Sin embargo, aunque la votación aumentó significativamente, no fué suficiente para mantener su curul en el Concejo; apenas por tres votos perdió la lista de los pobladores frente a las de los grupos conservadores y liberales del municipio.

En 1982 se presentó también una nueva movilización campesina en los municipios de El Peñol y Guatapé. Aunque el conflicto aparentemente estaba resuelto, algunos viejos problemas aún estaban presentes. Después de esperar durante varios años una solución al déficit habitacional en el campo, un grupo de labriegos decidió ocupar algunas casas abandonadas en veredas de los dos municipios. Las autoridades locales reaccionaron deteniendo a algunos de los invasores e iniciando procesos penales contra otros. Tal procedimiento motivó la inmediata protesta del campesinado y otra vez se elevó la tensión en la zona. El 18 de julio, "un líder campesino aprovechó la inauguración de un Cristo para denunciar lo que consideran una gran injusticia con los campesinos" (El Colombiano, 22/07/82:7). Estas denuncias se llevaron además a las reuniones regionales que durante ese año se venían realizando en diferentes municipios del Oriente Antioqueño en desarrollo del movimiento cívico contra la Electrificadora de Antioquia.

La participación en este movimiento regional fué la última acción de importancia efectuada por los pobladores de El Peñol en este período. En efecto, en octubre de 1982 se sumaron al segundo paro cívico regional con el que se exigía la salida o liquidación de la empresa intermediaria de energía en el Oriente Antioqueño

(El Mundo, 12/10/82:1B). A pesar de que los habitantes de este municipio no recibían el servicio de dicha empresa sino de las Empresas Públicas de Medellín, el 13 de octubre realizaron un cese de actividades de 24 horas en solidaridad con el movimiento regional que entraba en su segundo día de protesta. El paro Cívico en esta localidad transcurrió en completa calma a pesar de que en algunos municipios vecinos la jornada fué una de las más violentas de todo el movimiento, con bloqueo de vías, pedreas, enfrentamientos con la fuerza pública y numerosos detenidos.

Con este paro cívico terminó prácticamente la etapa de reflujó del movimiento de El Peñol y Guatapé generado por las obras del Proyecto Hidroeléctrico del río Nare. Después de 20 años de conflicto entre los habitantes de estos municipios y las Empresas Públicas de Medellín, los problemas que motivaron el movimiento empezaron a perder paulatinamente vigencia, para dar paso a nuevas situaciones sociales en la zona. Así las determinaciones socio-económicas del conflicto se fueron transformando y con ellas el carácter mismo del movimiento cívico que continuó desarrollándose al pasar a una nueva etapa. De allí en adelante sólo quedaron rezagos de una vieja problemática que cada vez tiene menor importancia para las localidades.

Obviamente, con posteridad a 1982 se han presentado nuevos acontecimientos en El Peñol que con frecuencia reviven las contradicciones con las Empresas Públicas. De hecho, en los últimos años el movimiento cívico de este municipio ha resurgido con una fuerza inusitada debida en gran parte a la larga y rica experiencia de lucha adquirida durante las décadas del sesenta y setenta; pero en lo fundamental se trata de un movimiento cívico renovado que presenta características específicas, diferentes a las de las primeras etapas, y autoriza, por lo tanto, a tratarlo como un fenómeno social que puede ser estudiado en forma comparativa con el período anterior.

Así, entre las características más sobresalientes del nuevo movimiento cívico que se desarrolla en El Peñol desde 1982 hasta 1985 pueden señalarse algunas rápidamente. En primer término el hecho más destacado es el desplazamiento del foco del conflicto de las cabeceras urbanas a las zonas rurales; esto se debe esencialmente a que los principales protagonistas serán los campesinos desalojados por el embalse y las obras de la central, cuyos problemas permanecerán sin solución por varios años más; entre tales problemas los más importantes serán la falta de tierras para las labores agrícolas y el crónico déficit de vivienda rural; otro rasgo importante vendrá a ser su vinculación cada vez más estrecha con el movimiento de pobladores del Oriente Antioqueño y la participación de sus representantes en las organizaciones cívicas a nivel de la subregión. Pero todo esto hace parte de la nueva historia del movimiento cívico de la zona que dará un contexto diferente y otro sentido a los movimientos de pobladores en el ámbito local.

#### REFERENCIAS

Dos tipos de fuentes de información se utilizaron básicamente para el estudio del movimiento cívico de El Peñol y Guatapé:

##### A. DOCUMENTOS

1. CIE UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA : (1969), Estudio Socio-económico de Guatapé, Medellín, Imprenta U. de A.,
2. CODESARROLLO : (1965), Estudio sobre El Peñol y la Incidencia del Proyecto Nare, Medellín,
3. CODESARROLLO : (1982), Consecuencias Socio-económicas de la Central Hidroléctrica del Nare en el Municipio de Guatapé, Medellín.
4. COMITE DEL NARE : (1962), Informe sobre EL Peñol. Recomendaciones sobre ubicación de la nueva cabecera, Medellín.

5. COMITE DEL NARE : (1966), Informe sobre el Municipio de Guatapé, Medellín.
6. CONTRATO MAESTRO : (1969), Empresas Públicas de Medellín y Municipio de El Peñol. Medellín.
7. OSPINA, Livardo : (1966), Una vida, una lucha, una victoria. Monografía históricas de las Empresas y Sevicios Públicos de Medellín, Medellín, Editorial Colina, 578 pp.
8. RIVERA, Humberto : (1986), "El Peñol: una experiencia política", Documento de trabajo, Medellín.
9. VASQUEZ, Gabriel : (1980), "Notas para un informe histórico sobre el Proyecto Nare" en Resvista Empresas Públicas de Medellín, Medellín, pp. 11-17

## 2. PERIODICOS Y REVISTAS

10. ALTERNATIVA : (1978), Bogotá.
11. EL COLOMBIANO : (1960-1982), Medellín.
12. EL CORREO : (1962-1968), Medellín.
13. EL ESPECTADOR : (1978-1982), Bogotá.
14. EL GERMEN DE LA REVOLUCION : (1968), El Peñol.
15. EL PREGON DE ORIENTE : (1968), El Peñol.
16. EL MUNDO : (1974-1982), Medellín.
17. EL TIEMPO : (1978), Bogotá.
18. LA CHISPA ; (1962), El Peñol.
19. MOMENTO MUNICIPAL : (1963), El Peñol.



## 5. LOS MOVIMIENTOS CIVICOS EN COLOMBIA

Como se señaló desde un principio, el movimiento cívico de los municipios de El Peñol y Guatapé es apenas un caso particular entre otros similares que han surgido en Colombia a consecuencia de la realización de grandes proyectos hidroeléctricos. Sin embargo, no es un caso cualquiera; su complejidad y riqueza hacen de él un movimiento de gran interés para el análisis de los movimientos cívicos en general porque brinda la oportunidad de conocer en detalle aspectos que hasta ahora no han sido suficientemente estudiados. Teniéndolo como referencia empírica inmediata es posible profundizar en el examen de una modalidad de movimiento social que se ha extendido ampliamente en el país pero sobre la cual el conocimiento que se tiene es todavía muy superficial y generalizante.

Siendo éste el propósito fundamental, el análisis del movimiento cívico de El Peñol y Guatapé no puede reducirse a un simple recuento de sus características más evidentes. En tanto que caso ilustrativo de un fenómeno mucho más general, el examen de este conflicto particular debe servir de base a una interpretación del movimiento cívico en su conjunto. La idea básica es aportar nuevos elementos a la discusión sobre la naturaleza y las características de estos movimientos. Así, los resultados del estudio de este caso concreto pueden ayudar a comprender mejor la forma específica que en Colombia asumen los movimientos y luchas urbanas.

## 5.1. CONDICIONES SOCIO-HISTORICAS DE SURGIMIENTO

Aunque a primera vista el Proyecto Nare puede verse simplemente como un conjunto de obras de ingeniería en el que los mas destacado son sus características técnicas, en realidad es un hecho histórico de gran trascendencia en la subregión por los efectos que produjo a nivel económico y social. Desde una perspectiva sociológica éstos son precisamente los aspectos que interesa resaltar y de los que debe ocuparse en primer término el análisis.

Si se examina el proceso histórico a través del cual se gestó el Proyecto Nare puede verse fácilmente que éste no fué nunca una obra construida para dar respuesta a las necesidades del desarrollo de la zona donde está localizado. Desde un principio el proyecto fue pensado y ejecutado por las Empresas Públicas de Medellín para cubrir las necesidades energéticas de esta ciudad. A través de la Central de Guatapé el potencial hidroeléctrico del río Nare ha sido explotado por un centro de mayor desarrollo económico y poder político sin que de ello derive beneficio alguno para la subregión en la que se encuentra este recurso. De hecho ni siquiera se ha dado oportunidad a la población local para que aproveche la represa en actividades económicas complementarias como la pesca y el turismo. Por todo ésto la situación planteada puede interpretarse como un caso mas de colonialismo interno en el que un polo de desarrollo industrial como Medellín explota los recursos naturales de una zona periférica como la cuenca del Nare.

Esta primera característica de la situación histórica a partir de la cual se suscitó el conflicto entre los pobladores y campesinos de los municipios de El Peñol y Guatapé con las Empresas Públicas de Medellín coincide con uno de los rasgos genéricos que se les reconoce a los movimientos cívicos en

Colombia. Como reiteradamente lo ha señalado Pedro Santana, "el movimiento cívico se relaciona muy estrechamente con la problemática regional y ésta a su vez con las características desprendidas del desarrollo desigual de las regiones" (Santana, 1983:17). Este caso particular muestra además que los fenómenos del desarrollo desigual tienen también lugar al interior de las regiones. Puesto que el desarrollo regional es polarizado, las áreas periféricas al núcleo industrial y urbano se ven sometidas a relaciones de explotación y dependencia. La respuesta de los pobladores de estas áreas es entonces la movilización y la organización para la protesta ante las situaciones de injusticia social que derivan de un modelo de desarrollo regional desigual. El movimiento de pobladores de El Peñol y Guatapé confirma pues que "los movimientos cívicos son la expresión de una resistencia muy amplia a las formas y modalidades del desarrollo del capitalismo en el país" (Santana, 1983:100).

Pero en el Proyecto Nare no se trata sólo de la problemática regional de una economía en desarrollo. Las obras de la Central de Guatapé fueron construidas en el contexto de unas relaciones económicas dominadas por el capital multinacional. La presencia de éste se manifestó, en efecto, desde muy temprano y a lo largo de toda su ejecución. Desde la idea original hasta la administración de las obras, pasando por su financiación, las empresas extranjeras participaron siempre activamente. Una simple enumeración de las etapas del proceso en las que tomó parte el capital internacional puede dar una idea clara del grado de su intervención: realización de los primeros estudios, elaboración de anteproyectos, selección de alternativas, ejecución de estudios de factibilidad, financiación de estudios técnicos, diseño del proyecto definitivo, financiación de las dos etapas del proyecto, construcción de las obras, suministro de los principales equipos, administración del proyecto e imposición de una política tarifaria de servicios públicos para garantizar el pago de la deuda externa de las Empresas. Hablar de una

intervención del capital internacional en el Proyecto Nare no es pues mera retórica; es un hecho concreto plenamente documentado.

La forma concreta que asume esta intervención en los países dependientes está también claramente ilustrada en el caso de la Central de Guatapé. En general, las empresas transnacionales participaron en el proyecto a través de tres modalidades principales: préstamos en moneda extranjera, inversiones directas y ventas de maquinaria pesada y equipos tecnológicamente avanzados. Gran parte de los costos de construcción de las obras de la Central estuvieron representados precisamente por intereses de créditos externos, pagos de contratos internacionales y compra de maquinaria y equipos en el exterior, de los cuales se beneficiaron en especial algunos organismos financieros internacionales, firmas constructoras multinacionales y grandes empresas fabricantes de equipos de generación eléctrica. La sola mención de los países sedes de estas corporaciones es un buen indicador de la amplitud del proceso de internacionalización del capital en el que se inscribe la construcción de las obras de este tipo en los países periféricos; en el Proyecto Nare participaron bancos, consorcios y empresas de Estados Unidos, Canadá, Francia, Italia, Alemania, Japón, Perú y Panamá.

El caso del Proyecto Hidroeléctrico del río Nare muestra pues nitidamente la estrecha relación existente entre el capital transnacional y los proyectos de desarrollo en los países dependientes como Colombia. Es a través de estas formas concretas de intervención económica como se materializa el neocolonialismo que estructuralmente determina las modalidades de desarrollo de estos países. Un resultado específico de esta dependencia estructural es la definición de las políticas económicas mas en función de los intereses de los organismos internacionales que de las verdaderas necesidades del desarrollo nacional. De esto es buen ejemplo la política de construcción de grandes centrales

hidroeléctricas que se inauguró en Colombia en la década del sesenta precisamente con el Proyecto Nare; de la revisión de la historia de este proyecto queda claro que tal política no respondió sólo a criterios técnicos sino principalmente a razones económicas. Este tipo de obras son justamente las que facilitan la entrada del capital internacional pues su magnitud excluye de hecho las posibilidades de financiación total con recursos internos. Para entender los efectos de una política económica como la de construcción de grandes centrales basta saber que la mayor deuda externa en Colombia es, con gran ventaja sobre los otros rubros, la del sector eléctrico.

Tales condiciones estructurales ponen a los pobladores de las zonas afectadas por la construcción de grandes centrales hidroeléctricas en contradicción objetiva con los intereses del capitalismo internacional. Además el de las centrales es sólo una de las modalidades de proyectos de desarrollo con financiamiento externo que en Colombia han sido fuente de conflictos sociales de importancia. En general, muchas de las problemáticas específicas que en el país han generado movilizaciones de pobladores se derivan de la situación de dependencia económica. Por esto es posible encontrar en el movimiento cívico que "las clases y sectores sociales participantes manifiesten intereses anti-capitalistas y anti-imperialistas que son potenciales inmediatos" (Carrillo, 1981:292). Sin embargo, como sucede en el caso del movimiento cívico de El Peñol y Guatapé, las contradicciones con el capital transnacional no siempre se hacen explícitas. Aunque en algunos casos "las reivindicaciones pueden alcanzar en consecuencia características de lucha anti-capitalista, anti-imperialista y anti-oligárquica" (Carrillo, 1981:292), ésta no es la regla general. Hasta ahora, la mayoría de los movimientos cívicos en Colombia se limita a plantear sus reivindicaciones en el plano más inmediato, sin poner en cuestión las raíces profundas de las problemáticas que los generan.

Por otra parte, hay que tener en cuenta que las obras de la Central de Guatapé no fueron simplemente el resultado de la intervención de las corporaciones multinacionales en Colombia. Como se ha visto, tal intervención es innegable; pero ella sólo puede explicarse en un contexto histórico muy específico. Los grandes proyectos hidroeléctricos que se han llevado a cabo en los países dependientes hacen parte de un modelo de desarrollo en el marco de una nueva fase de la economía capitalista mundial. Según este modelo, durante las primeras décadas del siglo, en los países periféricos tuvo lugar un proceso de industrialización del sector de bienes de consumo que se articuló con una nueva división internacional del trabajo. El desarrollo de este proceso de industrialización dependiente exigió, a su vez, la construcción de grandes obras de infraestructura entre las cuales se destacan especialmente las centrales hidroeléctricas. En tanto que una de las condiciones generales de la producción, el abastecimiento energético de la industria manufacturera ha sido una de las políticas económicas prioritarias de los Estados nacionales de la periferia capitalista. De todo este proceso es un excelente ejemplo el caso del desarrollo industrial de Medellín y el papel que en él ha jugado la energía eléctrica de la Central de Guatapé. Esta fué ante todo un resultado del crecimiento económico y físico de la ciudad que en las décadas del cincuenta y sesenta obligó a sus Empresas Públicas a acometer la realización de un proyecto hidroeléctrico de tal magnitud.

En este sentido, la situación de la subregión del Oriente Antioqueño y, en particular de los territorios de los municipios de El Peñol y Guatapé, es un tanto diferente a la de otras zonas del país en las que con igual frecuencia se han presentado movilizaciones cívicas. Si bien la mayor parte de lo "movimientos cívicos regionales" constituyen "una respuesta a los profundos desniveles de desarrollo regional y a las desigualdades y carencias que se presentan en las distintas regiones en materia de servicios públicos" (Santana, 1983:119), en este caso

particular la determinación histórica del movimiento presenta un matiz interesante. Aunque acá también se trata de una problemática ligada con el desarrollo regional, el movimiento no se genera por la falta de acciones estatales sino, al contrario, por los efectos negativos que en la subregión tuvo un proyecto específico de desarrollo impulsado por el Estado. Así pues, el caso del movimiento cívico del El Peñol y Gauatapé es en este aspecto diferente a otras luchas cívicas regionales en las que se "formulan reivindicaciones que tienen que ver con la localización industrial (sobre todo de las empresas estatales relacionadas con la explotación de los recursos naturales) y los movimientos que buscan medidas descentralista tanto en el aspecto de inversiones estatales como también medidas relacionadas con estímulos a la inversión privada en aquellas regiones" (Santana, 1983:17).

Esta conclusión se puede extender incluso al conjunto de los movimientos y paros cívicos realizados en el Oriente Antioqueño durante las décadas del sesenta y setenta. La mayoría de estas movilizaciones surgieron fundamentalmente como una reacción de los pobladores y campesinos de la subregión frente al impacto de los procesos de desarrollo a que se vieron sometidos sin que tuvieran participación alguna en la toma de decisiones. En general estos movimientos no representaron un rechazo a las obras de progreso de la subregión sino una resistencia plenamente justificada frente a los aspectos de dichas obras que lesionaban directamente a la población. Básicamente las movilizaciones en el Oriente Antioqueño son luchas de resistencia contra los efectos negativos que en las condiciones de vida de los pobladores han producido los diferentes procesos de desarrollo regional. Cualquiera que sea el movimiento cívico de esta subregión que se examine, en su origen se encuentran acciones de algún nivel o aparato estatal que en uno u otro sentido perjudicaban a los sectores populares. Esto es claramente visible en el caso del movimiento de pobladores contra las Empresas Públicas de Medellín a raíz del Proyecto Nare.

## 5.2. CAUSAS Y REIVINDICACIONES INMEDIATAS

En efecto, las consecuencias económicas y sociales del proyecto hidroeléctrico del río Nare no fueron despreciables en modo alguno; por el contrario, fué inmenso el impacto de este proyecto sobre los pobladores y campesinos de El Peñol y Guatapé. Como se ha visto, graves efectos a nivel físico, económico y social tuvo la rrepresa sobre los dos municipios: en el orden físico el proyecto no sólo produjo cambios en el paisaje y modificaciones en el clima de la zona sino una importante pérdida de los territorios municipales y de su infraestructura vial; a nivel económico los dos municipios sufrieron la inundación de sus mejores tierras agrícolas, el drástico decrecimiento de su producción agropecuaria, el incremento del desempleo urbano y rural, la destrucción de gran número de viviendas, el deterioro de su infraestructura de servicios públicos, la reducción de los ingresos de la población, el aumento del costo de vida y la reducción de sus ingresos fiscales; y en el campo social los pobladores se vieron afectados por la emigración campesina y el desalojo masivo hacia los nuevos lugares de residencia, el surgimiento de fenómenos de descomposición social y las consecuentes pérdidas del sentido de pertenencia, costumbres tradicionales, vínculos de vecindad y valores morales. De esta manera, el caso de El Peñol y Guatapé muestra cómo la construcción de obras de tal magnitud trae consigo muchos más problemas que beneficios directos para los pobladores de los municipios cercanos.

Fué precisamente esta grave problemática socio-económica la que dió origen al movimiento de protesta de los habitantes de El Peñol y Guatapé; su oposición no era tanto a la construcción del Proyecto Nare como a sus efectos negativos sobre la zona. En ningún momento los pobladores se opusieron directamente a la



ejecución de las obras; siempre reconocieron su importancia para el avance del sector eléctrico a nivel regional y nacional. Pero si se opusieron decididamente a los graves perjuicios que en todos los aspectos de su vida les ocasionó la construcción de la Central de Guatapé.

El conflicto surgió sólo cuando los pobladores sufrieron un drástico deterioro de sus condiciones de vida, los campesinos perdieron la mayor parte de sus tierras y las zonas urbanas se vieron amenazadas por las aguas de la represa. Entonces los diferentes sectores sociales de ambos municipios se vieron obligados a organizarse para defender sus más esenciales derechos: el acceso al trabajo y a los medios de subsistencia, la posibilidad de una vida digna, la libre elección del lugar de poblamiento y la preservación de las comunidades locales. Así, la génesis de este movimiento cívico estuvo directamente ligada a la construcción del embalse y la central hidroeléctrica del río Nare.

Sin embargo, no fué el Proyecto Nare la única causa del movimiento cívico en estos dos municipios. Aunque entre sus razones inmediatas están, naturalmente, los efectos negativos directos e indirectos de las obras, el conflicto tuvo también otras motivaciones. En particular, el inadecuado manejo que de la situación social creada hicieron las Empresas Públicas de Medellín fué tanto o más importante que los múltiples problemas socio-económicos ya señalados. Además de ellos, El Peñol y Guatapé tuvieron que afrontar toda una serie de atropellos y arbitrariedades de la empresa estatal que fueron las que en mayor medida exaltaron los ánimos de los pobladores.

En efecto, no se limitaron las Empresas a causar tan graves daños en los dos municipios sino que además impusieron una agresiva política en sus relaciones con los pobladores. Entre los irregulares procedimientos empleados por las Empresas Públicas en

El Peñol y Guatapé pueden enumerarse: el desalojo violento de los pobladores que se resistían, las comisiones para los funcionarios encargados de la negociación de tierras, las expropiaciones por la vía judicial y no del arreglo directo, el pago de propiedades por debajo de los precios comerciales, el desconocimiento de las indemnizaciones por los perjuicios causados, la destrucción de viviendas e infraestructura de servicios públicos sin su correspondiente sustitución, la violación permanente de los derechos de los pobladores, la manipulación de los medios de comunicación, el marginamiento de la población en decisiones que la afectaban directamente, el irrespeto público de instituciones y personalidades apreciadas por los habitantes, el manejo político de funcionarios municipales y la represión directa de toda manifestación de inconformidad. Fueron todas estas acciones de las Empresas Públicas de Medellín la causa principal de la protesta y la movilización en los municipios de la zona de la represa.

Frente a esta compleja problemática que les afectaba, los campesinos y pobladores de El Peñol y Guatapé levantaron una también compleja serie de reivindicaciones que prácticamente comprendía todos los aspectos de la vida social de las dos comunidades locales. Obviamente las reivindicaciones dependían de los diversos problemas que dieron origen al conflicto y de los diferentes intereses sociales que resultaron lesionados, por lo que su sola enumeración puede resultar bastante extensa. Pero, de manera global, el amplio espectro de exigencias planteadas por este movimiento a lo largo de tantos años se dividió en dos grandes grupos: las reivindicaciones de tipo general y las específicas de cada sector social. Entre éstas últimas se distinguieron además las que se relacionaban con las condiciones de vida de los pobladores de los centros urbanos y las referidas a las condiciones de trabajo de los campesinos del área rural.

El primero y más importante objetivo del movimiento de pobladores generado por las obras del Proyecto Nare era, claramente, asegurar la supervivencia de las comunidades locales amenazadas por las aguas del embalse. En consecuencia, la reivindicación central fué durante mucho tiempo la construcción de las nuevas cabeceras municipales para reemplazar a las que total o parcialmente se perderían con la inundación. Se trataba básicamente de que las Empresas Públicas garantizaran a los habitantes de El Peñol y Guatapé al menos las condiciones de vivienda y equipamiento urbano de que disponían antes del obligado desalojo de sus pueblos. Por ello sus principales exigencias planteaban la sustitución de la infraestructura urbana e instalaciones de servicios públicos destruidos, el pago de adecuadas indemnizaciones por los daños causados a las propiedades de particulares y el reconocimiento de compensaciones en proporción a los perjuicios derivados de la construcción de la central hidroeléctrica. En síntesis, el movimiento luchaba más por la defensa de las condiciones de vida de los pobladores que por la mejora sustancial de las mismas.

En idéntica línea se formularon las reivindicaciones propias de los campesinos de la zona. Como es natural, el problema más sentido fué la pérdida de las tierras para labores agrícolas ya que la mayor parte del área productiva quedó bajo las aguas de la represa. Consecuentemente, su principal interés era la reubicación en nuevas parcelas que les proporcionaran los medios adecuados para la subsistencia de sus familias. Pero antes de esto estaba el proceso de negociación de tierras en el cual surgieron multitud de problemas debido a la arbitraria política de compras impuesta por las Empresas Públicas. Por tal razón, la mayoría de las reivindicaciones campesinas se centraron en exigir procedimientos justos y razonables en la negociación de propiedades rurales, entre los que se contaban: eliminación de intermediarios, devolución de títulos retenidos, arreglo de directo sin expropiación, compra oportuna y a precios

comerciales, reconocimiento de mejoras, indemnización por pérdidas de cultivos y pago inmediato de propiedades vendidas. Todas estas exigencias apuntaban básicamente a mantener las mismas condiciones de trabajo que tenían los pequeños propietarios rurales antes de la construcción de las obras de la Central del Nare.

Respecto al tipo de reivindicaciones planteadas el movimiento cívico de El Peñol y Guatapé se distingue de la mayoría de los movimientos cívicos en Colombia. En general, "el examen de los movimientos cívicos destaca como aspecto central de sus reivindicaciones -dentro de la heterogeneidad que les es propia- la exigencia de mejores servicios de acueducto, alcantarillado, energía eléctrica y vías de comunicación. Este tipo de reivindicaciones constituye aproximadamente el 90% de las exigencias planteadas al Estado por los paros cívicos locales y regionales" (Santana, 1981: 53-54). Pero, como se ha visto, en este caso particular las reivindicaciones centrales no se relacionan con la problemática de los servicios públicos en forma exclusiva; aunque también la comprende, el panorama reivindicativo es mucho más amplio y se extiende a casi todos los aspectos de la vida material y social de las dos comunidades.

Sin embargo, la naturaleza básica de las reivindicaciones del movimiento originado en el Proyecto Nare es la misma de las exigencias planteadas por el conjunto del movimiento cívico colombiano. En lo fundamental se trata siempre de reivindicaciones que pretenden defender o mejorar las condiciones de vida de la población en general, y particularmente de los sectores populares. Si se examina el caso concreto presentado, o cualquiera otro de los numerosos movimientos cívicos registrados en Colombia, se encuentra que la reivindicación esencial es la de adecuadas condiciones de vida para los grupos mayoritarios de la población. Desde un punto de vista teórico más general, el caso

específico estudiado muestra que se trata de luchas y movimientos sociales en la esfera de la reproducción.

### 5.3. COMPOSICION SOCIAL Y NIVEL ORGANIZATIVO

Aunque en cada municipio hubo situaciones específicas, las causas inmediatas y, consecuentemente, los objetivos de la movilización en El Peñol y Guatapé fueron los mismos para ambos. Así pues, por su contenido estructural, el movimiento de pobladores de estos dos municipios no puede considerarse más que como uno solo. Además, hay coincidencia en otro de sus elementos fundamentales como es el de su base social. El Peñol y Guatapé tenían la misma estructura socio-económica; los diferentes grupos sociales que participaron en la movilización y la protesta fueron, por lo tanto, muy similares en las dos localidades.

La base de la economía de los municipios de El Peñol y Guatapé era la actividad agrícola, desarrollada en su mayor parte por pequeños propietarios, cosecheros y aparceros; en general se trataba de una zona de campesinado minifundista en tierras de baja calidad y con sistemas de explotación tradicionales; aunque de menor importancia, el sector primario también comprendía alguna actividad ganadera y la extracción de madera de los bosques cercanos. En el área urbana el principal renglón económico era el comercio, seguido de un incipiente desarrollo artesanal; en ninguna de las dos localidades había asentamientos industriales de importancia. Fundamentalmente, las cabeceras municipales eran puntos de intermediación entre sus correspondientes zonas de producción agrícola y la ciudad de Medellín, principal centro industrial y de consumo de la región.

En tales circunstancias, las obras de la Central del Nare afectaron a una amplia gama de sectores sociales en los dos municipios. Puesto que sus efectos se sintieron tanto en las

zonas rurales como en las urbanas, prácticamente todos los grupos sociales de El Peñol y Guatapé participaron en la movilización. Durante tan prolongada lucha, toda la población tuvo la oportunidad de intervenir en el movimiento de una u otra manera. Algunos sectores sociales se destacaron especialmente por su participación en los diferentes paros cívicos: en el área rural la movilización mas importante fué la de los cosecheros y aparceros que resultaron siendo los mas perjudicados entre los campesinos ante la pérdida de la mayor parte de las tierras agrícolas; en las cabeceras urbanas el grupo de mayor figuración fué el de los estudiantes que con su característica beligerancia mantuvo la agitación de la problemática que afectaba los municipios. Pero, en general, todos los pobladores intervinieron en el movimiento cívico: pequeños propietarios, cosecheros, aparceros, comerciantes, estudiantes, amas de casa, artesanos, desempleados y padres de familia estuvieron presentes en distintos momentos del conflicto.

Esta variada composición social de la movilización cívica en los municipios de El Peñol y Guatapé confirma que "una de las constantes de los movimientos cívicos ha sido el carácter policlasista de los sectores que los promueven y participan" (Giraldo, 1985:1). Como sucede al examinarse este caso particular, "lo primero que se puede constatar es la participación amplia y variada de las diferentes clases y capas sociales. Es posible encontrar desde los desempleados y sin trabajo estable, hasta profesionales y medianos propietarios, pasando por concejales, diputados y representantes del clero" (Carrillo, 1981:161). Debido a la amplitud de la problemática por la que se originan, en los movimientos cívicos "hay una confluencia real y objetiva de intereses, que es la base que posibilita la confluencia de fuerzas que constituyen el movimiento y que en ocasiones llega hasta el paro cívico local o regional" (Santana, 1983:143). Sin embargo, a pesar de que la movilización se hace por ojetivos comunes, cada sector social

participa en función de sus propios intereses porque de hecho la heterogeneidad social del movimiento implica la coexistencia de intereses de clase claramente diferenciados.

En este sentido, una característica fundamental del movimiento cívico en El Peñol y Guatapé fué la fusión del movimiento de pobladores con el movimiento campesino propiamente dicho. En el contexto de la amplia heterogeneidad en su composición social, en este caso la participación campesina tuvo una importancia decisiva. Gran parte de las acciones que se adelantaron en el transcurso del movimiento fueron realizadas por los campesinos de la zona. Durante todas las etapas del largo conflicto el campesinado fué uno de los pilares fundamentales de la protesta y la movilización. Si no se tiene en cuenta tal particularidad, difícilmente puede comprenderse la naturaleza de este movimiento cívico. El conflicto generado por el Proyecto Hidroeléctrico del Nare fué a la vez un movimiento de campesinos y de pobladores.

Este aspecto del movimiento cívico no ha sido suficientemente explorado hasta ahora. A pesar de que "el principal eje de los movimientos y paros cívico de los primeros años de la década del setenta es el propio movimiento campesino" (Santana, 1983:112), en Colombia no se ha reconocido aún claramente la importancia de la articulación entre ambos movimientos. La mayoría de los estudios sobre paros cívicos ignoran esta relación que, sin embargo, es clave para comprender las movilizaciones sociales en los pequeños municipios donde, como es bien conocido, se han realizado el mayor número de paros cívicos. Sólo Pedro Santana planteó hace algún tiempo que "una interpretación todavía sujeta a comprobaciones empíricas mas globales, pero que se puede sugerir desde ya, nos permite vincular el fenómeno de los paros cívicos de los pequeños poblados a aquellas regiones en donde la agricultura tradicional es la actividad productiva principal" (Santana, 1983:138). Por

lo pronto el caso de El Peñol y Guatapé parece corroborar que en los pequeños municipios donde predominan las formas tradicionales de explotación agrícola se presenta una estrecha relación entre el movimiento de pobladores y el movimiento campesino que aparecen bajo la forma común de movimiento cívico. Si se examinan las causas inmediatas de este movimiento particular, se comprende que tal hecho puede ocurrir cuando las condiciones de vida de los pobladores dependen directamente de las condiciones de trabajo de los campesinos.

Esta característica de ser a la vez un movimiento de pobladores y campesinos se expresó claramente en la articulación de las diversas organizaciones que tomaron parte en el movimiento cívico de El Peñol y Guatapé. Durante el desarrollo de la movilización surgieron, en efecto, diversas formas asociativas para representar los intereses particulares de algunos sectores sociales. Entre ellas pueden contarse las Juntas de Acción Comunal, el Sindicato Agrícola, las Asociaciones de Usuarios Campesinos, la Cooperativa de Ahorro y Crédito, la Asociación de Desempleados, el Consejo Estudiantil, el Comité de Comerciantes y la Sociedad de Mejoras Públicas. Como puede verse, al lado de las formas organizativas tradicionales campesinas aparecían otras propias de grupos sociales del área urbana de los municipios. El hecho destacado de este movimiento de pobladores fué la frecuente unidad de las diferentes organizaciones para emprender acciones conjuntas. Según la coyuntura, una u otra organización tomaba el liderazgo y convocaba a las demás en torno de objetivos comunes.

Cuando esto acontecía, el resultado era la conformación de las Juntas Cívicas Pro-defensa, la forma más representativa del movimiento de pobladores de ambas localidades. Las juntas pro-defensa surgieron indefectiblemente en todos los casos en los que el conflicto se agudizaba y las negociaciones daban paso al enfrentamiento directo. Estas juntas llevaban la voz y representación de todos los sectores sociales de las comunidades



locales y tomaban a su cargo la coordinación de acciones cuando era necesario. Por lo general sus miembros eran elegidos en asambleas Populares o nombrados en representación de las organizaciones que participaban en el movimiento. Nunca llegaron a ser una organización permanente; por el contrario, surgían y desaparecían con un marcado carácter coyuntural. Sin embargo, fueron siempre la forma organizativa que mejor expresaba el conjunto de intereses de campesinos y pobladores de los municipios de El Peñol y Guatapé.

La inestabilidad de las juntas cívicas se correspondía en parte con la permanencia de las organizaciones de base; pero se debía también a la existencia de algunas instituciones locales que cumplían muchas de sus funciones, especialmente durante las etapas de reflujo del movimiento. Estas instituciones fueron principalmente las Parroquias y los Concejos Municipales que, como se ha mostrado, también jugaron un papel fundamental en el desarrollo del movimiento cívico. Unas y otros intervinieron en el conflicto desde la primera hasta la última etapa y durante todo el tiempo asumieron la representación social y legal de los pobladores ante las autoridades. Aunque como instituciones su participación estuvo casi siempre restringida al proceso de negociaciones, algunos sacerdotes y concejales se comprometieron individualmente en varias acciones de presión directa, incluidos los paros cívicos. De esta manera, la Parroquia y el Concejo lograron mantener su lugar e importancia dentro de las comunidades locales, a pesar del creciente poder de las Juntas Pro-defensa.

#### 5.4. FORMAS DE LUCHA Y RESPUESTAS DEL ESTADO

Para la consecución de sus objetivos, pobladores y campesinos implementaron una estrategia común orientada a obligar

a las Empresas Públicas de Medellín a dar una solución satisfactoria a todos los problemas causados en los municipios de El Peñol y Guatapé. Esta estrategia se desarrolló en tres etapas a lo largo del movimiento. El primer paso consistió en la identificación de los efectos negativos de todo orden generados por el embalse, para lo cual se solicitó la realización de diferentes estudios sobre el impacto ambiental, económico y social del proyecto. Durante la segunda etapa los esfuerzos estuvieron concentrados en hacer que la empresa asumiera legalmente el compromiso de compensar las pérdidas e indemnizar por los daños y perjuicios producidos; con tal fin la principal exigencia fue durante varios años la firma de un Contrato Maestro en el que se contemplaron el conjunto de obligaciones de las Empresas con los municipios afectados; con igual propósito se firmaron numerosos convenios y pactos a los que se trató de darles un carácter legal convirtiéndolos en documentos públicos. Finalmente, cuando ésto pudo alcanzarse, el afán prioritario fué mantener un control y vigilancia constantes para que se diera estricto cumplimiento a los compromisos adquiridos por la empresa estatal.

Sin embargo, esta estrategia conjunta no pudo adelantarse simultáneamente en los dos municipios afectados por la Central Hidroeléctrica del Nare. Un hecho realmente notable fué el desarrollo paralelo y no coincidente del conflicto en ambas localidades. A pesar de los repetidos intentos de diversas instituciones, organizaciones y líderes cívicos por articular plenamente las luchas de El Peñol y Guatapé contra las Empresas Públicas de Medellín, en general el movimiento de pobladores de cada municipio siguió su curso con relativa independencia. Ciertamente hubo momentos en que las luchas coincidieron y se dió una relativa coordinación de las acciones realizadas en cada lugar, pero ésto fué mas la excepción que la regla. No obstante que el movimiento en si no se puede considerar mas que uno solo,

las acciones de los pobladores de los dos municipios tuvieron características y dinámicas propias.

En el conflicto de El Peñol y Guatapé con las Empresas Públicas cada municipio desarrolló, en efecto, una línea de acción característica. Mientras en el primero predominó una tendencia que insistentemente buscaba acuerdos por la vía de las negociaciones institucionales, en el segundo la constante era el enfrentamiento directo con la empresa estatal. Fué así como en Guatapé se realizaron no sólo el mayor número sino, además, los mas prolongados y violentos paros cívicos del movimiento; en El Peñol, por el contrario, ocurrieron apenas dos cortos ceses de actividades que no tuvieron mayores consecuencias inmediatas. Esto no significa, empero, que en el movimiento cívico de El Peñol sólo se recurriera a acciones orientadas a la negociación con las Empresas Públicas y en el movimiento de Guatapé se desecharan éstas para emplear únicamente acciones de fuerza. Realmente, en ambos municipios, pobladores y campesinos combinaron diferentes formas de lucha; en todos dos realizaron varias actividades orientadas a la organización, la denuncia, la protesta, la presión y la negociación. Su diferencias radicaban apenas en el mayor o menos peso que a lo largo del conflicto tuvieron una u otra forma de lucha.

Vista en su conjunto, la lucha de los pobladores y campesinos de El Peñol y Guatapé fué un movimiento cuya fuerza radicó mas en el tipo de acciones realizadas que en las formas organizativas adoptadas. Este movimiento no llegó nunca a constituir una organización permanente que sirviera de instrumento efectivo para el logro de sus reivindicaciones; su nivel organizativo fué siempre el mínimo indispensable para poder coordinar algunas acciones; a tal efecto resultó suficiente con la realización de asambleas populares y el nombramiento de juntas cívicas y comités de trabajo cuya vida no se prolongó mas allá de ciertas coyunturas. Mas importantes fueron los mecanismos

orientados a propiciar las negociaciones con las Empresas Públicas; en este sentido eran frecuentes la elaboración de memoriales, la designación de comisiones negociadoras, las audiencias con las autoridades y la firma de convenios y pactos. Pero, cuando las vías del diálogo no surtían los efectos esperados, entonces se acudía a formas de presión directa que muchas veces desembocaron en hechos violentos; así en numerosas ocasiones se registraron manifestaciones, marchas callejeras, concentraciones públicas, tomas de oficinas, bloqueos de vías, retenciones de funcionarios, pedreas y enfrentamientos con fuerzas policiales. Al final todas estas acciones confluían en la realización de los paros cívicos que se constituyeron, por tanto, en la principal forma de lucha del movimiento.

Desde el punto de vista del desarrollo de las acciones, la movilización de los pobladores y campesinos de El Peñol y Guatapé asumió la forma típica de los movimientos cívicos en Colombia. El curso de este movimiento particular coincide en casi todos sus aspectos con la descripción que hace Santana del "proceso de desarrollo de uno de ellos". Así, al igual que en la gran mayoría de los movimientos cívicos, en este caso concreto el proceso "se inicia con la discusión en torno a un núcleo crítico o problema central". La fase siguiente consiste en "una gestión mediadora entre la población y las autoridades gubernamentales" adelantada por alguna institución, personalidad o por los propios líderes del movimiento. "En esta fase, la agitación, las labores organizativas, las discusiones, y aún las negociaciones ponen en agitación a amplios sectores". Después de las primeras negociaciones o simultáneamente con ellas se emprenden acciones de presión directa. "Es el momento de los mítines, las manifestaciones, las asambleas populares en los sitios céntricos de la población y, naturalmente, la amenaza de paro cívico". A esta altura del conflicto se evidencian las diferencias en la base social del movimiento y comienza a darse la deserción de aquellos sectores dominantes locales que sólo aprueban las vías

del diálogo. La fase siguiente es la negociación de un pliego de peticiones o "memorial" que puede hacerse en comisiones a puerta cerrada o en discusiones públicas de amplia participación. Si a lo largo de este proceso no se dá solución a los problemas o respuesta a las exigencias planteadas por el movimiento, la alternativa de acción siguiente es el cese de actividades o paro cívico. "El paro cívico es el cese de todas las actividades productivas, comerciales, de comunicación terrestre y de las labores administrativas y educativas, en una palabra, un cierto tipo de huelga de masas dirigida a la consecución de una reivindicación central que atañe al interés de una localidad o región". Con regularidad al paro cívico se asocian actividades de movilización y protesta como la marcha, el mitin, la manifestación pública, el bloqueo de vías, la toma de dependencias oficiales y hasta el enfrentamiento con la policía, el ejército y demás aparatos represivos. Pero la paralización total de actividades no puede mantenerse indefinidamente y mas o menos rápidamente debe encontrarse una salida a la situación creada. El conflicto concluye cuando se logra algún acuerdo entre las partes o el movimiento se desgasta al punto de tener que abandonar la presión directa ejercida con el paro cívico. "La orden del cese puede provenir o bien de una asamblea popular pública y abierta o de la orientación del organismo nombrado como dirección del movimiento" (Santana, 1983:113-118).

En todo este proceso el paro cívico aparece entonces como "la expresión mas desarrollada y en cierta forma el punto de llegada" del movimiento cívico. Entre las distintas formas de lucha utilizadas por el movimiento cívico, su "tendencia general es la de confluir en el paro cívico que las resume y las contiene a todas". Por esto hay una idea muy generalizada de considerar que "la historia de los paros cívico se confunde con la del movimiento cívico" (Carrillo, 1981:47-48). Sin embargo, como se puede apreciar claramente en el caso concreto de El Peñol y Guatapé, el movimiento cívico es un fenómeno mucho mas amplio y

complejo que el paro cívico. Por esto es necesario distinguir entre ambos: esencialmente el paro cívico es apenas una forma de lucha entre otras que adopta el movimiento cívico como mecanismos de presión para lograr una respuesta positiva a sus exigencias. Aunque ha llegado a constituirse en su manifestación más destacada, el cese de actividades no es la única modalidad de acción utilizada por el movimiento; y, como se deduce de la comparación de los resultados obtenidos en El Peñol y Guatapé, tampoco es necesariamente el mecanismo de presión más eficaz. El movimiento cívico en Colombia ha desarrollado una amplia variedad de formas de lucha que responden a la iniciativa de los sectores populares que en él participan. Aunque en la mayoría de los casos las acciones del movimiento cívico culminan en el paro, no siempre éste se realiza, lo cual no significa que el movimiento cívico pierda su sentido o tome otro carácter. Así pasó en El Peñol donde el paro cívico como tal no tuvo mayor trascendencia y a pesar de ello el movimiento de pobladores y campesinos conservó siempre una gran vitalidad.

La relación entre el paro y el movimiento cívico es perfectamente análoga a la existente entre la huelga y el movimiento obrero. Si bien la huelga es uno de los mecanismos de presión más característicos del movimiento obrero, éste no se confunde con aquella. El movimiento obrero no sólo es mucho más amplio que la huelga sino que además le da a ésta todo su sentido. Es al interior del movimiento obrero que la huelga adquiere un significado concreto y opera como medida de presión. Igual sucede con el paro cívico: sólo en el contexto de un movimiento social de mayor amplitud cobra su verdadera dimensión; por fuera de él carece de sentido y, más aún, no puede darse. Pues todo paro cívico implica la movilización de amplios sectores sociales, lo cual no comienza ni termina con el paro. Por el contrario, la realización de un paro cívico exige siempre un cierto grado de movilización previa que muchas veces continúa después de él. La relación dada entre los paros cívicos y la

movilización social en El Peñol a lo largo de mas de dos décadas que se prolongó el conflicto demuestra todo esto sin lugar a dudas.

Por otro lado, el caso concreto del conflicto surgido entre las Empresas Públicas de Medellín y los pobladores y campesinos de los municipios de El Peñol y Guatapé también es un buen ejemplo de la actitud del Estado colombiano frente a este tipo de movimientos sociales. En el curso de este largo enfrentamiento se pusieron claramente de manifiesto la estrategia general de la respuesta gubernamental y las diferentes modalidades que ella puede asumir. Porque en lo que se refiere a la respuesta estatal no se puede hablar propiamente de etapas de un proceso sino mas bien de tácticas específicas empleadas de acuerdo con las necesidades de cada momento. Según se vió en este caso concreto, el Estado tiene la posibilidad de dar diferentes respuestas al movimiento cívico pero su objetivo general es siempre mantener el control político y social de la situación, evitar que el conflicto se salga de las manos de las autoridades y asegurar que permanezca en el marco de la legalidad vigente. La forma concreta que asuma la acción estatal dependerá fundamentalmente de la correlación de fuerzas interna del conflicto y de la coyuntura política nacional. Estos dos factores determinan en lo esencial que la respuesta del Estado sea la negociación, la represión o la manipulación compleja del movimiento cívico.

Un componente importante de la estrategia del Estado en el manejo de los movimientos cívicos es la separación de las responsabilidades entre varios agentes o aparatos gubernamentales. En el conflicto originado en la construcción de las obras de la Central del Nare la entidad estatal directamente involucrada fueron las Empresas Públicas de Medellín, responsables del proyecto. A ella correspondió manejar la mayor parte del tiempo las diferentes relaciones con los pobladores y campesinos de El Peñol y Guatapé. Pero, cuando el enfrentamiento

llegó a sus momentos mas álgidos y las Empresas Públicas perdieron el control de la situación, siempre intervinieron las autoridades del gobierno departamental. En varias ocasiones fué necesaria la mediación del Gobernador del Departamento y/o de sus secretarios para solucionar situaciones de "impasse" o para encontrar salidas negociadas cuando el conflicto llegaba a manifestaciones violentas. En un determinado momento se produjo incluso la participación del gobierno nacional, a través de uno de los ministros del gabinete presidencial, para dar respaldo a los funcionarios de las Empresas cuestionados ante la opinión pública. En general esta compartimentación de funciones y responsabilidades en varios niveles o aparatos estatales, le permite a algunos de ellos, y especialmente a los de más alta jerarquía, presentarse como representantes del "bien común" y por lo tanto como "neutrales" en el conflicto. En la medida en que el movimiento cívico no impugna al propio Estado, esta táctica resulta siempre eficaz.

Sin embargo, entre las modalidades de respuesta del Estado colombiano a los movimientos cívicos, una de las mas frecuentes es la represión. En materia de tratamiento de los movimientos sociales de este tipo, "el régimen político ha tomado la iniciativa con el fin de prevenirlo y desestimularlo y/o reprimirlo drásticamente. Estas políticas se han reflejado en la adopción de medidas en el terreno jurídico que limitan y castigan la promoción de los movimientos sociales" (Santana, 1983:169). El movimiento cívico de el Peñol y Guatapé no fué ninguna excepción a este respecto, mas aún cuando en el curso de su desarrollo atravesó por varias coyunturas en las que a nivel nacional predominaba una declarada política de represión de las movilizaciones populares. En especial durante el período 1976-1978 la agudización del enfrentamiento de los pobladores y campesinos con las Empresas Públicas coincidió con un importante auge del movimiento cívico en todo el país que fué respondido por los gobiernos de turno con una serie de decretos y medidas de



carácter legal y policial abiertamente represivas, entre las cuales destacaba el llamado "Estatuto de Seguridad". Amparadas en esta legislación del "Estado de Sitio", las autoridades municipales y departamentales ejercieron una dura represión sobre el movimiento cívico en estas dos localidades. Fue así como los pobladores y campesinos de El Peñol y Guatapé soportaron la amplia gama de acciones represivas que habitualmente ejerce el Estado colombiano contra el movimiento cívico: los decretos de toque de queda y ley seca, la militarización de las localidades, el allanamiento de domicilios, la detención preventiva de dirigentes cívicos, la disolución violenta de las marchas de protesta, los correspondientes saldos de heridos y lesionados en los enfrentamientos callejeros, los juicios sumarios contra activistas del movimiento, la destitución de funcionarios que apoyaban a los pobladores y, en general, la supresión de los derechos de expresión, organización y movilización.

Al lado de estas medidas represivas las autoridades utilizaron también ampliamente las tácticas de negociación en el manejo del conflicto originado en el Proyecto Nare. Esto es bien común en Colombia donde ante los paros cívicos "la actitud principal del Estado ha sido la represión y en segundo lugar los intentos de integración por negociación" (Carrillo, 1981:196). Dependiendo del tipo de demandas y de la fuerza del movimiento, el Estado se ve obligado muchas veces a hacer concesiones a los sectores populares que participan en la movilización cívica. Una alternativa viable para el manejo de situaciones conflictivas es en algunas ocasiones "la integración de las masas mediante la satisfacción de sus demandas" (Santana, 1983:196). Dada la complejidad de la problemática que lo motivaba y la larga duración del movimiento, en el caso de El Peñol y Guatapé se puede apreciar con todo detalle la estrategia de negociación del Estado y los diferentes mecanismos que implementa para llevarla a cabo. Gran parte del tiempo del conflicto transcurrió en el proceso de negociaciones. Allí fueron corrientes la instalación

de oficinas de reclamos, la contratación de expertos y centros de investigación para hacer el diagnóstico de la situación, el nombramiento de comités técnicos para el estudio de la problemática, la integración de juntas negociadoras, las rondas de conversaciones entre comisionados y la firma de toda clase de acuerdos, pactos, convenios y contratos. Un catálogo mas amplio de mecanismos de conciliación entre las partes en conflicto difícilmente puede encontrarse en otro movimiento cívico. En el municipio de El Peñol se desarrollaron incluso modalidades de negociación que, como el Contrato Maestro, pueden considerarse únicas en su género.

Así pues, las reacciones del Estado frente al movimiento cívico se orientan principalmente en el sentido de la represión o de la negociación. Pero, como lo señala Santana, estas "respuestas por parte de la autoridades gubernamentales suelen situarse en un amplio terreno de la ambigüedad. La experiencia demuestra a primera vista que la táctica mas recurrente del Estado consiste en postergar las demandas cívicas, en tratar de dividir a los portadores de las reivindicaciones, en agotar los esfuerzos de las comunidades y en amenazarlos con la represión. De hecho lo mas frecuente consiste en combinar estas tres posibles salidas y sólo hasta último momento y dependiendo de la coyuntura concreta y de la relación de fuerzas, se ve obligado a asumir una de las dos alternativas extremas: la concesión o la represión" (Santana, 1983: 169). Esta táctica de combinar diferentes respuestas fué realmente la que mas emplearon las Empresas Públicas de Medellín y las autoridades del departamento de Antioquia en el manejo del conflicto con los pobladores de El Peñol y Guatapé. Además de las medidas concretas de represión o negociación ya señaladas, utilizaron otra serie de tácticas de manipulación del problema que crearon grandes dificultades al movimiento cívico. Entre tales tácticas fueron frecuentes el ocultamiento o distorsión de la información sobre el proyecto, el control político de funcionarios municipales para favorecer los

intereses de las Empresas, las amplias campañas publicitarias para justificar las acciones realizadas, la insistencia en la importancia regional y nacional de las obras, la negociación sistemática de la participación de los pobladores en la toma de decisiones, la separación arbitraria de problemas relacionados, el desprestigio de los dirigentes cívicos, el estímulo a las diferencias internas en la base social, la manipulación de los medios de comunicación, la deformación de la imagen del movimiento ante la opinión pública y otras medidas por el estilo.

La posibilidad que tiene el Estado de dar varias respuestas al movimiento cívico, dependiendo de la correlación de fuerzas particular en cada caso y de la coyuntura en la que se enmarca, es claramente visible en el tratamiento diferencial que dieron las Empresas Públicas a las exigencias planteadas separadamente por los municipios de El Peñol y Guatapé. Mientras con el primero utilizaron principalmente las tácticas de negociación, con el segundo emplearon sobre todo la dilación, la evasión de responsabilidades y, en último término, la represión. Consecuentemente, fueron los pobladores de El Peñol los únicos que lograron negociar la firma de un importante y completo Contrato Maestro, así como la construcción de un buen número de obras de beneficio colectivo. Frente a los pobladores de Guatapé las Empresas mantuvieron siempre una intransigente actitud que las llevó a negar sistemáticamente la firma de un contrato similar al de sus vecinos y a incumplir con gran parte de sus obligaciones en materia de dotación de infraestructura urbana y servicios públicos.

##### **5.5. EFECTOS SOCIALES Y POLITICOS DE LAS MOVILIZACIONES**

A pesar de las notables diferencias entre los dos municipios, en general la movilización de los pobladores y campesinos de El Peñol y Guatapé logró superar en gran parte las

numerosas y graves consecuencias de la construcción del embalse y la central hidroeléctrica del río Nare; a través de una dura y larga lucha obligaron a las Empresas Públicas de Medellín a dar solución a múltiples problemas socio-económicos generados por su proyecto. En este sentido, el balance final de los resultados del movimiento cívico es efectivamente favorable para las dos comunidades locales. No obstante los perjuicios que tuvieron, los habitantes de ambos municipios lograron preservar una calidad de vida semejante a la que prevalecía anteriormente, llegando incluso a mejorarla en muchos aspectos.

En lo que respecta al municipio de El Peñol, los efectos sociales del movimiento cívico fueron los más positivos. Su principal logro fue la construcción de la nueva cabecera municipal que reemplazó al viejo pueblo inundado por el embalse. Aunque en el momento del traslado todavía presentaba gravísimas deficiencias para ser habitada, la lucha continua de los pobladores consiguió que las Empresas Públicas terminaran de construirla y la dotaran del equipamiento urbano y de los servicios públicos suficientes para permitir en ella una vida digna y de relativo bienestar. En el nuevo pueblo se levantaron, en efecto, más de 900 unidades habitacionales de diverso tipo que cubrieron gran parte de las necesidades de vivienda de la población y fueron entregadas en condiciones financieras más o menos adecuadas al nivel de ingresos de los diferentes sectores sociales. En la zona urbana se construyeron las obras civiles y redes necesarias para la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y energía eléctrica con amplia cobertura. La nueva cabecera municipal fue dotada además de un hospital de buenas especificaciones, una unidad educativa amplia y funcional, un centro administrativo con instalaciones apropiadas para la buena marcha del gobierno local y una unidad deportiva en condiciones aceptables. En cumplimiento del respectivo contrato, las Empresas Públicas también construyeron para la Parroquia un nuevo templo, casa cural y cementerio según las especificaciones

convenidas. Así, a pesar de que los diseños urbanísticos y arquitectónico rompían con las formas y estilos pueblerinos tradicionales y daban al nuevo pueblo una apariencia de unidad residencial de ciudad moderna, los pobladores pudieron disfrutar de una infraestructura urbana satisfactoria que con el tiempo modificaron y acondicionaron según sus hábitos de vida y costumbres más arraigadas. Gracias a sus esfuerzos el Nuevo Peñol resultó finalmente condiciones de habitabilidad superiores a las del antiguo pueblo y los niveles de vida de la población mejoraron sustancialmente.

Sin embargo, no todos los compromisos de las Empresas Públicas con el municipio de El Peñol en materia de equipamiento urbano y servicios públicos se cumplieron cabalmente. Varias obras de interés para los pobladores no fueron construidas o fueron entregadas sin terminar y sin la dotación de equipos adecuada. Entre los puntos acordados en el Contrato Maestro las Empresas Públicas incumplieron aquellos que estipulaban la construcción de una planta de tratamiento del agua que consume la población urbana, de un relleno sanitario para la disposición de basuras, de una plaza de mercado cubierta, de un centro comercial y artesanal, de una unidad deportiva cubierta y la pavimentación de la totalidad de las calles de la cabecera municipal. Todas éstas eran obras exigidas por los pobladores como una indemnización apropiada por los perjuicios causados con la inundación del viejo pueblo, pero que la empresa estatal se negó finalmente a construir por considerarlas "exageradas pretenciones" del municipio de El Peñol.

Aunque menos numerosas, también eran importantes las obras que se construyeron y quedaron pendientes en la cabecera municipal de Guatapé. Como allí la inundación sólo fué parcial, la magnitud de las compensaciones e indemnizaciones era mucho menor. A pesar de esto, las Empresas Públicas se negaron a construir muchas de las obras solicitadas por los pobladores

limitándose a aquellas que estrictamente reemplazaban las pérdidas causadas por el embalse. Con este propósito construyeron una nueva urbanización con cerca de 100 viviendas en la parte alta del pueblo, a la cual dotaron de las correspondientes redes de acueducto, alcantarillado y energía eléctrica. Además de esto entregaron al municipio las nuevas instalaciones de una escuela primaria y un colegio de bachillerato que antes estaban localizados en la parte inundada. Finalmente construyeron toda una serie de obras de protección de la zona urbana contra posibles desbordamientos de la represa, ya que la cabecera municipal quedó a sus orillas. Pero por fuera de esto se negaron sistemáticamente a construir otras obras de infraestructura y equipamiento urbano demandadas por los pobladores como indemnización. Así, en la cabecera municipal de Guatapé, sus habitantes se quedaron esperando la pavimentación de las calles, la remodelación del parque central, el traslado del cementerio, el relleno de una zona deprimida en el lado sur y otras obras de beneficio para la comunidad local.

Un resultado similar de atención parcial tuvieron las reivindicaciones del campesinado de los dos municipios. Puesto que su problema central era la escasez de tierras agrícolas ocasionada por la inundación de la mayor parte de las áreas bajas de la zona, la reivindicación principal era la dotación de nuevos predios de trabajo a las familias campesinas desalojadas. Para atender a esta demanda las Empresas públicas realizaron un programa de parcelaciones en diferentes veredas de ambos municipios que dotó de tierras a numerosas familias. Sin embargo, el programa no tuvo una cobertura de todos los damnificados y muchas otras familias quedaron sin su parcela, por lo que se vieron obligadas a emigrar a las cabeceras municipales de El Peñol y Guatapé así como de otros municipios vecinos. Otro importante problema no atendido suficientemente por las Empresas fué el de la vivienda rural. Con el embalse se perdieron cerca de 400 casas campesinas de las cuales mas de la mitad no fueron

reemplazadas. Se creó así un gran déficit habitacional en las veredas que no fué cubierto por la empresa estatal a pesar de las reiteradas protestas de los campesinos. En el aspecto de infraestructura y servicios públicos tampoco fueron satisfechas plenamente las demandas del campesinado. Aunque todas las escuelas rurales que se perdieron con la inundación fueron reemplazadas, no sucedió lo mismo con las vías de comunicación. Si bien se reconstruyó en gran parte la red de caminos de penetración, algunas veredas quedaron incomunicadas de sus respectivas cabeceras municipales, lo cual significó un grave obstáculo para la comercialización de los productos agrícolas. En definitiva, desde el punto de vista de los intereses particulares de los campesinos, el movimiento cívico de El Peñol y Guatapé fue menos exitoso de lo que representó para los pobladores.

Así pues, aunque el balance general de los resultados de este caso concreto de movilización de pobladores y campesinos es positivo, no todos sus objetivos se alcanzaron efectivamente. En particular es interesante de destacar las diferencias que se presentaron entre los logros obtenidos en los dos municipios. Esto es verdaderamente notable si se tiene en cuenta que se trataba de un único movimiento cívico puesto que sus acciones no sólo fueron contemporáneas sino que se originaron en un mismo contexto histórico, a raíz de una problemática común, contra el mismo adversario, por reivindicaciones casi idénticas y con formas organizativas similares. La explicación de las diferencias en los resultados sólo puede provenir entonces de la complejidad del movimiento que de hecho fué una dura y prolongada confrontación en la que a lo largo de sus etapas se presentaron circunstancias y coyunturas particulares que modificaban la correlación de fuerzas entre las partes en conflicto. El que el municipio de El Peñol hubiese resultado más favorecido se debe en gran medida a la circunstancia de que su zona urbana fué totalmente inundada y la posibilidad real de desaparecer como comunidad local hizo fuertes y estables las alianzas entre los

diversos sectores sociales del municipio que así pudieron presentar casi todo el tiempo un frente común ante las Empresas Publicas. Una alianza similar en la heterogénea base social del movimiento de Guatapé sólo se dió coyunturalmente y por ello la comunidad local no pudo ofrecer en forma permanente una sólida resistencia. Las Empresas aprovecharon esta situación para definir una política diferencial en el tratamiento de las dos comunidades que básicamente obedecía a la correlación de fuerzas que se presentaba en cada caso y en cada momento. Siendo mas inestable la oposición encontrada en Guatapé, la empresa estatal pudo maniobrar mas fácilmente en las negociaciones, cediendo en algunos puntos en discusión cuando el movimiento tomaba auge y se radicalizaba, pero recobrando terreno cuando entraba en reflujó y se debilitaba. Con El Peñol no fué posible emplear la misma estrategia porque desde un principio hizo amplias concesiones y después encontró siempre una fuerte resistencia de los pobladores y campesinos para desconocer los acuerdos. Una conclusión interesante que de este caso puede deducirse sería, entonces, que los resultados de un enfrentamiento prolongado no dependen tanto de la racionalidad de las acciones como de la estabilidad y fortaleza de las organizaciones de la base social.

Desde el punto de vista de los resultados obtenidos, el movimiento cívico de los municipios de El Peñol y Guatapé puede considerarse también bastante representativo del conjunto del movimiento cívico en Colombia. Los estudios que sobre este tema se han realizado encuentran siempre grandes dificultades al intentar medir globalmente la efectividad de esta forma de lucha de los sectores populares para alcanzar algunas reivindicaciones relativas a la defensa o mejoramiento de sus condiciones de vida. sin embargo, un primer balance general considera que la mayoría de los movimientos cívicos apenas logran en parte sus objetivos. Del seguimiento en prensa de los resultados de veintun paros cívicos, un estudio pudo concluir que "en algunas ocasiones las exigencias se cumplieron cabalmente, mientras que en otras solo



fueron respondidas parcialmente" (Ungar, 1981:51). Lo que el caso de El Peñol y Guatapé permite ver en detalle son la dinámica social y las circunstancias políticas que determinan que los logros de la movilización sean generalmente limitados. Pero este caso particular muestra igualmente que "un movimiento de protesta de este tipo implica costos muy altos no sólo para el gobierno, sino para la ciudadanía en general, por cuanto va acompañado de la paralización de actividades, y frecuentemente de destrucción material, uso de la violencia, represión y cárcel" (Ungar, 1981:58).

Por otro lado, entre los efectos del movimiento cívico deben considerarse también los cambios que producen a nivel político. A consecuencia de la movilización de pobladores y campesinos se produjeron importantes modificaciones en las relaciones de poder a nivel local. El resultado político más significativo fue la constitución de los pobladores y campesinos en verdaderas fuerzas sociales capaces de enfrentar exitosamente a la empresa estatal y a las propias autoridades del gobierno central. La nueva capacidad de presión de los habitantes de Guatapé quedó demostrada plenamente en varias oportunidades en las que lograron imponer el cambio del Alcalde Municipal y otros funcionarios adversos a su movimiento. En El Peñol el replanteamiento del poder local se tradujo en una pérdida de la influencia de los partidos tradicionales y el surgimiento de nuevos grupos políticos de base poblacional y campesina. El movimiento cívico originado en el Proyecto Nare representó así un amplio proceso de cambio social y político en las dos localidades.

Esto no significó, sin embargo, que el movimiento llegara a superar el marco de su problemática local y a plantearse nuevos objetivos de tipo social o político general. Durante todos esos años la lucha tuvo fundamentalmente un carácter reivindicativo y defensivo. Desde el punto de vista de los campesinos y pobladores se trataba apenas de defender sus condiciones de vida y de

trabajo tan seriamente amenazadas por las obras de la represa y de ofrecer una resistencia activa ante la agresión de que eran víctimas por parte de la empresa estatal. En general el movimiento cívico de El Peñol y Guatapé fué mas que todo un movimiento contestario; sus demandas y luchas nunca pasaron de ser una respuesta inmediata a los efectos negativos del Proyecto Nare o las arbitrarias actuaciones de las Empresas Públicas de Medellín. De acuerdo con la clasificación de las "luchas sociales" propuesta por Touraine, estas movilizaciones de pobladores y campesinos pueden considerarse apenas como "luchas críticas" pues efectivamente "sólo buscan defender al actor frente a una agresión que trata de desconocer sus derechos ya conquistados o desmejorar su posición dentro de un campo determinado" (citado por Giraldo y Camargo, 1985:34).

Este carácter crítico, defensivo y reivindicativo del movimiento de pobladores y campesinos de El Peñol y Guatapé es una clara expresión de la naturaleza de los movimientos cívicos en Colombia. Como en este caso particular, la gran mayoría de los movimientos cívicos se mantienen en el plano de las reivindicaciones inmediatas relativas a las condiciones de vida de la población en general y sólo en contadas ocasiones formulan abiertamente demandas de tipo político. Por ello, desde el punto de vista de la clasificación de modalidades de conflicto urbano propuestas en un principio, los movimientos cívicos no pueden considerarse mas que como luchas o movimientos reivindicativos generados a partir de las problemáticas urbanas y regionales que en las últimas décadas se han agudizado en el país. Según las definiciones adoptadas, no constituyen verdaderos movimientos sociales urbanos porque aún no alcanzan a desarrollar proyectos sociales y/o políticos alternativos al tipo de sociedad y Estado vigentes en Colombia, ni hasta ahora llegan a poner en cuestión la hegemonía de las clases dominantes.

Sin embargo, también es claro que, aunque no se lo propongan explícitamente, los movimientos cívicos producen de hecho importantes efectos sociales y políticos a través de la organización y la movilización de vastos sectores sociales. Esto es evidente en el caso de El Peñol y Guatapé, así como puede comprobarse si se examina con cuidado la mayoría de los movimientos cívicos en el país. En algunos casos, hasta el momento aislados pero que tienden a ser cada vez más frecuentes, la articulación entre la lucha social y política es abierta y explícita, poniéndose con ellos de presente una de las perspectivas que tiene el movimiento cívico. Pero ésta es apenas una tendencia que puede o no consolidarse según sea la dirección que tome el proceso político nacional. Por ahora sólo "se puede concluir que los movimientos cívicos constituyen un tipo de lucha social, que no podría ser caracterizada como un verdadero movimiento social, pero que en ellas se dan ciertos gérmenes que pueden desarrollarse en esa línea" (Giraldo y Camargo, 1985:39). El que la generalidad de estas luchas sociales lleguen a constituir un movimiento con capacidad real de transformación social dependerá de su dinámica interna y de la coyuntura política en la deberán actuar en el futuro inmediato.

#### REFERENCIAS

1. CARRILLO, Jaime : (1981), *Los paros cívicos en Colombia*, Bogotá, Editorial la Oveja Negra, 306 pp.
2. GIRALDO, Javier : (1985), "Inquietudes, planteamientos e interrogantes sobre los movimientos cívicos", Documento de trabajo, Bogotá, Editorial CINEP, 5 pp.
3. GIRALDO, Javier y CAMARGO, Santiago : (1985), *El Movimiento*

**Cívico en Colombia**, Documento de trabajo, Editorial CINEP,  
39 pp

4. SANTANA, Pedro : (1983), **Desarrollo Regional y Paros Civicos en Colombia**, Bogotá, Editorial CINEP, 207 pp.
5. UNGAR, Elisabeth : (1981), "Los Paros Cívicos en Colombia", Documento de trabajo, Bogotá, Universidad de los Andes, Departamento de Ciencia Política, 66 pp.